

ELACSO

ISSN: 1409-3677

Cuaderno de Ciencias Sociales

**Construyendo una
nueva forma de
entender el desarrollo
rural territorial**

**Tove Cristina Melin
Katherine Peters
Marcela González
Paulo Hidalgo**
Autores

Emilio Zevallos
Compilador

167

CUADERNO DE CIENCIAS SOCIALES 167

**CONSTRUYENDO UNA NUEVA FORMA
DE ENTENDER EL DESARROLLO
RURAL TERRITORIAL**

**Tove Cristina Melin
Katherine Peters
Marcela González
Paulo Hidalgo**
Autores

Emilio Zevallos
Compilador

CUADERNO DE CIENCIAS SOCIALES 167

CONSTRUYENDO UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER EL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL

**Tove Cristina Melin
Katherine Peters
Marcela González
Paulo Hidalgo**
Autores

Emilio Zevallos
Compilador



FLACSO
COSTA RICA

Sede Académica Costa Rica
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)



FLACSO
COSTA RICA

La serie de Cuadernos de Ciencias Sociales es una publicación periódica de la sede Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Su propósito es contribuir al debate informando sobre corrientes y temáticas de interés en las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales. Los contenidos y opiniones reflejados en los Cuadernos son los de sus autores y no comprometen en modo alguno a FLACSO ni a las instituciones patrocinadoras.

ISSN: 1409-3677

© Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO

Sede Académica Costa Rica.

San José, Costa Rica.

Sitio web: <http://www.flacso.or.cr>

Primera edición, octubre 2021.

Directora de FLACSO Costa Rica: Ilka Treminio Sánchez

Consejo Editorial: Cathalina García y Mauricio Sandoval

Producción editorial: Elissa Reyes Díaz

INDICE

| | |
|---|-----------|
| Nota introductoria: Construyendo una nueva forma de entender el desarrollo rural territorial | |
| <i>Emilio Zevallos</i> | 7 |
| Mujeres en defensa del territorio y el mar | 13 |
| <i>Tove Cristina Melin</i> | |
| Problema de investigación | 15 |
| Justificación de la investigación | 16 |
| Marco teórico | 17 |
| Identidad y género | 20 |
| Los movimientos sociales | 25 |
| Estrategia metodológica | 26 |
| Proceso de investigación | 28 |
| Resultados y discusión | 30 |
| Dinámicas sociales, políticas y de empoderamiento | 37 |
| Las mujeres de la lucha | 40 |
| Recomendaciones | 46 |
| Perspectivas campesinas ante la agricultura globalizada en Costa Rica: visiones diversas en una zona azucarera en Guanacaste, del 2015 al 2018 | 53 |
| <i>Katherine Peters</i> | |
| Introducción | 53 |
| Marco Teórico | 58 |
| Metodología | 68 |
| Resultados y discusión | 72 |
| Conclusiones y recomendaciones | 85 |
| La producción de guayaba en la comunidad de Río Grande de Paquera: problemas y oportunidades | 93 |
| <i>Marcela González</i> | |
| Introducción | 93 |

| | |
|--|-----------|
| Marco Teórico | 96 |
| Metodología e investigación | 105 |
| Resultados y discusión | 111 |
| Conclusiones y recomendaciones | 135 |
| | |
| La construcción socio institucional del hábitat y sus implicaciones en el desarrollo rural territorial: los casos de los proyectos habitacionales de La Rosalía III y El Huaso en el Cantón Aserri, 2015-2018 | 93 |
| <i>Paulo Hidalgo</i> | |
| Introducción | 143 |
| Marco Teórico | 146 |
| Metodología | 154 |
| Resultados y discusión | 158 |
| Conclusiones y recomendaciones | 171 |

Nota Introdutoria

CONSTRUYENDO UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER EL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL

Emilio Zevallos

El objetivo de esta nota es introducir las tesis de la Maestría en Desarrollo Rural Territorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Sede Académica Costa Rica. Los trabajos abordan el desarrollo rural a partir de diversos temas, enfoques y perspectivas de análisis.

Lo anterior es particularmente crucial en momentos en los cuales el desarrollo rural territorial atraviesa una etapa de definiciones fundamentales. La pandemia ha puesto de manifiesto algunas limitaciones del modelo económico prevaleciente y ha hecho visibles las grandes potencialidades existentes en los entornos locales de la región. En ellos, además se percibe con mayor claridad el concepto de desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental. De modo que, en los procesos de desarrollo endógeno, frecuentes en el ámbito rural, se hallan varios elementos clave para el análisis de los problemas y las oportunidades surgidas en los territorios.

El desarrollo rural territorial es, sin duda—como se señala en uno de los artículos presentados en esta ocasión—, el resultado de la combinación de condiciones para el desarrollo; tales como el liderazgo de las autoridades locales (públicas, privadas o de la sociedad civil), la labor de un grupo multidisciplinario (recursos humanos) con ideas y autonomía y apoyado por autoridades locales, la presencia de recursos financieros asignados a un ente territorial, y el poder de decisión y la capacidad de negociación de los actores involucrados.

De acuerdo con una perspectiva más amplia, una política de desarrollo territorial requiere de una vasta participación ciudadana y la presencia de elementos que configuren un denominador común, el cual defina a las comunidades involucradas dentro de un mismo territorio, pero sin anular particularidades de cada una. El éxito de este tipo de acciones depende de entender los entornos nacional, regional y local, así como de un alto grado de cohesión social favorable para la continuidad de las políticas, más allá de los cambios administrativos.

Entender y aportar al diseño y ejecución de políticas en los territorios es la razón de ser de la Maestría de Desarrollo Rural Territorial de Flacso, Sede Académica Costa Rica. Su remozado programa busca fortalecer las competencias de las y los distintos involucrados en los procesos de desarrollo rural (actores públicos, privados y de la sociedad civil) al ofrecerles tanto una visión integral del progreso de la zona como elementos que contribuyan a mejorar proyectos específicos, así como también para el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas específicas. Para lograr su objetivo, el programa tiene un enfoque basado en tres elementos básicos: la acción colectiva, las políticas públicas y el entendimiento y manejo de herramientas.

El primero de ellos, la **acción colectiva**, pesa significativamente en el éxito de modelos de desarrollo local. Varios de los trabajos presentados lo manifiestan; además, señalan el papel fundamental de la organización para visibilizar problemas y proponer y desarrollar soluciones. En ese sentido, una finalidad que caracteriza a la mayoría de organizaciones es la de proteger los intereses de sus miembros. Se espera que las instancias favorezcan intereses comunes; como el interés de una comunidad para mejorar la infraestructura, el desarrollo de un proyecto, el deseo de los ciudadanos por un buen gobierno, etc.

Aparentemente, no tendría sentido contar con una entidad en caso de que la acción individual no organizada funcione igual o mejor que la institución. Sin embargo, y aunque ello no es frecuente en los territorios, tampoco es desconocido. Si bien existen intereses individuales en lo local, la evidencia presentada en este libro muestra la superioridad de las soluciones colectivas frente a las individuales. Por ello, las organizaciones pueden y deben desempeñar una función relevante

cuando hay intereses comunes. Aunque con frecuencia también sirvan a intereses puramente personales, su función característica y primordial es fomentar los intereses compartidos por los grupos.

El segundo elemento tiene que ver con la perspectiva moderna de las **políticas públicas**. Este tópico se desarrolló ampliamente hasta mediados de la década de los ochenta, momento en que se incorporó como parte de la temática del ajuste económico y las reformas estructurales. En general, hay trabajos desarrollados por temas (desarrollo agrícola, industrial, energía, servicios, etc.), sectores institucionales (políticas educativas, ambientales, regionales, sociales, etc.), modalidades de desarrollo y acción estatal, participación privada y de la sociedad civil, y las consecuencias económicas y sociales de distintos tipos de intervenciones, o bien de elementos externos al territorio, entre otros. Para el desarrollo rural, las políticas públicas juegan un rol significativo debido al uso de herramientas interdisciplinarias que vinculan la economía, la sociología, la ciencia política, el derecho, etc.

La incorporación por parte de la sociología moderna del concepto de racionalidad (elección racional) superó la vieja idea de los sociólogos de analizar problemas sociales separándolos de los factores económicos, así como, en muchos economistas (como Hirschman, Williamson, Arrow, Sen, Solow, Schelling, etc.), dejó atrás la idea de analizar problemas económicos abstrayéndolos de las fuerzas sociales.

En ese sentido, los enfoques empleados habitualmente en el análisis de las políticas públicas, en líneas generales, se mueven entre dos extremos:

- los que analizan las políticas públicas territoriales como un medio para dar cuenta de las características del sistema político y las estructuras del poder territorial. Estos se vinculan al estudio de los procesos políticos en general, como los sistemas de partidos, los regímenes políticos, las formas de dominación en los territorios, etc.;
- los que analizan las políticas públicas sobre una base marcadamente técnica (microeconómica), fundamentados en una lógica de optimización de resultados y bajo la hipótesis de actores racionales. En este esquema, se trabaja sobre escenarios planteados (problemas territoriales, grupos

de presión, coyuntura política, etc.), y sobre ellos se desarrollan las alternativas pertinentes, bajo el marco determinado por el entorno.

Aunque ambas perspectivas son válidas para el desarrollo rural territorial, el énfasis de este programa de maestría y especialización se inclina más por el segundo enfoque. En este sentido, es particularmente significativo el examen de los procesos de inclusión de un problema en el ámbito público: el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. En ese sentido, resulta relevante entender las acciones (o inacciones) promovidas —por ejemplo— por el gobierno local y sus instituciones en relación con los ámbitos social, político, económico, educativo y cultural, ya sea como respuesta a demandas originadas en esos entornos o como anticipación a la presencia de demandas. En este punto estriba la diferencia entre un gobierno local de tipo “bombero” (dedicado a apagar incendios, es decir, a aplacar las demandas), y uno “patrullero” (en permanente vigilancia con el fin de resolver pequeños problemas y así evitar que crezcan) (McCubbins y Schwartz, 1984).

El enfoque de políticas públicas del programa de Maestría en Desarrollo Rural Territorial se propone analizar cómo y por qué un determinado asunto se convierte en un objeto público, quiénes y cómo participan en la definición de la cuestión y cómo se traslada una situación particular a la propuesta de una política pública, su proceso de elaboración e implementación.

El tercer elemento es el relacionado con el **desarrollo de instrumentos** de investigación. Se presentan herramientas para poner en marcha acciones en el ámbito rural, como la modelación de actores (su racionalidad, objetivos, alternativas, consecuencias de sus acciones, elección y resultados), así como para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos a desarrollar; modelos formales de decisión, modelos de delegación, etc.

Se incluyen también insumos para el diseño de proyectos específicos en distintos ámbitos, desarrollo de presupuestos, asignación de responsabilidades, tiempos, plazos y metas, etc. La propuesta metodológica busca dotar de recursos para ejecutar acciones de carácter microeconómico en los territorios, hasta el diseño e implementación de una política de desarrollo rural específica.

Bajo esa estructura, se enmarca el programa de la Maestría en Desarrollo Rural Territorial. Las investigaciones presentadas a continuación son el resultado de la síntesis de cinco tesis desarrolladas en Flacso Costa Rica, entre el 2018 y el 2019. Ellas muestran con nitidez la complejidad y multidisciplinariedad de los problemas del desarrollo rural territorial, y resuelven con particular elegancia y solidez los dilemas que cada estudiante atravesó durante el posgrado.

Tove Melin, en su trabajo “Mujeres en Defensa del Territorio y el Mar”, muestra los dilemas de un grupo de mujeres habitantes del istmo de Tehuantepec (México), quienes están en contra de un proyecto eólico que perturba la paz de varias comunidades dedicadas a la pesca y la agricultura. Por medio de un conjunto de entrevistas en profundidad, visibiliza tres elementos centrales en su investigación: la construcción identitaria del feminismo, los movimientos sociales y el desarrollo rural territorial.

Katherine Peters explora las perspectivas campesinas en su aporte: “Perspectivas campesinas ante la agricultura globalizada en Costa Rica: visiones diversas en una zona azucarera en Guanacaste, del 2015 al 2018”. Toma el caso de la caña de azúcar con el fin de entender al campesinado, su integración a la economía, sus sentimientos sobre la vida del campo y los cambios que el modelo económico ha suscitado en su entorno.

Por su parte, Marcela González recoge el impacto de una experiencia productiva en su investigación “La producción de guayaba en la comunidad de Río Grande de Paquera: problemas y oportunidades”. Hace un acercamiento a la realidad de un territorio económicamente deprimido, pero donde la producción de guayaba y sus derivados se convierte en una oportunidad de crecimiento económico e impacto social, debido a sus capacidades endógenas. Asimismo, apunta a la construcción de relaciones entre actores económicos y a un análisis del contexto. Aunado a lo anterior, propone un conjunto de alternativas para el desarrollo y la continuidad de la actividad productiva.

Finalmente, Paulo Hidalgo plantea una visión desde el hábitat y sus implicaciones en el desarrollo territorial en “La construcción socioinstitucional del hábitat y sus implicaciones en el desarrollo rural territorial: los casos de los proyectos habitacionales de La Rosalía III y El Huaso en el cantón de

Aserri 2015-2018”. Por medio de estudios de caso, examina, por un lado, la problemática de comunidades removidas de sus hábitats para la construcción de una carretera y, por otro, cómo el proceso incidió en la calidad de vida de las familias reubicadas. En el planteamiento sobre el hábitat, cuestiona si el proceso no solo es útil para mejorar las condiciones de vida de la población, sino si es posible propiciar una mayor participación y empoderamiento de los ciudadanos como protagonistas de su desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

- McCubbins, M. y Schwartz, T. 1984. Congressional oversight overlooked: Police patrols versus fire alarms. *American Journal of Political Science* 28, no. 1: 165-179.
- Mueller, D. 1989. *Public Choice III*. Cambridge University Press.

MUJERES EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y EL MAR

Tove Kristina Melin

INTRODUCCIÓN

Este estudio se centra en los movimientos sociales y los estudios de género, especialmente en la construcción identitaria de las mujeres implicadas en la acción colectiva. Se pretende, por un lado, comprender cómo su actuar impacta sus vidas y, por otro, dar voz a sus experiencias, motivos y aportaciones.

México constituye una realidad social compleja con una larga historia de resistencia campesina e indígena. Las mujeres indígenas integran varios movimientos sociales y han liderado debates fundamentales para los derechos indígenas (Blackwell, 2012). Hay numerosos estudios sobre diferentes movimientos sociales del país, pero frecuentemente carecen de un enfoque femenino. Debido a las estructuras discriminatorias y los roles de género, las mujeres parten de otras perspectivas sobre los problemas y los sucesos, y sobre sus sociedades en general. Así pues, las investigaciones deben tomar en cuenta estas experiencias de modo desagregado.

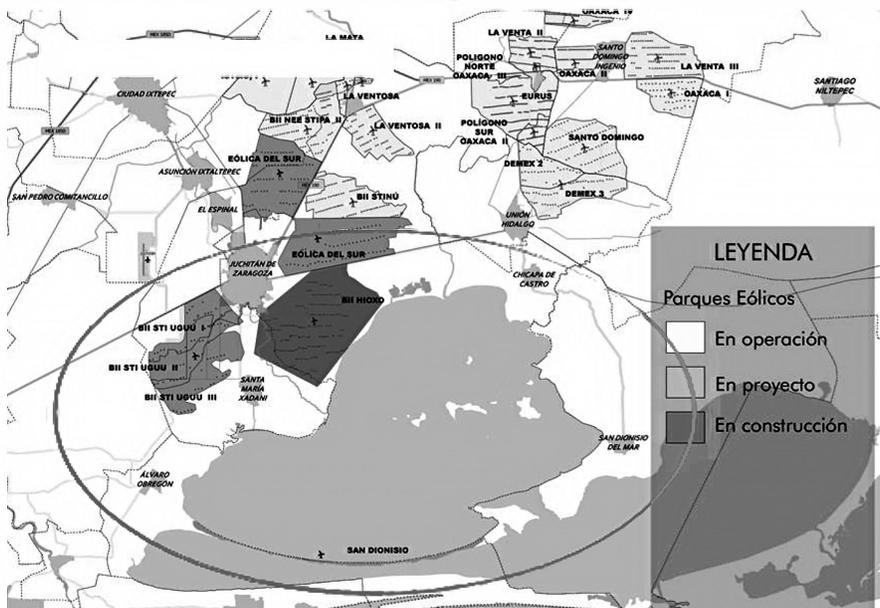
El énfasis del estudio radica en la participación de las mujeres en un movimiento campesino e indígena, mixto, del istmo de Tehuantepec, México, que lucha por la autodeterminación de su territorio en el marco de un proyecto internacional de energía eólica. Se trata de un parque de turbinas eólicas en una barra arenosa —llamada barra de Santa Teresa—, que divide la Laguna Superior¹

1 La parte del mar que se utiliza por los pueblos estudiados para la pesca artesanal.

de la Laguna Inferior. La investigación toma lugar en dos comunidades afectadas por el proyecto eólico: Álvaro Obregón (pueblo zapoteca) y San Dionisio del Mar (pueblo ikojts), situadas en el territorio mareño del Istmo (mapa 1).

El movimiento se denominará *movimiento antieólico*, al igual que otros términos utilizados por las mujeres entrevistadas (*lucha, resistencia, defensa*). La resistencia reside en la percepción de que el parque implica una amenaza para la subsistencia alimenticia y económica de la zona y sus tradiciones. Su sistema económico depende de la agricultura y la pesca, tanto para el autoconsumo como para la venta (Acosta Márquez, 2007; Nahmad, Nahón y Langlé, 2014).

MAPA 1. Territorio delimitado para el estudio



Fuente: Diego Quintana (s. f.).

Las amenazas descritas son, entre otras, ocupación de terrenos, vibraciones y contaminación por fugas de aceite (Diego Quintana, 2015). El proyecto eólico fue una iniciativa de una empresa española llamada Mareña Renovables², cuestionada por su falta de información y negociación justa con respecto a las poblaciones afectadas, y también por el descuido del territorio (Juárez-Hernández y León, 2014; Nahmad *et al.* 2014).

En el 2016, el territorio tenía la mayor concentración de parques eólicos terrestres a escala mundial (Howe y Boyer, 2015), con más de 1000 aérogeneradores (Diego Quintana, 2015) en 21 parques. La mayoría de ellos son manejados por empresas internacionales (Juárez-Hernández y León, 2014). El movimiento estudiado es considerado como la resistencia contra la imposición de una lógica neoliberal y una “neocolonización” del territorio (Muñoz Ramírez, 2015-06-13; Colectivo KoLibrI, 2013; comunicación personal con Ivonne, 2015; entre otros). La tesis se llevó a cabo desde el 2012 (inicio de la lucha) hasta mayo del 2016 (final de la investigación de campo).

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Cada sexo vive diferentes experiencias; no obstante, las voces de las mujeres tienden a perderse cuando hay mayor representación de voces masculinas (Horn, 2013). Este estudio pretende conocer mejor las experiencias femeninas a partir de la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los impactos en las vidas de las mujeres que participan en el movimiento antieólico derivados de las circunstancias sociales, culturales, políticas, económico-productivas y ecológicas generadas a partir de la llegada de la empresa eólica, así como del involucramiento de las mujeres en dicho movimiento?

El objetivo general es comprender cómo las circunstancias sociales, culturales, políticas, económico-productivas y ecológicas de la llegada de la empresa eólica, así como el involucramiento en el movimiento antieólico, han marcado las vidas de las participantes en dicha resistencia. Los objetivos específicos profundizan en distintos niveles el fenómeno señalado y están interrelacionados:

2 Ahora: eólicas del sur.

1. Describir la trayectoria de la lucha desde la perspectiva de las mujeres participantes de las dos comunidades. Se revisa la perspectiva de las mujeres entrevistadas sobre la lucha: cuáles aspectos fueron los más importantes, y el contexto de la resistencia.
2. Comprender los motivos para su participación en la resistencia contra los parques eólicos. Se revisan los motivos de las mujeres para decidir participar; qué informan sobre sus vidas, sus relaciones con el territorio y sus visiones.
3. Comprender cómo la participación de las mujeres en el movimiento antieólico ha afectado sus posiciones sociales y políticas en el marco de su posible empoderamiento en el territorio. Se describe de qué forma la participación ha cambiado las vidas de las mujeres desde su propia perspectiva, cómo su presencia fue percibida en la comunidad, *cómo sus relaciones con los paisanos se han transformado*, cómo perciben sus papeles sociales, su posible empoderamiento sociopolítico y las circunstancias relacionadas.
4. Comprender cómo las experiencias de la lucha y el involucramiento en el movimiento antieólico se relacionan con la construcción identitaria de las mujeres participantes. El acercamiento al objetivo más profundo, subjetivo y complejo ocurre con plena conciencia de que no es posible abordar exhaustivamente la construcción identitaria. Se ahonda en las narrativas sobre la lucha para entender mejor las implicaciones de la resistencia en las vidas de las mujeres.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio brinda una narrativa amplia y profunda sobre las vidas de las mujeres en torno a su vinculación en el movimiento antieólico. Examinar la participación política informal y la resistencia frente a actividades e ideologías contrarias a las mujeres rurales e indígenas tiene valor tanto académico como empírico.

El desarrollo rural territorial considera varios aspectos de las vidas de quienes habitan la zona rural, como la economía, la producción, la política, el medioambiente, la cultura y la identidad (Ecadert, 2010). Las mujeres siempre

han asumido una triple carga en la sociedad: **el trabajo reproductivo, el funcionamiento de las familias** y el hogar y **la participación en las actividades económicas** (CEDRSSA, 2014). Son agentes fundamentales para el desarrollo sustentable (ONU Mujeres, 2015) debido a su contribución a la agricultura, la crianza, la educación y el emprendimiento. Además, aseguran la alimentación de sus comunidades (Montoya, 2016).

Pese a lo anterior, las mujeres son consideradas sujetos pasivos (Tepichin Valle, 2015). Por su parte, la triple carga limita su participación en la política formal (Burin, 1996). Por tal motivo es importante resaltar la agencia de ellas en los ámbitos políticos y públicos alternativos, como argumento contra la percepción errónea acerca de su incapacidad.

En el istmo de Tehuantepec, las mujeres tienen un rol esencial en la economía de las familias y en la vida cultural, pero dependen a gran escala de la producción de alimentos (Colectivo KoLibriI, 2013). De esta manera, la actividad eólica supone una amenaza contra ciertas tradiciones y el papel social de las juchitecas. Un movimiento social no aparece sin que haya un interés o un fin común concreto; por lo tanto, a través de él, es posible entender los deseos y temores de las mujeres, las percepciones de sus realidades y sus visiones para el futuro.

MARCO TEÓRICO

Desarrollo rural territorial

El enfoque territorial del desarrollo ayuda a comprender las dinámicas socioecológicas que figuran dentro de determinados espacios rurales en los países latinoamericanos. El Consejo Agropecuario Centroamericano (2010) expresa que el desarrollo rural territorial (DRT) “es un proceso de transformación paralelo y entrelazado de las dimensiones económica, institucional, social, cultural y ambiental de los territorios rurales [...]. Esto con el fin de contribuir a la cohesión social y territorial, tanto nacional como transfronteriza y al bienestar social y económico de la gente vinculada a los territorios” (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010: 18).

A continuación, se expondrán los conceptos que constituyen el DRT de modo desagregado.

Desarrollo

El concepto de *desarrollo* es entendido como multidimensional, y en los estudios antropológicos eso implica reconocer una complejidad social de interacciones entre diferentes ámbitos. Resulta imperativo determinar el tipo de desarrollo, de quién debería provenir y para quién deberá estar dirigido.

Es fundamental partir de la realidad social percibida por los sujetos estudiados, con una visión constructivista y con la convicción de que el desarrollo se debe definir y ejercer en función de quien lo vaya a gozar. En otras palabras, precisa incorporar una visión de desarrollo endógeno. Además, el estudio toma lugar en un territorio principalmente indígena, lo cual implica contemplar sus derechos particulares respecto al ejercicio de los usos y costumbres (UyC)³ frente al Estado.

El desarrollo endógeno como herramienta para el empoderamiento de los pueblos indígenas ha sido denominado *etnodesarrollo* por varios investigadores. Bonfil Batalla (1995) ha caracterizado el etnodesarrollo como “el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones” (Bonfil Batalla, 1995: 467).

Territorio rural

Para la definición de *rural* se considera oficialmente en México un límite de 2500 habitantes en una aglomeración designada para delimitar lo rural de lo urbano. Esa concepción propone a la ruralidad en contraste con la urbanidad

3 Véase la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2, A I-VIII y B IX del *Capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías*, y artículo 27, VIII del mismo capítulo. Precisa consultar, además, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (número 169) de la OIT, artículo 6.

(Villalvazo *et al.*, 2002), y no refleja las constantes interacciones entre campo y ciudad. En el territorio estudiado, dicho intercambio —tanto de comercio como de educación y relaciones sociales— es muy destacable. La ciudad de Juchitán es un punto de encuentro significativo para las comunidades circundantes, en función de centro comercial, con su mercado floreciente, y un sitio para reuniones entre las organizaciones de resistencia de los diferentes pueblos.

Un territorio también constituye mucho más que un espacio geográfico. Lefebvre (1991) en Oslender (2002) define los territorios como “espacios de representación”: espacios sociales que representan formas de conocimientos endógenos y que son construcciones dinámicas de los propios habitantes, para los cuales guardan valores simbólicos y están llenos de significados.

El territorio, para la gran mayoría de los pueblos indígenas en Oaxaca, es clave para el etnodesarrollo, ya que para ellos el concepto de desarrollo se encamina hacia el bienestar común. Se resaltan dos actividades entre las prácticas comunitarias de los pueblos estudiados para el etnodesarrollo: el tequio y la ayuda mutua interfamiliar. El tequio se trata del trabajo comunitario para el beneficio de la sociedad, vinculado mayormente con la construcción, reparación y mantenimiento de los espacios públicos (reparaciones de calles o edificios, por ejemplo) y de las herramientas de trabajo (como redes para la pesca, entre otras).

Las mujeres no participan en el tequio, pero ellas también se encargan de actividades de apoyo mutuo, sobre todo en las fiestas, donde tienen la responsabilidad conjunta para las comidas. El trabajo comunitario afecta a las familias enteras (y también su destrucción en los casos del desmontaje de las labores colectivas). Por lo tanto, es relevante tomar en cuenta el aspecto del tequio en contraste con el pensamiento occidental de desarrollo. Incluso, la palabra *desarrollo* tiende a utilizarse como la antítesis frente al tipo de sociedad deseada, debido a que se enlaza directamente con proyectos neoliberales.

Todas las culturas madre de México utilizaban ese sistema de organización comunitaria en tiempos prehispánicos; sin embargo, desde la llegada de los conquistadores españoles la tradición se ha reducido significativamente en varias partes del país. No obstante, en algunos sitios, las formas tradicionales

de convivir se mantuvieron relativamente fuertes (León Vargas, s. f.). El istmo de Tehuantepec es uno de ellos. Además, son comunes los ejidos: terrenos parcialmente privados —parcelas individuales dentro de un terreno comunal—, los cuales conforman un proyecto del gobierno para poder clasificar las tierras comunales como productivas, puesto que son catalogadas como improductivas.

Para los pueblos originarios, el territorio es fundamental respecto a su identidad cultural. Dentro de su cosmovisión, el valor de la tierra “va más allá de producir o no, ya que es la madre de los pueblos, porque en ella viven. Por tanto, se le otorga tanto respeto y se considera que se le debe cuidar, pues la madre tierra es generosa” (León Vargas, s. f.). En este contexto, los parques eólicos en el istmo “simbolizan la desposesión territorial, la erosión de sus formas y mundos de vida y de su autonomía, el sometimiento a los discursos e intereses de actores externos a la región y sus comunidades” (Diego Quintana, 2015).

IDENTIDAD Y GÉNERO

La construcción de identidades es un proceso complejo y en constante transformación. El contexto sociocultural y las interacciones son decisivos (Espinosa y Zarur, 2012) en este procedimiento, el cual debe ser considerado necesariamente colectivo. Las identidades se construyen a través de símbolos interpretados por medio de valores y significados. El género es uno de los aspectos fundamentales de la identidad, debido a su construcción social y simbólica. Funciona como clasificador de significados y es “una de las relaciones fundamentales del orden social” (Espinosa y Zarur, 2012). No obstante, la autoconstrucción de la identidad no debe ser interpretada como un proceso consciente, por ese motivo Montecino (1996) prefiere llamarla una *experiencia* en vez de una *consciencia*.

Las experiencias se interpretan por los esquemas de género y, en ellos, el género masculino es considerado representativo o “neutral”. Por esa razón, resulta crucial resaltar las experiencias de las mujeres, para que su perspectiva no sea excluida en los discursos colectivos. La construcción identitaria es clave para el presente estudio, por ser uno de los componentes principales de su objeto general.

El género en la construcción identitaria

El género, según Marta Lamas (1994), es “el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye características ‘femeninas’ y ‘masculinas’ a cada sexo, a sus actividades y conductas, y a las esferas de la vida” (Lamas, 1994: 8). Lagarde expresa que las mujeres latinoamericanas se encuentran en un contexto de sincretismo de género; es decir, cumplen con roles tanto *modernos* como *premodernos*, o tradicionales, y argumenta que dichas condiciones contradictorias están presentes “en la sexualidad, el amor, la vida doméstica y la vida pública, el trabajo y las maneras de participación” (1999).

A pesar de que la discusión sobre esa diferencia entre los roles provenga de teorías que analizan la condición de las mujeres mestizas, también aplica para las mujeres indígenas. Las mujeres istmeñas tienen la fama de ser emprendedoras y económicamente activas; sin embargo, a la vez, tienen la responsabilidad del cuidado del hogar. Lagarde (1999) recuerda que la doble jornada de las mujeres no implica solamente tener dobles tiempos de trabajo, sino que se trata de vivir una doble vida simultáneamente, ya que “las normas y los códigos de comportamiento de cada espacio [social] y cada relación son diferentes, contradictorios y conflictivos” (Lagarde, 1999: 6).

A pesar de que muchas mujeres participan en actividades públicas y económicas, su rol en el hogar es incuestionable. Es importante recordar que las visiones mencionadas provienen principalmente de los hombres e hijos, por lo que la “naturalidad” del trabajo doméstico no necesariamente corresponde a la percepción de las propias mujeres. No obstante, está muy arraigada en la sociedad y, pese a ser conscientes de sus propios esfuerzos, ellas no refutan esa responsabilidad. En palabras de Marcela Lagarde (1999): la servidumbre doméstica se ha convertido en una virtud de género.

Precisa problematizar la disminución de los papeles públicos de las mujeres debido a la división de roles. Mabel Burin, investigadora en género y psicoanálisis, explica que, al estar enfocadas en la familia y el hogar, la esfera social de las mujeres disminuye y muchas veces pierden perspectivas sobre la sociedad (1996). Además, Lamas (1995) argumenta que la obligación

doméstica de las mujeres implica un obstáculo para el acceso a la participación en la vida pública, e impide ejercer su ciudadanía y poder político.

Marta Lamas es una de las autoras feministas que se ha enfocado en el rol materno como identidad femenina. En un escrito sobre los mitos de la madrecita santa, explica que la imagen sobre las madres supone el cumplimiento de un rol imposible de ejercer.

El mito de la madre es el mito de la omnipotencia materna surgida del amor incondicional, de la abnegación absoluta y del sacrificio. (...) Como siempre sucede, el mito recoge cuestiones reales —las madres suelen ser abnegadas, generosas y amorosas— y también encubre aspectos negativos o contradictorios. Si desmitificamos la imagen de la “madrecita santa”, encontramos a madres agotadas, hartas, golpeadoras, ambivalentes, culposas, inseguras, competitivas o deprimidas (Lamas, 1995: s/d).

Las mujeres juchitecas están sujetas a numerosos mitos e ideas acerca de su femineidad, sexualidad y en relación con el supuesto dominio matriarcal de la sociedad zapoteca. Esto ha generado admiración por su independencia y carisma, pero también ha suscitado una reputación degradante acerca de su comportamiento social y sexual (Taylor, 2006). Sin embargo, más adelante se explicará que hay pautas de comportamiento y roles de las mujeres entrevistadas que, paralelamente a la independencia femenina, también corresponden al modelo tradicional de la división de los géneros.

El feminismo latinoamericano e indígena

La historia latinoamericana es compleja y contradictoria, pero con experiencias compartidas. El feminismo latinoamericano ha surgido y crecido como respuesta a la influencia del colonialismo y a las pautas discriminatorias presentes en las sociedades latinas poshispánicas. En esa línea, Lagarde habla del “éxito del capitalismo en la destrucción de las culturas locales (la llamada globalización)” (1999).

Algunos estudios han demostrado que hay dos imaginarios colectivos contrastantes en torno a las mujeres indígenas en México en general y también

en Oaxaca en particular (Newdick, 2006; Altamirano Jiménez, 2013). Por un lado, existen las tendencias de victimización de las mujeres indígenas, como sujetos subordinados sin posibilidad de participar en los espacios formales de política y discriminados por múltiples factores. Newdick (2006) rescata que esa imagen tiende a ser utilizada por las mismas mujeres indígenas en situaciones de juzgado de justicia, para aumentar la credibilidad de su inocencia.

En contraste, muchos han denominado a las juchitecas matriarcas por sus posiciones dominantes en la sociedad zapoteca y su participación activa. No obstante, Altamirano Jiménez (2013) argumenta que esa romantización de la sociedad matriarcal encubre la violencia y la discriminación existente contra las mujeres juchitecas. Aunque la sociedad zapoteca se centra en las mujeres y su poder económico, estas carecen de representación en la política pública, la división de labores y la responsabilidad cultural. Lo anterior ocasiona que las juchitecas tengan representación principalmente en la esfera doméstica, la cual no goza del mismo valor que en el área productiva o la de gobernación (Altamirano Jiménez, 2013).

Identidades colectivas y marcos de acción colectiva

Hemos progresado hasta reconocernos a nosotros mismos como pueblos y culturas indígenas con derechos y obligaciones que se tienen que ejercer y respetar; con territorios y tierras que defender; con conocimiento, tecnología y recursos para compartir y reconocer. (...) Hemos reivindicado ser reconocidos, no como tribus, minorías o grupos étnicos, sino como pueblos y culturas. (Rivera Zea, 2000: 35).

Dentro de los movimientos sociales, existen varias identidades colectivas. La identidad colectiva se distingue de la identidad individual en varios aspectos. La individual hace referencia a la autopercepción de un individuo. En cambio, la colectiva debe entenderse como una identidad negociada entre un grupo de individuos. Aunque un grupo social se define justamente por un “atributo de ‘similitud’ entre sus miembros vis a vis con lo diferente” (Bokser Liwerant, 2008), sus integrantes poseen concepciones propias de la realidad e intereses propios.

Por eso la identidad colectiva requiere de cohesión social. Por su parte, la exclusión social de una agrupación particular puede promover la cohesión, o fortalecerla. Maylei Blackwell (2012) argumenta que la opresión sistemática contra los grupos indígenas en México ha contribuido a la construcción de una identidad alternativa, a partir de la cual ellos reivindican sus derechos como pueblo, a pesar de sus diferencias territoriales.

La identidad colectiva se construye generalmente por una élite de un determinado grupo y, por tanto, representa intereses particulares. Robert Benford problematiza lo anterior y postula que los estudios de los movimientos sociales suelen enfocarse en el discurso creado por líderes, lo que ocasiona un sesgo “desde arriba hacia abajo” (Benford, 1997).

Muy ligados a lo expuesto anteriormente están los marcos de acción colectiva, los cuales, para Snow y Benford (1992), se deben definir como un esquema interpretativo “que simplifica y condensa el ‘mundo afuera’ mediante la puntuación y codificación de objetos, situaciones, eventos, experiencias y secuencias de acción dentro del presente o pasado de un sujeto” (Snow y Benford, 1992: 137).

Según los autores, la resonancia de los marcos en los actores clave para la movilización es fundamental. No obstante, se ha argumentado que los movimientos muchas veces fallan en su reconocimiento y articulación de la diversidad respecto a sus miembros (Horn, 2013). Por lo mismo, es posible reparar en que la participación de las mujeres en un movimiento no necesariamente significa que tengan poder en la toma de decisiones o una posición de liderazgo político (Shalmali Guttal, 2012, citada en Horn, 2013). Marcela Lagarde (1999) sostiene que muchas veces “a nombre de metas colectivas o por intereses de grupo [...] se omite la *causa oculta* o visible de cada mujer”, aunque a veces la misma participación de las mujeres en un movimiento se usa para reivindicar que ellas estén satisfechas con su enfoque (Horn, 2013).

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Resistencia indígena en México

En las últimas décadas, los cambios estructurales de las sociedades (a escala global) generaron que los movimientos se enfocaran en cuestiones de identidad bajo el nombre de nuevos movimientos sociales (NMS) (Chihú Amparán, 1999). Lo anterior resulta verídico para el activismo indígena en México, que, en gran medida, surge de los movimientos campesinos, pero sus reivindicaciones se fundamentan en sus derechos como pueblos, con sus identidades particulares y muchas veces en contraste con la conformación de las sociedades hispánicas. Sidney Tarrow (2011) define a los movimientos sociales como “secuencias de políticas contenciosas basadas en redes sociales subyacentes, en marcos resonantes para la acción colectiva, y en la capacidad para el mantenimiento de impugnaciones sustentadas contra oponentes poderosos” (Tarrow, 2011: 7).

El caso de la presente investigación se trata específicamente de la resistencia contra las empresas eólicas en el territorio mareño del istmo de Tehuantepec. Aun así, es imposible hablar de cualquier lucha indígena en México sin tomar en cuenta el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y las negociaciones entre dicho grupo y el Gobierno federal entre los años 1994 y el 1996, periodo durante el cual se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena.

Los acuerdos constituyeron la base fundamental para promover reformas en los derechos indígenas, su participación política y su autonomía cultural; a la vez, validaron el concepto de *pueblos indios* como actores políticos y garantizaron el derecho al ejercicio de la gobernanza alternativa en los diferentes pueblos indígenas como modos válidos de sistemas de gobernanza, diferentes al sistema nacional (Stephen, 2005).

Las manifestaciones en el istmo tienen su representación histórica en la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (Cocei), cuyo periodo de actividad más intenso ocurrió durante las décadas de los ochenta y noventa. La coalición ha tenido un impacto fundamental en la

sociedad zapoteca para la reivindicación de sus derechos y la revalorización de su cultura (Stephen, 2005; Campbell, 1993). Sin embargo, hoy existen varias organizaciones importantes que luchan por dicha causa. Se incluyen las siguientes en el presente estudio: Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), las asambleas comunitarias, entre otras.

Las organizaciones campesinas e indígenas no solamente se han apoyado mutuamente en las demandas de los pueblos indígenas, funcionan también como espacios para la participación política de las mujeres indígenas. Aunque los problemas discutidos muchas veces se han centrado en propuestas de hombres, son sitios en los que las mujeres pueden opinar públicamente y hacerse escuchar fuera del hogar (Hernández Castillo, 2010). No obstante, la participación de las mujeres en los movimientos sociales no se da sin complicaciones. La doble carga laboral que incluye el trabajo productivo y el trabajo doméstico afecta su actuar; además, la intervención política significa una carga muy fuerte en las mujeres. Aunado a esto, ellas suelen enfrentar resistencia entre los hombres de su comunidad (Eber y Tanski, 2001) por “abandonar sus responsabilidades”.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El método y las técnicas utilizados

El estudio se construye sobre un método cualitativo biográfico y analítico, enmarcado en los ámbitos antropológico y sociológico, con un enfoque de género. Es una investigación de caso e inductiva, adecuada por sus pretensiones de profundizar la comprensión sobre las experiencias de las mujeres ligadas a la resistencia. Se considera como el caso estudiado la resistencia de las personas participantes en el movimiento de Álvaro Obregón y San Dionisio contra la llegada de la empresa al territorio, desde el 2011 hasta el 2016. Las técnicas utilizadas serán entrevistas a profundidad y relatos de vida (predominantemente), revisión de medios informativos escritos y revisión de estudios (empíricos) previos. La triangulación de los datos reside en comparar y complementar la información obtenida por medio de dichas técnicas, con el fin de diversificar fuentes y perspectivas.

Los relatos de vida y entrevistas a profundidad

Los relatos de vida constituyen un método biográfico delimitado a un área temática. Se ubican en el campo de las investigaciones cualitativas, el cual sostiene que “la realidad es construida socialmente mediante definiciones individuales o colectivas de una determinada situación” (Chárriez Cordero, 2012: 50-51). Para analizar las comunicaciones personales, se combinaron los relatos de vida con entrevistas a profundidad semiestructuradas. Los diálogos se realizaron libremente a partir de algunos temas escogidos, con la finalidad de dejar que las conversaciones fluyeran naturalmente y fueran las mujeres quienes condujeran los temas más significativos para ellas. Todas las entrevistas se efectuaron en persona en las comunidades.

Medios informativos escritos

Los medios informativos escritos refieren a periódicos digitales y sitios web con referencia al movimiento antieólico. Los artículos escogidos se publicaron entre el 2013 y el 2016. Los medios más frecuentemente utilizados son *La Jornada*, un periódico reconocido y académico, que contiene entrevistas con personas destacadas en el movimiento, y *NVI Noticias*, el cual, con su carácter local, brindó información a partir de actores menos empoderados.

Se optó por medios simpatizantes con el movimiento porque la mayoría de los medios de oposición narraron los hechos a partir de la perspectiva de la empresa. Los periodistas no rescataron las experiencias de las mujeres como grupo particular y la mayoría de las personas entrevistadas fueron hombres; sin embargo, organizaron los procesos y sucesos en un orden cronológico.

Estudios (empíricos) previos

Los estudios sobre el istmo y los actores sociales relacionados con los proyectos eólicos ayudaron a comprender mejor el contexto del grupo. No obstante, los encargados de los estudios, a pesar de incluir el movimiento antieólico, tendían a simpatizar con las empresas y no parecían tomar en serio la situación expresada por los participantes; tampoco incluyeron el género en los análisis.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Pese a que el estudio tiene como fase principal de recolección de datos entre enero y abril del 2016, inició en el 2015, con un estudio exploratorio de tres semanas. El proceso de investigación principal se caracterizó por tener cuatro etapas: la delimitación del territorio y el muestreo, la búsqueda de las y los participantes para el estudio, las entrevistas y la transcripción. Las entrevistas se grabaron y se tomaron notas para recordar ciertos detalles cruciales para la comprensión de las respuestas, como expresiones faciales, entre otros aspectos.

Debido a la situación de seguridad en la zona, fue imperativo interrumpir la recolección de datos un mes antes de la fecha planeada. No obstante, la información extraída ha sido de suma utilidad y ha permitido un análisis sólido.

Muestreo

El muestreo se hizo en dos pasos: primero, la selección de las comunidades participantes en la resistencia y, segundo, la selección de las personas para las entrevistas. Se escogió un número pequeño de personas entrevistadas para ahondar mejor en sus historias. La selección de los pueblos se hizo con la ayuda de una persona involucrada en el movimiento. Se escogieron las comunidades de Álvaro Obregón y San Dionisio por haberse pronunciado en la lucha, por haber sido centros de encuentros y sucesos durante la resistencia, por constituir las dos entradas a la barra arenosa y por representar dos pueblos originarios diferentes (zapotecas e ikojts).

Tradicionalmente, los estudios antropológicos se han enfocado en los zapotecas y por eso ahondar en las dos comunidades implicaría un aporte a la comprensión de la diversidad cultural del territorio. El muestreo de respondientes se efectuó mediante el método de bola de nieve y corresponde a una muestra de expertos. También se incluyeron a dos hombres para agregar otras perspectivas. La muestra es bastante homogénea: señoras mayores que se identifican como amas de casa y han participado en las movilizaciones desde el inicio, pero también algunas personas con otro perfil.

Los principales criterios de selección fueron:

- ser participantes del movimiento;
- ser pertenecientes/originarias de una de las dos comunidades estudiadas;
- ser mujeres,
- tener cierta duración en el movimiento.

El mayor obstáculo para las entrevistas fue la confianza; no obstante, personas familiarizadas a las participantes hicieron posible el primer contacto.

Las entrevistas

El estudio se compone por nueve relatos y entrevistas a profundidad. Incluye a diez personas en total: siete formaron parte oficial de la investigación y otras tres se unieron espontáneamente y suministraron datos valiosos. Con el fin de mantener la integridad, los nombres utilizados en este escrito son pseudónimos. Las entrevistas se llevaron a cabo individualmente (6) y en grupo (3). Las entrevistas se presentarán en la tabla 1:

TABLA 1. Entrevistas realizadas

| Entrevistas y personas | Cantidad de entrevistas | Comunidad |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Individuales | | |
| Alejandra (y Amelia) | 3 | Álvaro Obregón |
| Rufina | 1 | San Dionisio |
| César | 1 | San Dionisio |
| Ivonne | 1 | Juchitán |
| Total: 6 | | |
| Grupales | | |
| Juana y Federica | 1 | Álvaro Obregón |
| Teodora y Celestina (y Ana) | 1 | San Dionisio |
| Ivonne (y Carlos) | 1 | Juchitán |
| Total: 3 | | |

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Relatos de la lucha

La lucha hace referencia a la contienda intensificada cuando la empresa Mareña Renovables llegó a la zona, trató de imponer su actividad y se fue, vencida por los pueblos. A continuación, un resumen de los antecedentes y las experiencias de las mujeres.

Antecedentes-San Dionisio del Mar

De acuerdo con César (comunicación personal, 4 de febrero de 2016), la empresa y las autoridades municipales iniciaron el proyecto eólico sin consultar a los habitantes. Pese a la resistencia inicial, la empresa cerró la entrada al mar a los pescadores para realizar excavaciones. Según los entrevistados y medios en línea (por ejemplo, *NVI Noticias*), el presidente municipal había malversado una gran suma de dinero recibido por la empresa, lo cual ocasionó la resistencia organizada contra el proyecto. El pueblo exigió la renuncia del gobernante y pasó a ser regido, según los UyC, por la Asamblea General, la cual desempeñó una función adicional al regimiento: la organización de la resistencia.

Entró el periodo de contienda intensificada: el bloqueo de la carretera al mar. Dado que existen dos entradas principales a la Barra, en San Dionisio y Álvaro Obregón, se involucró a la comunidad zapoteca en el bloqueo. En San Dionisio duró nueve meses, bajo las amenazas y violencia de la policía estatal y algunos políticos municipales, de acuerdo con los entrevistados.

Con la ayuda legal de la organización APIIDTT, San Dionisio apoyó su resistencia en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y su derecho a una consulta previa, libre e informada sobre proyectos de desarrollo en su territorio. El Convenio fue firmado y ratificado por el Gobierno Federal de México en el 1989.

Antecedentes-Álvaro Obregón

En Álvaro Obregón, la empresa negoció su proyecto con los ejidatarios y su comisariado. Sin embargo, no tomó en cuenta a todas las personas

afectadas. Al principio, los ejidatarios aceptaron el proyecto⁴, pero, cuando se revelaron los problemas, una parte de la población se unió a la resistencia. Posteriormente, la resistencia tomó el Palacio Municipal para convertirlo en la Agencia Comunitaria regida según los UyC del pueblo, de acuerdo con las entrevistadas y Chávez Pérez (en *La Jornada*, 2014). Debido a que la comunidad pertenece al municipio de Juchitán, su agente municipal no fue expulsado, sino que siguió su actividad, debilitado, desde su propia casa.

Experiencias de las mujeres

Pese a las similitudes entre las historias en las dos comunidades, hay algunas diferencias en los relatos.

Participación

Todas las mujeres desempeñaban varias funciones: además, de participar en los bloqueos, tuvieron la responsabilidad del espacio privado (lo económico, doméstico y alimentario).

Quando nos levantamos íbamos al bloqueo (...). Porque del mar comemos: tiene pescado, jaiba, camarón, ¡son muchas cosas que sacan [los pescadores] del mar! (...). Nos levantamos con la compañera, nos vamos a la barricada, ahí en el municipio pues, en el palacio. Ya vamos, vemos, hacemos desayuno a los señores, cooperamos entre ellas todas, cooperamos para que hubiera huevo, frijol y arroz, y ya empezamos a hacer la comida, hubo bloqueo... ¡Estuvo dura la lucha! (Teodora, comunicación personal, 20 de marzo de 2016)

Sus relatos revelaron que no habían asistido a las consultas con la empresa, ni a la planificación estratégica de la resistencia. Es probable que la doble labor limitara su implicación, lo cual no ocurrió en el caso de los hombres. Esta circunstancia concuerda con las líneas de pensamiento de Marta Lamas (1995) y Marcela Lagarde (1999).

4 Desconocemos la posición inicial de los pobladores no ejidatarios.

Al contrario de las dionisenses, las obreguenses tenían varias historias sobre su defensa física contra las agresiones de las autoridades, retando directamente al imaginario sobre las mujeres como pasivas y débiles, como se problematizó en el capítulo teórico.

Juana: La agarraron a ella [Federica], agarraron su pelo así, la alzaron. Pero ella se peleó con uno de los estatales. ¡Jajaja! ¡No pudieron agarrarla!

(...)

Alejandra (parcialmente resumiendo para Federica):
Y otra viejita y otra señora igual dentro del grupo. Entonces, cuando vieron que ya los estatales la habían agarrado y la estaban golpeando, ahí le pasó un palo a una de sus cuñadas y le dijo: “¡Ándale, apalice a ese estatal!”, y le dio una paliza. Entonces el estatal, cuando le dio la paliza, agarró a la señora, y ella [Federica] pudo escaparse. Y le dijo a la otra señora el estatal: “No, ahora es contigo pinche vieja”. ¡Jajaja! (Juana, Federica y Alejandra, comunicaciones personales, 17 de marzo de 2016)

Resistencia política

Los cambios estructurales que suscitó la empresa explicitaron una división política ya existente en ambas comunidades, la cual fue originada por la corrupción. Según las dionisenses, los agresores locales fueron principalmente miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), corrompidos por la empresa. En Álvaro Obregón, la resistencia no estuvo enfocada en la política partidaria, sino que tomó una posición antiinstitucional. Los actores corruptos fueron varios, según ellas: desde los políticos municipales hasta los comisariados de los ejidos.

Enfoque narrativo

Cuando recontaron las confrontaciones físicas, las dionisenses tendieron a partir de la perspectiva de los hombres; mientras tanto, las mujeres de

Álvaro Obregón se enfocaron plenamente en su propia agencia. Fue también notable la diferencia en cuanto al tono y el discurso: mientras en San Dionisio los relatos se hicieron con rencor, las zapotecas contaron sus historias con triunfo y burla. En ambas comunidades, encontraron la energía suficiente para lograr la resistencia; no obstante, parecían tener procedencias diferentes desde lo colectivo.

Motivos-el porqué de las mujeres

Al tratarse de un conflicto multifacético, las razones para la lucha tenían dimensiones tanto colectivas como individuales, y desde lo práctico hasta lo identitario. En seguida, se examinarán algunos destacados.

Pertenencia al territorio

Pertenecer al territorio fue clave para la motivación, alimentada por la cohesión social y la defensa histórica de la zona, lo que ha moldeado la identidad colectiva. Los empresarios y los políticos ganaron enemigos como consecuencia del despojo y las falsedades, pero también por ignorar las dinámicas sociales y el valor intrínseco del territorio. León Vargas (s. f.) problematizó los contrastes entre las culturas madre mexicanas, de uso (no tenencia) comunal de territorio y la economía neoliberal. Así, la comercialización de tierras de Mareña creó conflictos al desorganizar un sistema que por generaciones había unido a los pueblos.

Empezaron a meterles la idea a las personas, de que era su pequeña propiedad y que tenían que hacer documentos de manera individual. Pero de una forma mañosa de querer dividir a la comunidad. (Ivonne, comunicación personal, 21 de mayo del 2015)

Según Lefebvre (1976), el sentido de pertenencia se arraiga en la construcción histórica común del territorio. Chernela (2011) planteó que los pueblos indígenas han luchado por generaciones para estimular el etnodesarrollo, hasta hoy.

De igual manera, los zapotecas se han enfrentado contra invasores y proyectos neoliberales. Esos sucesos se han interiorizado en su identidad colectiva

(Howe y Boyer, 2015). En ese respecto, las zapotecas difirieron de las ikojts en sus relatos: las dionisenses rara vez refirieron a su historia, mientras las zapotecas lo hacían con frecuencia.

Es pura gente rebelde, pues, jaja, hijos de rebelde, pues. Hay mucha gente que dice: “Ay, son unos salvajes”, pero es mejor así que dejarse llevar por cualquier cosa, solo por dinero. (Alejandra, comunicación personal, 1 de febrero de 2016)

Economía y subsistencia

Hay tres aspectos preocupantes para las amas de casa respecto al cuidado familiar. El primero se vincula con la dependencia del medioambiente en términos de las actividades agropecuarias. La contaminación del suelo y el agua por la actividad eólica (Diego Quintana, 2015) y el acceso restringido al mar por la implementación del parque alarmaron a las mujeres, ya que la producción alimenticia está directamente vinculada con la subsistencia.

¿Qué pasaría con los oficios de las mujeres si llegaran los eólicos? Amelia responde:

Va a ser muy difícil, porque las mujeres son las que van a vender los pescados (...). Llegan y el marido ya se fue a pescar otra vez. Más tarde llega el marido (...), a cocer en la mañana, tempranito, y venderlo otra vez. Haces el desayuno de tu marido, dejas el desayuno de los niños y te vas a vender. La mujer es la que va a hacer el movimiento de todo eso, a sacarlo, a venderlo, a sacarle provecho. Haces cuenta que lo fue a traer el marido, y la mujer va a ir a hacer dinero, para que resulte. (Amelia, comunicación personal, 1 de febrero del 2016)

El segundo aspecto tiene que ver con los cambios en el sistema económico. La inflación de los precios de los alimentos y la desaparición del trueque como divisa alternativa, según las dionisenses, han ocasionado que ya no vivan humildemente, sino en pobreza; un golpe para su responsabilidad doméstica.

El tercero se refiere a la salud familiar: el proyecto representó una amenaza a las condiciones requeridas para proveer comida saludable con ingredientes frescos.

Antes, no me va a creer, había... ese señor se murió a los ¡110 años! No tuvo diabetes, presión, nada (...). Se murió de anciano. Y ahorita con todas esas cosas que ya comemos, la Coca Cola, embotellados (...). Rápido nos caemos en enfermedad. Y de una vez, la muerte, pues (...). Nosotros nos queremos defender hasta los últimos días (...). No queremos que nuestros hijos, nuestros nietos sufran. Al rato van a decir “¡Cobardes mis papás, mis abuelos, que no se defendieron!”. Sí, así están las cosas. (Celestina, comunicación personal, 20 de marzo de 2016)

Conservación de tradiciones

Puesto que las tradiciones se transforman constantemente, habrá un enfoque en ciertas costumbres que las mujeres conocieron como tradicionales. Para ellas, la cocina permitió conservar la tradición culinaria y la cultura territorial. Es una actividad que desempeñaban orgullosamente. También, la comida funcionó como una contribución a las fiestas tradicionales, según la ayuda interfamiliar descrita por Maldonado Alvarado (2010):

Cuando hacemos una boda (...), tenemos que dar un platillo de botanas. Eso para nosotros es importante (...). El señor trae su cartón de cerveza. Y tú lo que le vas a dar a la mujer, es un platillo (...). Tiene que ser con el pescado, con la ensalada, con jaiba y todo. ¿Y de dónde va a salir eso [si ya no pueden pescar]? Se acaba la tradición. Y ya la tradición no va a ser como antes, y eso es lo que nosotros no queremos. (Amelia, comunicación personal, 1 de febrero de 2016)

La responsabilidad alimentaria también constituyó un estilo de vida intrínsecamente valioso para ellas. Esto se enlaza con el etnodesarrollo, en contraste con la visión neoliberal de desarrollo (Chernela, 2011).

[N]osotros nos sentimos feliz porque tenemos nuestros hijos; en la comida el frijolito los tiene [sic] que cocer usted con una cebolla y

a la leña, no hay gas, no hay nada. ¡Y así! Pero por eso, para mí me da mucho gusto vivir en mi pueblo porque aquí tengo mi espacio, también tengo mi hamaca, me canso de mi hamaca, voy ahí por debajo de mi árbol. Estoy feliz. Y si hay algo que no tengo, compro mi maíz, hago mi tortilla, lo sé hacer. No sé, aquí es fácil para vivir. (Teodora, comunicación personal, 20 de marzo de 2016)

Indignación por injusticias

Dicen ellos que San Dionisio va a ser rico, pero ¡mentira! Nosotros ya descubrimos, ya vimos, ya escuchamos. El beneficio no va a ser para nosotros. El beneficio va a ser para los eólicos. Y nosotros, ¿qué? (Teodora, comunicación personal, 20 de marzo de 2016)

Los relatos conducen a pensar que el mismo coraje fue fundamental en la potencia de las mujeres:

Teodora: No, no teníamos miedo, esa fuerza esa...

Celestina: No sabemos ni de dónde salió.

Teodora: Ajá, pero salió. Salió.

Celestina: Pero no teníamos miedo. Viene la gente armada, que nos van a matar, ¡qué venga! (Teodora y Celestina, comunicación personal, 20 de marzo del 2016)

Discusión

Como ya se expuso, hay un vacío en los estudios previos y los artículos digitales en cuanto a la perspectiva doméstica. Por tanto, los motivos “oficiales” del movimiento, comunicados al exterior, no capturan las preocupaciones de las mujeres, más bien carecen de su corazón: el cuidado familiar. Horn (2013) sostiene que las perspectivas femeninas tienden a olvidarse en los movimientos mixtos, y Lamas (1995; 2010) reconoce que el ámbito público tiene un estatus más alto que el ámbito doméstico, lo que parcialmente explicaría el fenómeno. Pero, yendo más profundamente, esto refleja la noción de las mujeres mismas como “ciudadanas a medias”, descrita por Marcela Lagarde (1999).

DINÁMICAS SOCIALES, POLÍTICAS Y DE EMPODERAMIENTO

Se expondrán aspectos de la participación de las mujeres en el movimiento y su relación con sus posiciones sociales en términos de empoderamiento político.

Influencia en las asambleas

El sistema de UyC del territorio involucra a todos los pobladores, pero existen tres instancias de poder: el Consejo de Ancianos, el agente comunitario y la Asamblea Comunitaria. La Asamblea propone políticas, y en el agente y el Consejo recae el poder decisivo. El Consejo está constituido por ciudadanos con un historial de aportaciones valiosas mediante el tequio. También el puesto de agente es ocupado tradicionalmente por hombres.

Las asambleas comunitarias son clave para la contienda política indígena en Oaxaca (León Vargas, s. f.). En ellas, se alienta la participación femenina. Las asambleas, por tanto, son espacios cruciales para empoderar políticamente a las mujeres (Hernández Castillo, 2010), y son igual de significativos como los espacios formales, según Stephen (1993). Las asambleas promueven la participación de todos y todas presentes, pero cabe recordar que el Consejo y el agente proponen la agenda.

Los que hablan son los hombres. Luego cuando uno no está de acuerdo con lo que dicen ellos, entonces nosotras decimos que “no, así no, no estamos de acuerdo”. (Juana, comunicación personal, 18 de marzo de 2016)

Es necesario distinguir esa intervención posterior de la influencia transversal, en términos de empoderamiento, aunque las mujeres expresaron sentirse incluidas al poder ser escuchadas. La inclusión femenina en todas las instancias de poder implicaría la integración fundamental de sus perspectivas a la visión del movimiento, mientras la intervención posterior les permitirá modificar aspectos de un enfoque ya existente. También, el no haber encontrado la perspectiva doméstica —tan relevante para las amas de casa— en los periódicos señala una división entre “asuntos populares” (masculinos) y “temas de mujeres”.

Otro aspecto crucial es la forma de convocatoria. En Álvaro Obregón, se hacía públicamente, por medio del aparato de sonido, según Amelia. En San Dionisio, en cambio, César convocaba a las personas mediante invitación privada, según las señoras.

Tove: ¿[En] las asambleas son un 50 % de hombres y un 50 % de mujeres que participan?

César: ¡Ah sí! Igual, igual. Y ¿por qué? Porque va el esposo, va la mujer. Y es lo que nos ha aventajado, ¿no? Por ejemplo, se hace una invitación para 50 hombres, ¡automáticamente llegan las mujeres! ¡Jaja! (César, comunicación personal, 4 de febrero del 2016)

De la cita se deduce que las mujeres iban de acompañantes de sus esposos. Este hecho implica cierta deslegitimación de su participación, además de socavar su sentido de pertenencia a los espacios de tomas de decisiones.

Influencia en las actividades

Aunque no tuvieron poder decisivo, las mujeres desempeñaban papeles importantes en la acción y las actividades de apoyo. Encontraron maneras creativas de no dejar sus tareas domésticas y laborales e, incluso, las llevaban al bloqueo. El trabajo doméstico en sí fue un apoyo a la resistencia, ya que posibilitó cumplir con las demás funciones. Además, algunas familiares mantuvieron los hogares y los negocios durante el bloqueo. En ese sentido, las mujeres participaban a todas las horas: en la guardia, la labor productiva y el trabajo doméstico.

Como ya se expuso, ellas ejercieron resistencia física contra las autoridades. Al respecto, hubo una contradicción en cuanto a su autopercepción. Celebraron su defensa física, pero a la vez se atribuyeron características tradicionalmente femeninas. Según Burin (1996), esas “características emocionales de receptividad, capacidad de contención y de nutrición” (Burin, 1996: 71) se entendieron como intrínsecas a las mujeres. Y es cierto que ejercían ambos roles.

Se van de recorrido, los señores, (...). Y nosotras las mujeres quedamos a poner café, ya que regresen los hombres les ofrecemos un tamalito de frijol... Porque se imagina usted, toda la noche los hombres desvelados,

y entonces nosotras apoyamos a los señores para que no estén solos.
(Celestina, comunicación personal, 20 de marzo del 2016)

Impedimentos y reconocimiento

La división de tareas según la complementariedad istmeña se reflejó en la lucha, pero con la reservación para las posiciones políticas. También, se observó que las mujeres se involucraban en las actividades “masculinas” en la medida posible; no obstante, estaban limitadas por varios factores, confirmados teóricamente: el desgaste de la triple jornada (Burin, 1996), la obligación moral de priorizar la casa (Lagarde, 1999; Eber y Tanski, 2001) y la falta de una perspectiva pública contra la exclusión sistemática de las mujeres de las esferas públicas (Burin, 1996). La situación descrita hace parecer que la idea del matriarcado istmeño queda lejos de la realidad, aun con el empoderamiento económico femenino.

Alejandra: Los hombres, aunque estemos luchando, pues “Nah, esas no...” (...) [L]as mujeres también han luchado con palos y todo, tal vez han recibido golpes...

Tove: ¿Crees que los hombres se den cuenta de eso?

Alejandra: No. (Alejandra, comunicación personal, 18 de marzo del 2016)

Sin siquiera contemplar las aportaciones secundarias, “clandestinas”, quedó claro en las entrevistas que las mujeres de Álvaro Obregón experimentaron una injusta falta de reconocimiento por sus esfuerzos.

Dinámicas sociales y de empoderamiento

En contraste con el planteamiento inicial, la lucha no parece haber originado una mayor influencia decisiva en la política de las mujeres. Se supo posteriormente que Rufina se postuló como diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD); sin embargo, no fue posible conversar sobre la conexión entre la lucha y esa decisión. Aunque las mujeres no expresaron un deseo explícito de participación política, demostraron un descontento frente a su exclusión, pues deseaban influir en las decisiones.

En San Dionisio, las repercusiones de la resistencia se reflejaron en las actividades económicas de las mujeres: Celestina y Teodora sufrían el agravamiento en sus ventas debido a los conflictos derivados del proyecto eólico. En Álvaro Obregón, recontaron sobre rupturas entre y dentro de las familias por los mismos conflictos.

Por último, aunque las mujeres no pudieron empoderarse políticamente mediante la organización comunitaria, la noción de igualdad y hermandad que permeaba el movimiento fomentó una sólida cohesión que se demostró en las acciones solidarias entre las mujeres y en referencia a los demás miembros, como “el pueblo” e incluso “los pueblos hermanos”. La lucha también fue un orgullo y un aliento para ellas en su participación política, y en sus relatos señalaron un sentido de “¡Nosotras también podemos!”.

LAS MUJERES DE LA LUCHA

En este apartado, se desarrollará el objetivo más complejo. Con base en el contexto y las condiciones expuestas en los rubros anteriores —en los que las mujeres expresaron sus percepciones de sí mismas y el mundo a su alrededor —, se entiende mejor cómo la lucha ha influido en su construcción identitaria.

Identidades colectivas

Al hacer las entrevistas, se indagó sobre si las mujeres se delimitaban como colectivo. Las dionisenses, cuando relataron los sucesos, no hicieron esa distinción vis a vis con sus compañeros masculinos. Una explicación es la profunda cohesión entre los luchadores, pero otra es la noción de lo que Lagarde, (1999) y Horn (2013) explican como una neutralización de lo masculino como lo “general” para el grupo. En Álvaro Obregón, en cambio, las mujeres hablaron más concretamente de sus experiencias como mujeres. La delimitación grupal de ellas fue más destacable en relación con sus funciones.

Su identidad colectiva no solamente se construyó mediante afirmativos diferentes (“nosotras las mujeres”, “el pueblo”, “istmeñas”, etc.), sino también como *antítesis de otros*. Se demostró en denominaciones como defensa, resistencia, lucha, y en formulaciones como “entonces el pueblo se unió”,

como respuesta a un otro malicioso. Bokser Liwerant (2008) explica que la identidad común se forma mediante un “atributo de ‘similitud’ (...) vis a vis con lo diferente”. Pero la unificación también implicó una división en sus sociedades a raíz del proyecto, lo cual preocupó a todas las mujeres.

El pueblo es chico: toda la gente se conoce y toda la gente tiene familiares, familias grandes. Entonces de este lado hay hijos y del otro lado hay padres, o hay tíos acá y hay hermanos, y está dividido. Se han peleado así a golpes, machetazos. Ha fluido mucha sangre. (Alejandra, comunicación personal, 14 de marzo del 2016)

Las entrevistadas solían referirse al movimiento como “el pueblo”, de esa manera indicaban que la resistencia constituyó el pueblo verdadero: la creación de una ciudadanía cultural (Blackwell, 2012) como resultado del conflicto. Esa denominación funcionó como un marco para la acción colectiva, que da legitimidad al movimiento en la comunicación exterior, y fomenta la cohesión interior a razón de representar la voz de la gente (Delgado Salazar, 2009; Benford y Snow, 1992).

Tove: ¿Cuál es la opinión común del pueblo acerca de los eólicos?
Alejandra: Del pueblo, o sea, que “¡Ya!”. Cuando se trata de problemas del proyecto, la gente sí se une (...). Hay gente a favor y hay gente en contra, que están del otro lado. (Alejandra, comunicación personal, 1 de febrero de 2016)

En medio de un discurso sumamente fortalecedor, también se encontraron elementos de victimización en la autocaracterización de los pueblos. Según Newdick (2006), es una manera, principalmente inconsciente, de legitimar, frente a sí mismos y a otros, la lucha como un grupo subordinado a poderes más fuertes.

Llegaron con federales y estatales y el pueblo se levantó, ya así con machetes y palos (...) para que el pueblo sea libre. (Alejandra, comunicación personal, 1 de febrero de 2016)

La percepción de una opresión foránea constante, desde la colonización y hasta la actualidad, penetra las identidades de las mujeres de modos diferentes. Para

las zapotecas, la opresión histórica ha creado un sentido de destino para luchar por la liberación de su pueblo contra los males extraños, y en ello existe cierta certeza de su victoria. Las mujeres ikojts no contextualizaron la opresión de la empresa dentro de una trayectoria histórica de opresión, y expresaron una preocupación por su futuro sin ese sentido de certeza.

Entre lo individual y lo colectivo

Ya se problematizó el rol como cuidadoras y animadoras, es decir, la costumbre de realizar las tareas domésticas, y también de responsabilizarse por la moral familiar y maternal y el ponerse a sí mismas en segundo lugar (Lamas, 1995; Lagarde, 1999). Este doble papel no es solamente individual, sino que unió a las mujeres en la lucha.

Las construcciones identitarias son procesos sociales que entrelazan lo personal y lo colectivo. La complementariedad difumina los límites entre la construcción identitaria individual y colectiva, ya que forman parte de una estructura social basada en la codependencia, y donde la solidaridad es una responsabilidad grupal que no se ejerce individualmente.

De esa manera, se observa, por ejemplo, que la responsabilidad para con sus tareas laborales define a las mujeres también en la lucha y en la vida cotidiana. Se dice que las istmeñas siempre serán vendedoras y emprendedoras, no dejan pasar una posibilidad de tratar de vender algo. Esa búsqueda de hacer valer la pena cada esfuerzo, traducido en un espíritu emprendedor inmerso en sus identidades, también se reveló en la creatividad para poder participar en las protestas.

Como se ha argumentado, la caracterización de las istmeñas como excepcionalmente fuertes cubre en parte las desigualdades existentes, pero también refuerza precisamente eso en ellas. Lo anterior también se vincula con las identidades “heredadas”. Previamente, Alejandra hacía referencia a la tradición del “ser salvaje”. En ese sentido, la historia parece más significativa para las mujeres zapotecas en su identificación justamente como zapotecas, mientras las dionisenses más bien hacen énfasis en su identidad como perteneciente al territorio.

Identidad individual

Debido a la presencia de sociedades altamente individualizadas, emergen presuposiciones erróneas, especialmente acerca de la identidad individual. Por ejemplo, se espera que haya motivos personales para involucrarse en el movimiento, aspiraciones o simplemente por crecimiento personal. Sin embargo, quedó claro que las razones residieron en la búsqueda del bien y en atención a las demandas del pueblo. Se hizo evidente que, con una lógica fundamentalmente colectiva dentro de una comunidad, el significado del *yo* es otro. Sin embargo, el movimiento efectivamente había generado cambios en sus vidas, sobre todo en materia de madurez y mandato.

Alejandra: Dice Federica que, si algo ha cambiado, es sus formas de pensar [sic], porque ahora ya no creen en esas cosas de que “Traemos un apoyo para ustedes” o “Yo soy el líder político de no sé qué y les vengo a apoyar”. Ya no creen en nada de eso. (Federica y Alejandra, comunicación personal, 18 de marzo de 2016)

Ya no le temes a nada. Ya no se deja uno. Antes te encierras porque está pasando algo, ahorita ya no. (Rufina, comunicación personal, 20 de marzo de 2016)

Ser mujer luchadora

Figuran muchas ideas acerca de la mujer istmeña⁵ dentro y fuera del territorio. Con este estudio, se ha querido retar esos imaginarios y dejar que las propias mujeres describieran sus vidas y percepciones. Se observó que las mujeres istmeñas, por lo general, se autodefinieron, y fueron definidas, como fuertes y esa concepción les ayudó a convertir ese imaginario en realidad. Sin embargo, para los hombres, la exaltación de las istmeñas solamente aplica hasta cierto punto, debido a que no estaban dispuestos a dejarles la responsabilidad política del movimiento.

5 En mayúsculas, ya que es la idea de la mujer istmeña —y no tanto de las mismas mujeres— que tiene fama en México y en el mundo.

Por su parte, las contradicciones acerca del imaginario sobre las istmeñas se encontraron también en comparación con las mujeres no istmeñas. Es decir, esa fortaleza excepcional se contempló como contraste a las características “normales” de las mujeres. Esa particularización podría ser un factor de empoderamiento, pero, a la vez, refuerza la idea de debilidad inherente al género femenino. Como resultado, las mujeres, y sobre todo las señoras, tuvieron que cumplir con varias expectativas contradictorias respecto al ser “típicas” istmeñas, valientes, fuertes y confrontativas (Taylor, 2006; Altamirano Jiménez, 2013), y también ejercer su rol de cuidadoras (Lagarde, 1999; Lamas, 1995). Se encontraron clavadas entre dos realidades: la privada y la pública, y con dobles responsabilidades y roles.

Dentro del papel doméstico, se manifiestan contradicciones que les brindan estatus social por el control económico que conlleva, pero implican también la pérdida de oportunidades de participar en la vida pública, como manifiesta Lamas (1995). Este papel, con los deberes que acarrea, es incuestionable, y no se resume como “otro oficio más”, más bien penetra la identidad de las lugareñas de tal modo que lo llevan a los espacios públicos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El objetivo general aborda varios aspectos de las vidas de las mujeres. Ha sido posible comprender el contexto en el que viven, así como las transformaciones incitadas por la llegada de la empresa y por la participación en la resistencia contra ella. En cuanto al empoderamiento, fue preciso revisar sus posiciones sociales antes y después de la lucha; asimismo, sus posibilidades de involucramiento político, fuera y dentro del movimiento. Pero, más importante aún, hubo la oportunidad de conocer las propias perspectivas de las mujeres, tanto sobre la lucha como sobre sus vidas, y sus deberes, deseos y temores.

Se obtuvieron datos muy valiosos acerca de las condiciones en las que las mujeres tomaron la decisión de defender su territorio, sus modos de vida y las vidas de las futuras generaciones. Esa información es altamente relevante para afirmar los derechos de los pueblos indígenas frente a proyectos de desarrollo, y para dinamizar las ideas sobre las capacidades, la agencia e, incluso, la existencia de las mujeres en sus diferentes contextos.

Las experiencias y las intervenciones de los proyectos de desarrollo neoliberal tienen sesgo de género y no es suficiente hablar con los hombres al respecto, ya que sus situaciones socioeconómicas son muy diferentes a las de las mujeres. Conviene recordar que la lucha descrita no es contra la energía renovable, sino contra un cambio fundamental e involuntario en los estilos de vida y los modos de sustento de las personas que habitan el territorio afectado. Urge estudiar más profundamente las implicaciones locales de las políticas públicas nacionales. Algo en apariencia tan sencillo como la instalación de un parque eólico puede alterar por completo las vidas de una localidad. En vista de eso, resulta evidente la relevancia de crear políticas incluyentes y participativas.

CONCLUSIONES

A continuación, se expondrán las conclusiones de este estudio:

- La responsabilidad doméstica es uno de los aspectos esenciales para las entrevistadas y penetra tanto sus perspectivas sobre la lucha como sus roles en la sociedad y la resistencia, y los motivos de su participación. La identidad de la cuidadora es fundamental para entender las consecuencias de la llegada de la empresa y de la lucha en las vidas de dichas mujeres.
- Hay una discrepancia entre el reconocimiento verbal de los hombres acerca de las mujeres y su empoderamiento político en las asambleas. Todavía hace falta confianza en sus capacidades políticas. La participación femenina es percibida como un aporte, no como acción central para la causa. El fenómeno da connotaciones a la famosa frase del movimiento feminista europeo de las décadas de los sesenta y setenta: “Detrás de cada gran hombre hay una mujer”. Pero, si los hombres necesitan de las mujeres para hacer grandes logros, ¿por qué las mujeres tienen que estar detrás?
- Igualmente, las mujeres tendían a darles más protagonismo a los hombres en varios aspectos: desde el enfoque narrativo hasta a la hora de facilitar la participación de ellos mediante su trabajo “entre bastidores”.
- En cuanto a las dinámicas sociales, se concluye que el conflicto de intereses ha provocado rupturas dentro de las comunidades y, en consecuencia, se presentan dificultades para que las mujeres mantengan sus negocios. Sin embargo, también se ha fortalecido la cohesión social entre las personas participantes de la causa.

- A pesar de encontrar varias similitudes en las situaciones de las mujeres zapotecas e ikojts, también hay diferencias importantes en cuanto a sus identidades. Mientras sus aportes a la lucha han sido muy parecidos, las mujeres zapotecas parecen ser más conscientes de la magnitud de su actuar.
- Por último, hay una forma de participación que no se había mencionado previamente en los estudios y periódicos encontrados: el involucramiento indirecto de las familiares femeninas en la lucha a través del apoyo en los hogares ha posibilitado la participación de las amas de casa en la resistencia —siempre y cuando su intervención no comprometiera su rol de cuidadora—. Lo mismo ha beneficiado tanto a las propias mujeres como al movimiento entero.

RECOMENDACIONES

Debido a un cambio en la seguridad de la zona, la investigación se debió interrumpir. La mayoría de la información se recuperó, pero sería significativo investigar sobre las perspectivas masculinas en Álvaro Obregón alrededor de la participación femenina. Existe mucho material escrito y también se pudo obtener una idea acerca de las percepciones de las zapotecas en conversaciones con los habitantes de Juchitán; no obstante, hace falta contrastar dicha concepción con una visión desde dentro de la resistencia. Ese punto de vista también serviría para dar una idea de la correspondencia entre las autopercepciones de las mujeres zapotecas y vista las perspectivas de sus compañeros masculinos, lo cual, a su vez, ayudaría a comparar el grado de conciencia en cuanto a las posiciones sociales de las mujeres en ambos pueblos. Fue posible revisar más a profundidad esta perspectiva en San Dionisio, para efectos del presente estudio.

En cuanto a la falta de profundización de temas en campo, sería provechoso informarse de manera minuciosa sobre las asambleas comunitarias, con la finalidad de obtener mayor comprensión de sus dinámicas, así como de las ideologías que conforman su base. Estos descubrimientos contribuirían a comprender mejor la posición de las mujeres en el sistema político de los UyC y sus posibilidades de empoderamiento en las asambleas en el futuro.

BIBLIOGRAFÍA

Publicaciones

- Acosta Márquez, E. 2007. *Zapotecos del istmo de Tehuantepec. Pueblos Indígenas del México Contemporáneo*. México: Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
- Altamirano Jiménez, I. 2013. “Indigeneity, Land and Gender in Oaxaca”. *Indigenous Encounters with Neoliberalism: Place, Women and the Environment in Canada and Mexico*. Vancouver: UBC Press.
- Benford, R. 1997. “An Insider’s Critique of the Social Movement Framing Perspective”. *Sociological Inquiry* 67, no. 4.
- Blackwell, M. 2012. “The Practice of Autonomy in the Age of Neoliberalism: Strategies from Indigenous Women’s Organising in Mexico”. *Journal of Latin American Studies* 44.
- Bokser Liwerant, J. 2008. Identidad, diversidad, pluralismo(s): dinámicas cambiantes en los tiempos de globalización. En BokserLiwerant, J. y Velasco Cruz, S. (eds.), *Identidad, sociedad y política*. UNAM
- Bonfil Batalla, G. 1995. Etnodesarrollo: sus premias jurídicas, políticas y de organización. En *Obras escogidas de Guillermo Bonfil Batalla*. INAH/INI.
- Burin, M. 1996. “Género y psicoanálisis: subjetividades femeninas vulnerables”. En *Género, psicoanálisis y subjetividad*, eds. Burin y Bleichmar. Paidós.
- Campbell, H. 1993. “Tradition and New Social Movements: the Politics of Isthmus Zapotec Culture”. *Latin American Perspectives* 20, no. 3.
- CEDRSSA. 2014. *Reporte del CEDRSSA: Condiciones económicas y sociales de las mujeres rurales en México*. México: Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA).
- Chernela, J. 2011. “Indigenous Rights and Ethno-Development: The Life of an Indigenous Organization in the Rio Negro of Brazil”. *Tipiti: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America* 9, no. 2.

- Chihú Amparán, A. 1999. Nuevos movimientos sociales e identidades colectivas. *Iztapalapa* 47: 59-70.
- Consejo Agropecuario Centroamericano. 2010. *Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030*. Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA).
- Delgado Salazar, R. 2009. *Acción colectiva y sujetos sociales: análisis de los marcos de justificación ético políticos de las organizaciones sociales de mujeres, jóvenes y trabajadores*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Diego Quintana, R. 2015. *Energía “limpia” o energía perversa: actores sociales y parques eólicos en Dinamarca y en el Istmo de Tehuantepec*. <https://consultaindigenajuchitan.files.wordpress.com/2015/01/2015-enero-roberto-diego.pdf>
- Eber, C. y Tanski, J. 2001. “Obstacles facing women’s grassroots development strategies in Mexico”. *Review of Radical Political Economics* 33.
- Espinosa, E. y Zarur, A. 2012. “La organización. Espacio de construcción simbólica de la diferencia sexual”. *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social “Disertaciones”* 5, no. 2.
- Gargallo, F. 2007. “Feminismo latinoamericano”. *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* 12, no. 28.
- Hernández Castillo, A. 2010. “The Emergence of Indigenous Feminism in Latin America”. *The University of Chicago Press*, 35 (3).
- Hernández Cortés, C. 2009. “El enfoque territorial del desarrollo rural y las políticas públicas territoriales”. *Encrucijada*, 3.
- Herrera Tapia, F. 2013. “Enfoques y políticas de desarrollo rural en México”. *Gestión y Política Pública* XXII, no. 1: 131-159.
- Horn, J. 2013. *Gender and Social Movements. Overview Report*. Reino Unido: Institute of Development Studies.
- Howe, C. y Boyer, D. 2015. “Aeolian politics”. *Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory*.

- Juárez-Hernández, S. y León, G. 2014. Energía Eólica en el Istmo de Tehuantepec: Desarrollo, Actores y Oposición Social. *Revista Problemas del Desarrollo* 178, no. 45.
- Lagarde, M. 1999. “Claves identitarias de las latinoamericanas en el umbral del milenio”. En *El siglo de las mujeres*, eds. Portugal, A. y Torres, C. Chile: Isis Internacional/Ediciones de las Mujeres.
- Lamas, M. 1994. “Cuerpo: diferencia sexual y género”. *Debate Feminista*, 10.
- Lamas, M. 1995. “Madrecita santa”. En *Mitos Mexicanos*, ed. Enrique Florescano. México: Editorial Aguilar.
- Lefebvre, H. 1976. “Reflections on the politics of space”. *Antipode* 8, no. 2: 30-37.
- Lefebvre, H. 1991. *The production of space*. Oxford: Blackwell.
- León Vargas, J. s. f. *Al Rescate de los Pueblos Autónomos de Oaxaca*. <http://filosofia.uanl.mx:8080/ixcoloquio/public/uploads/4b95d03a2670299caa4a188864176718.pdf> Consultado el 15 de marzo de 2016.
- Montecino, S. 1996. “Identidades de género en América Latina: mestizajes, sacrificios y simultaneidades”. *Debate feminista*, 14.
- Nahmad, S., Nahón, A. y Langlé, R. 2014. *La Visión de los actores sociales frente los proyectos eólicos del Istmo de Tehuantepec*. México: Gobierno de Oaxaca y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
- Newdick, V. 2005. “The Indigenous Woman as Victim of Her Culture in Neoliberal Mexico”. *Cultural Dynamics*, vol. 17.
- Oslender, U. 2002. “Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una ‘espacialidad de resistencia’”. *Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales* VI, no. 115. <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-115.htm> Consultado el 24 de julio de 2016.
- Rivera Zea, T. 2000. “Peruvian Women, Indigenous Women: Different faces, same problems, same expectations”. *Indigenous Affairs* 3.
- Snow, D. y Benford, R. 1992. “Master Frames and Cycles of Protest”. En *Frontiers in Social Movement Theory*, eds. Morris y McClurg Mueller. Estados Unidos: Yale University Press.

- Stephen, L. 1993. "Gender and Class in Zapotec Households". *Anthropology of Work Review* XIII, no.4 y XIV, no. 1.
- Stephen, L. 2005. "Negotiating Global, National and Local "Rights" in a Zapotec Community". *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review* 28, no. 1.
- Tarrow, S. 2011. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Estados Unidos: Cambridge University Press.
- Taylor, A. 2006. "Malinche and Matriarchal Utopia: Gendered Visions of Indignity in Mexico". *The University of Chicago Press* 31, no. 3.
- Tepichin Valle, A. 2015. *Política pública, mujeres y género*. http://ces.colmex.mx/pdfs/anamaria/a_tepichin_15.pdf Consultado el 20 de setiembre de 2016.
- Unesco. 1982. *Meeting of Experts on the Study of Ethno-Development and Ethnocide in Africa*. París: Unesco.
- Villalvazo Peña, P, Corona Medina, J. P. y García Mora, S. 2002. Urbano-rural, constante búsqueda de fronteras conceptuales. *Datos, Hechos y Lugares*, 20.

Periódicos y páginas en línea

- APIIDTT. 2014, 10 de diciembre. Comunicado San Dionisio del Mar: Rechazo rotundo a la elección extraordinaria. Blog de *Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio*. <https://tierrayterritorio.wordpress.com/2014/12/10/comunicado-san-dionisio-del-mar-rechazo-rotundo-a-la-eleccion-extraordinaria/>
- APIIDTT. 2016, 15 de mayo. Amenaza de desalojo armado a la agencia comunitaria de Álvaro Obregón por parte de la policía municipal de Juchitán, Oaxaca. Blog de *Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio*. <https://tierrayterritorio.wordpress.com/2016/05/15/amenaza-de-desalojo-armado-a-la-agencia-comunitaria-de-alvaro-obregon-por-parte-de-la-policia-municipal-de-juchitan-oaxaca/>
- Bowell, T. s.f. "Feminist standpoint theory". *Internet Encyclopedia of Philosophy*. <http://www.iep.utm.edu/fem-stan/#H3> Consultado el 1 de noviembre de 2016.

- Chaca, R. 2014, 12 de julio. “San Dionisio del Mar: el Incendio que viene”. *NVI Noticias*. <http://old.nvinoticias.com/istmo/general/protestas/249253-san-dionisio-del-mar-incendio-que-viene>
- Chávez Pérez. 2014, 12 de abril. “La Policía Comunitaria de la Colonia Álvaro Obregón, Oaxaca”. *La Jornada*. <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/12/la-policia-comunitaria-de-la-colonia-alvaro-obregon-oaxaca-7296.html>
- El Oriente. 2013, 11 de febrero. “Crean policía comunitaria contra proyecto eólico en Álvaro Obregón”. *El Oriente*. <http://www.eloriente.net/home/2013/02/11/crean-policia-comunitaria-contra-proyecto-eolico-en-alvaro-obregon/>
- Jiménez Leyva, L. 2016, 2 de marzo. “¡Sí! a mar y tierra; ¡no! a eólicas en Oaxaca”. *NVI Noticias*. <http://old.nvinoticias.com/oaxaca/general/organizaciones/326510-si-mar-tierra-no-eolicas-ikots>
- Lamas, M. 2010, 5 de agosto. “Lo que oculta el 10 de mayo”. *NVI Noticias*. <http://old.nvinoticias.com/principal/lo-que-oculta-10-mayo>
- Manzo, D. 2015, 2 de febrero. “Indígenas zapotecos conmemoran dos años de resistencia contra instalación de empresas eólicas”. *La Jornada*. <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/02/indigenas-zapotecos-conmemorandos-anos-de-resistencia-contra-instalacion-de-empresas-eolicas-5700.html>
- Manzo, D. 2015, 22 de febrero. “Mareña cambia razón social para retomar proyecto eólico en Oaxaca”. *La Jornada*. <http://www.jornada.unam.mx/2015/02/22/estados/026n1est>
- Manzo, D. 2016, 24 de mayo. “Candidatos renuncian a sus partidos en San Dionisio del mar”. *IstmoPress*. <http://www.istmopress.com.mx/istmo/candidatos-renuncian-partidos-san-dionisio-del-mar/>
- Montoya, A. 2016. *Importancia de la mujer rural*. <http://pulsored.com.mx/web/?p=101877>
- Muñoz Ramírez, G. (2015, 13 de junio). “Los de Abajo”. *La Jornada*. <http://www.jornada.unam.mx/2015/06/13/opinion/013o1pol>
- ONU Mujeres. 2015. *El empoderamiento de las mujeres rurales a través de los ODS*. <http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/rural-women-food-poverty>

- Rojas, R. 2014, 9 de enero. “Muerto, proyecto eólico en San Dionisio, Oaxaca: ‘De Telegraaf’”. *La Jornada*. <http://www.jornada.unam.mx/2014/01/09/sociedad/035n1soc>
- Rojas, R. 2015, 28 de enero. “Pueblos impulsan su autonomía tras evitar construcción de parque eólico en Oaxaca”. *La Jornada*. <http://www.jornada.unam.mx/2015/01/28/sociedad/039n2soc>
- Velásquez, L. 2016, 2 de marzo. “¡Sí! a mar y tierra; ¡no! a eólicas en Oaxaca”. *NVI Noticias*. <http://old.nvinoticias.com/oaxaca/general/organizaciones/326510-si-mar-tierra-no-eolicas-ikots>
- Velásquez, L. 2016, 6 de febrero. “Álvaro Obregón, más de tres años de veto a las urnas”. *NVI Noticias*. <http://veracruzpolitico.com/oaxaca/locales/%C3%A1lvaro-obreg%C3%B3n-m%C3%A1s-de-tres-a%C3%B1os-de-veto-las-urnas>
- ProDESC. 2015, 19 de junio. Violencia, engaños y falsas promesas por parte de la empresa Demex para la imposición de proyectos eólicos en Unión de Hidalgo, Oaxaca. *Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.S. (ProDESC)*.
- Von Bertrab, E. 2016, 1 de abril. “Energía eólica: La lucha por el viento en México”. *Magis*. <http://www.magis.iteso.mx/content/energ%C3%ADa-e%C3%B3lica-la-lucha-por-el-viento-en-m%C3%A9xico>

Otros documentos de consulta

- Gálvez Ruiz, X., Aclé Tomasini, M. y Sosa Suárez, M. 1989. *Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Cuadernos de legislación Indígena*. México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

PERSPECTIVAS CAMPESINAS ANTE LA AGRICULTURA GLOBALIZADA EN COSTA RICA: VISIONES DIVERSAS EN UNA ZONA AZUCARERA EN GUANACASTE, DEL 2015 AL 2018

Katherine Peters

INTRODUCCIÓN

*Yo creo que el desarrollo eso es, beneficia y perjudica
a la vez y todo, cuesta que haya, digamos, un equilibrio.
(Rodolfo, comunicación personal, enero de 2018)*

Justificación y problematización

A pesar de que el sector de la agricultura parece disminuir cada año en el mundo, el número de personas involucradas en el agro sigue creciendo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los países desarrollados ven una merma de la población económicamente activa en el sector agropecuario entre 1980 y 1995, pero los países subdesarrollados ven un crecimiento (Fernández Arias, 2003).

Para los “subdesarrollados”, el sector agropecuario contribuye a una parte fundamental de la economía nacional. Según la FAO, los países desarrollados manejan una balanza de comercio negativa en la agricultura, mientras que la de los subdesarrollados es positiva, a pesar de tener una balanza negativa de comercio internacional en general (Fernández Arias, 2003). El actual Ministro

de Agricultura de Costa Rica señaló, en una reciente teleconferencia, que la realidad descrita todavía se refleja en este país centroamericano (Arauz, 2015). Actualmente, la agricultura sigue siendo un elemento fundamental en las negociaciones económicas mundiales, como se aprecia en los debates alrededor de la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Nairobi, Kenya (2015). Gran parte de la discusión entre los países desarrollados y subdesarrollados tiene que ver con las reglas acerca de los precios y subsidios para la agricultura (Patnaik y Wise, 2015). Mientras que el mundo desarrollado provee subsidios altos para sus agricultores, insiste en que los países en vías de desarrollo no cuenten con apoyo para su agricultura dentro del marco de la Ronda de Doha de la OMC. El hecho de que las negociaciones mundiales sobre el comercio se puedan obstaculizar por desacuerdos sobre la agricultura muestra la magnitud de este sector en el mundo.

El desarrollo y la agricultura en América Latina

Long y Roberts (1997) explican que la agricultura de América Latina, desde la colonia, siempre ha servido para satisfacer la demanda de los países industrializados en Europa y, luego, de Norteamérica, y ha funcionado utilizando el capital de estos países.

Después de 1950, cuando se empezó a utilizar el término *desarrollo*, las estrategias capitalistas hacia el agro en América Latina se conformaban de la asistencia internacional (para el desarrollo del agro), las políticas de la Alianza del Progreso del presidente Kennedy de EE. UU. y la concentración de tierras para la agricultura capitalista “eficiente”, que podía utilizar las técnicas de la Revolución Verde para producir cultivos en grandes terrenos ocupados por enclaves capitalistas de diferentes tamaños y cooperativas de productores (Long y Roberts, 1997). Estas prácticas condujeron a un proceso de proletarianización de quienes se dedicaban al campo en América Latina, y una tendencia a que esas personas ocuparan las tierras más pobres de la región.

Costa Rica

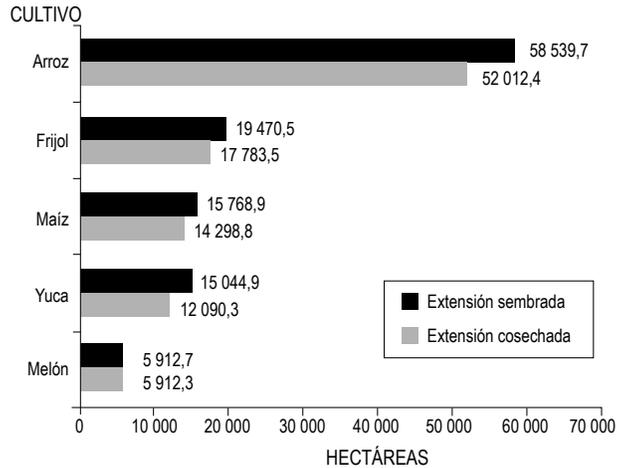
A pesar de ser una economía mucho más pequeña que otras de América Latina, Costa Rica ha seguido esta tendencia de agricultura capitalista, con

efectos similares a los vistos en países como México, Brasil y Argentina. En esa nación centroamericana, se expandía el café en el siglo XIX y se ampliaba la frontera agrícola en los territorios baldíos. Con la tecnificación y expansión del café, la población campesina fue expulsada de los terrenos, lo cual ocasionó una semiproletarización de ella. Abarca (1997) argumenta que el Estado venía jugando un rol de apoyo en ciertos aspectos, aunque “sin una política global y coherente” (Abarca, 1997: 30). En Guanacaste, hubo un enfoque en la tala de madera y, después de 1950, los líderes locales y nacionales aprovecharon las condiciones internacionales para promover una participación notable de Costa Rica en el mercado internacional de la carne de res (Edelman, 1992).

Con el embargo de los Estados Unidos en Cuba, la caña de azúcar también se explotó en Costa Rica como un producto de exportación y, de esa forma, ganó más importancia que nunca. Entre 1950 y 1985, las haciendas ganaderas guanacastecas se empezaron a convertir en plantaciones de caña de azúcar, de acuerdo con el modelo de desarrollo general del país respecto a la consolidación de la agricultura capitalizada para la exportación. El tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA) ha confirmado la relevancia de la caña de azúcar como oferta costarricense en el mercado.

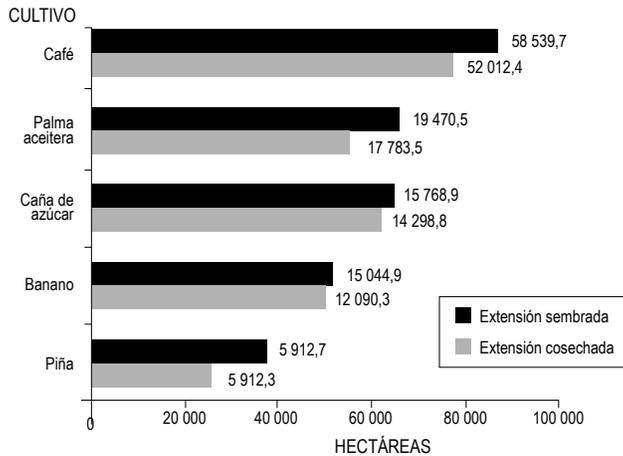
El más reciente censo de agricultura en Costa Rica, realizado en el 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), demuestra que unas 2,4 millones de hectáreas (la mitad del territorio nacional) tienen vocación agropecuaria. Esa cantidad equivale a un total de 93 518 fincas (INEC, 2015). Los datos demuestran, por un lado, una distribución desigual de tierra y, por otro, una tendencia hacia el capitalismo agrario con cultivos de exportación y no de subsistencia, ni para el mercado interno (figuras 1 y 2). El uso principal de la tierra agropecuaria es para la crianza de ganado, lo cual también representa un porcentaje desproporcional del terreno: el 28,5 % de las fincas y el 43,4 % de las hectáreas (INEC, 2015).

FIGURA 1. Costa Rica: Extensión sembrada y cosechada en hectáreas por los principales cultivos anuales 2014*



* Corresponde a los cultivos con mayor extensión.
Fuente: INEC (2015).

FIGURA 2. Costa Rica: Extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas por los principales cultivos permanentes 2014*



* Corresponde a los cultivos con mayor extensión.
Fuente: INEC (2015).

El campesinado

Este estudio busca entender las experiencias de las personas campesinas en el contexto de la agricultura globalizada. Una parte de la complejidad relacionada con esta problematización se asocia a un término básico dentro de esta discusión: el campesinado.

Además de la dificultad de definirlo, fenómeno que viene de la historia diferenciada del campesinado en Europa (donde ha habido debate teórico durante siglos sobre la definición y el rol del campesinado) y el campesinado en América Latina (con elementos indígenas y con condiciones políticas diferentes dentro de un contexto de la periferia de la economía industrializada global), no es posible decidir si este conjunto social está desapareciendo o persistiendo en el mundo.

En Costa Rica, Rodríguez Solera (1992) expone procesos tanto de descampesinización como de recampesinización dentro de territorios cercanos en el mismo pequeño país, con una tendencia de recampesinización durante tiempos de crisis económica. En general, parece persistir un consenso en la literatura de que muchas personas campesinas, particularmente en Costa Rica, no son “puras” en el sentido de practicar exclusivamente la agricultura de subsistencia en una situación autónoma o necesariamente dentro de tierras propias o alquiladas, sino que se describen como actores económicos complejos (con diferentes niveles de inserción en el mercado y, por ende, con elementos de la clase proletaria) y también como actores culturales complejos (con prácticas y valores tradicionales de comida, música, artesanía y relaciones con el medioambiente).

Además de ser un grupo definido por su modo de vida y culturas, en Costa Rica, como en otros países, el campesinado también se ha destacado por sus acciones colectivas ante amenazas a su existencia. Edelman (1999) describe tales manifestaciones, en el caso de Costa Rica, como reacción a la apertura económica y a las políticas de ajuste estructural durante la década de los ochenta. Estas acciones colectivas incluían protestas, la organización de movimientos sociales y demandas sobre las políticas del agro. En su trabajo sobre el latifundio en Guanacaste, Edelman (1992) también describe acciones

individuales de protesta en el estilo de James Scott (1985), planteadas como verdaderas acciones de protesta permanente (y no solamente acciones culturales campesinas) y tomadas dentro y fuera de movimientos organizados.

El objetivo de esta investigación radica en distinguir las resistencias y adaptaciones del campesinado al modelo capitalista de desarrollo en una zona azucarera de Guanacaste, Costa Rica, del 2015 al 2018.

Objetivos específicos

1. Contextualizar la situación del agro en el territorio de estudio.
2. Explorar los subgrupos campesinos actuales en Ortega y Bolsón, según su modo de vida.
3. Conocer las perspectivas de los habitantes rurales sobre la situación actual del agro con enfoque en sus resistencias y adaptaciones al modelo.

MARCO TEÓRICO

Algunos autores han identificado dos paradigmas principales que buscan explicar la situación del campesinado en la agricultura capitalista mundial. Edelman (2016) explica los dos paradigmas como un debate entre la exclusión del mercado del campesinado versus la explotación del campesinado dentro del mercado:

Mientras los defensores de la sabiduría convencional plantean, por ejemplo, que las causas de la pobreza rural radican en la exclusión o el aislamiento del mercado y que las soluciones deben de enfatizar una integración más estrecha en el sistema comercial nacional e internacional, la crítica mantiene por su parte, que las raíces de la pobreza se encuentran en el tipo de inserción adversa en los mercados que los sectores pobres padecen. Las políticas, entonces, en vez de promover una mayor vinculación con el mercado, tendrían que centrarse en la transformación de las relaciones sociales de explotación. (Edelman, 2016: 24)

En varios artículos, Mançano Fernandes (2014) define los dos paradigmas principales existentes para entender el destino del campesinado dentro de la política económica agraria: el capitalismo agrario y la cuestión agraria. Para ese autor, el capitalismo agrario es parecido a lo expuesto anteriormente sobre la exclusión según Edelman (2016): “Las desigualdades generadas por las relaciones capitalistas son un problema coyuntural y puede ser superado por medio de las políticas que posibiliten la ‘integración’ al campesinado o ‘agricultor de base familiar’ al mercado capitalista” (Edelman, 2016: 26).

La cuestión agraria, en cambio, enfatiza la explotación y la necesidad de nuevas estructuras: “Tiene como punto de partida las luchas de clases sociales... de modo que la lucha contra el capitalismo es la perspectiva de construcción de otra sociedad” (Mançano Fernandes, 2014: 25). En síntesis, prosigue Mançano (2012), “para el paradigma de la cuestión agraria, el problema está en el capitalismo y para el paradigma del capitalismo agrario, el problema está en el campesinado” (Mançano Fernandes, 2014: 26).

Mançano expone los dos puntos de vista, pero toma el lado de la cuestión agraria y, al mismo tiempo, explica que el capitalismo agrario ha sido el paradigma dominante en la academia y la política en América Latina, incluso en los movimientos sociales. El debate paradigmático toma vida, según Mançano (2012), en los ministerios del gobierno brasileño y en los movimientos sociales. Por ejemplo, en entidades como la Asociación Brasileira del Agronegocio (ABAG) y la Confederación de la Agricultura y la Pecuaria de Brasil (CNA); así como en el Ministerio de la Agricultura, la Pecuaria y el Abastecimiento (MAPA) y el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA).

En Costa Rica, el sector cañero, representado por la Liga de la Caña de Azúcar (Laica) y apoyado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cae bajo el paradigma del capitalismo agrario, mientras que el anterior Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y algunos movimientos campesinos, como la Unión de Pequeños Agricultores de la Región Atlántica (Upagra), representarían tendencias de la cuestión agraria.

Para clarificar más estos dos paradigmas, Mançano (2015) explica que la cuestión agraria expone una potencial “muerte física del campesinado por la

vertiente proletarista”. Mientras que el capitalismo agrario plantea una muerte ideológica del campesinado: ni siquiera existe en el capitalismo agrario porque el término empleado es el de “agricultor familiar”.

En ese sentido, el campesinado, para Mançano, es el mismo individuo que el agricultor familiar, con la excepción de que el término utilizado para describirlo depende del paradigma que se adopte. *Campesino*, entonces, pasa de ser un término económico a ser un término político, de lucha de clase y de conflictividad. En la figura 3, se explican visualmente los dos paradigmas.

FIGURA 3. El debate de paradigmas y los tipos ideales de Mançano Fernádes (2015)



Fuente: recreación de la figura de Mançano Fernádes (2015).

Ambos paradigmas responden de manera diferente a la pregunta fundamental del desarrollo de la agricultura, la misma que está en el telón de fondo de la tesis resumida en este artículo: la permanencia o fin del campesinado. En la cuestión agraria, se sostiene que la comunidad campesina se proletariza o es creada, destruida y recreada por el desarrollo contradictorio del capitalismo. El

capitalismo agrario pone énfasis en la agricultura familiar, que, como Mançano propone, es una realidad más de los países desarrollados. Si se combinan esas categorías con Mançano (tabla 1), se enlazan las clases explotadoras con “agronegocio” y “agricultores familiares”, y las clases explotadas con “campesinos” y “proletario”.

TABLA 1. Diferencias del campesinado entre la cuestión agraria y el capitalismo agrario

| El campesinado | La cuestión agraria | El capitalismo agrario |
|--|--|--|
| Relación con el capital | Sujeto que resiste | Objeto (dominado por el capital) que busca adecuarse |
| Problema principal del desarrollo | Las contradicciones del capitalismo | La incapacidad del campesinado |
| Conflictividad | Un movimiento de destrucción y recreación de relaciones sociales | Un movimiento de metamorfosis del campesinado |
| Transformación | A la proletarización o destrucción y recreación del campesinado | A la agricultura familiar |

Fuente: Mançano (2004).

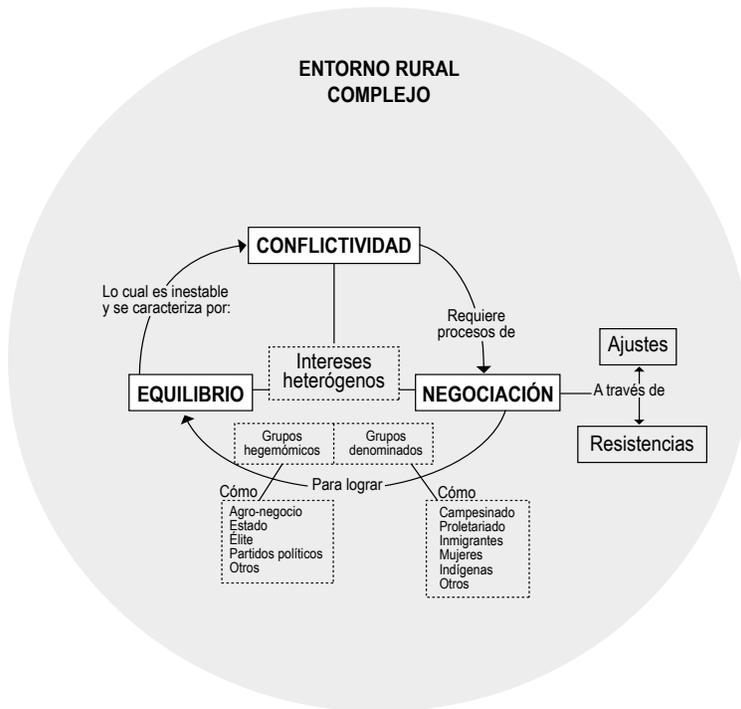
Relaciones de poder y la conflictividad

Los entornos rurales son complejos y están compuestos por grupos diversos en cada una de las categorías del desarrollo rural territorial: económica-productiva, sociocultural, político-institucional, y todos en un ambiente natural. En cada entorno rural, existen intereses heterogéneos con diferentes objetivos y prioridades. La capacidad de los grupos de destacar sus reivindicaciones depende en gran parte del poder económico y político dentro de un sistema capitalista (como es el caso de Costa Rica y su estrategia principal de desarrollo). Por ende, se requiere un enfoque en las fuerzas hegemónicas y los actores dominados dentro de ese sistema.

A partir del análisis de un sistema capitalista con perspectiva económico-productiva, se visualizarán aquellos intereses de los grupos hegemónicos y los grupos dominados dentro del sistema. Es preciso considerar que dentro de esas agrupaciones también existen otras características que no pertenecen a la clase social, sino a la identidad cultural, la edad, la religión, el sexo y el género, etc.

Entonces, dichos intereses heterogéneos con diferentes niveles de poder experimentan un entorno rural complejo de conflictividad histórica y actual. Esta conflictividad requiere la negociación de los intereses, lo cual se logra a través de ajustes y resistencias. Los procesos de negociación propician un equilibrio inestable que no está libre de la siempre presente conflictividad, y por eso el ciclo sigue todos los días, años, épocas, etc. La figura 4 representa una visualización del esquema conceptual del marco teórico.

FIGURA 4. Esquema conceptual del marco teórico



Fuente: elaboración propia.

A continuación, se explicará cada uno de los elementos de la tabla anterior haciendo un enfoque especial en el campesinado como grupo de interés. Como se verá, el campesinado también es complejo, no solamente por su relación con el capitalismo, sino también por su diversidad.

La conflictividad

Mançano (2004) rescata el rol central de la conflictividad (conflictualidad, en sus artículos, escritos en portugués) en su tratamiento del paradigma de la cuestión agraria. La conflictividad se puede entender como un grado subyacente de una situación de conflicto, o como un escenario más amplio dentro del cual el conflicto designado se encuentra. Por su parte, Iván Monzón (2015) expresa que “la conflictividad contiene dentro de sí a los diferentes conflictos, pero los conflictos no contienen en su totalidad todo lo que implica la conflictividad” (Monzón, 2015: párr. 6.). Así pues, no se trata de un conjunto de conflictos relacionados, sino una “constante en las relaciones sociales [que] implica la existencia de condiciones económico-estructurales y psicológico-culturales” (Monzón, 2015: párr. 5), en particular “los elementos culturales en los escenarios políticos y sociales” que provocan ciertos tipos de comportamientos en las personas frente a sus necesidades.

Martínez y Villagrán (2009) concuerdan con esa visión al mencionar que la conflictividad consiste, sobre todo, en “las estructuras, hábitos culturales y prácticas que propician los conflictos” (Martínez y Villagrán, 2009: 19) y agregan que el aumento del enfrentamiento está estrechamente vinculado con la satisfacción de las necesidades básicas de una población, por lo cual la falta de cumplimiento en cuanto a políticas públicas e iniciativas privadas contribuye al agravamiento de la conflictividad (Martínez y Villagrán, 2009).

Mançano (2004) describe la conflictividad como un “movimiento de destrucción y recreación de relaciones sociales, de territorialización, desterritorialización y reterritorialización del capital y del campesinado” (Mançano, 2004: 3). Por consiguiente, el desarrollo y la conflictividad ocurren simultáneamente. La conflictividad es un proceso constantemente alimentado por las contradicciones y desigualdades del capitalismo (Mançano, 2004). Hasta ahora, este abordaje conceptual remite a la pregunta sobre la definición y el destino del campesinado

dentro de un contexto de la agricultura globalizada en constante transformación. El campesinado es visto como un posible grupo o clase social, impactado por fuerzas estructurales de relaciones de poder, las cuales se pueden describir y analizar objetivamente (créditos, leyes, tenencia de tierra, etc.). También, se asocia a las personas dentro de los contextos rurales con elementos culturales y perspectivas muy subjetivas, con modos de vivir, opiniones y visiones sobre la vida que pueden ser diferentes a los puntos de vista de otros grupos.

El concepto de la conflictividad sirve de ligamen entre estos elementos objetivos y subjetivos porque reconoce que las perspectivas de los actores rurales (tanto de los campesinos como de otros actores, como del agronegocio) van a ser diferentes. Admitir la soberanía de estas perspectivas divergentes es aceptar la conflictividad como un elemento permanente de los procesos de transformación rural.

La negociación y el equilibrio en un contexto de conflictividad

En la literatura, la negociación se propone como una manera de vivir la conflictividad. La negociación ante la hegemonía coadyuva a entender cómo se vive el conflicto, particularmente de clase. Román (1994) rescata la definición de hegemonía de Gramsci para describir la situación del campesinado costarricense: “Es ante todo una estrategia de adquisición de consentimiento activo de las masas a partir de la promoción de un desarrollo autónomo y autogestor de la sociedad civil y todos los aparatos de hegemonía” (Román, 1994: 18).

Para lograr ese consentimiento, los grupos dominantes hacen concesiones a los grupos dominados, pero eso no significa que los grupos dominados están convencidos del modelo hegemónico. Como explica Thompson (1978), “la hegemonía [no] impone una dominación plena sobre los actores subalternos... [y no implanta] en sus mentes al nacer las categorías de subordinación” (Thompson, 1978: 164). Estas categorías son retadas, corregidas y hasta suprimidas por las experiencias de estos actores subalternos. Entonces, la hegemonía se entiende como las fuerzas mayores que actúan sobre (en este caso) el campesinado, pero no tiene el poder de dominarlo al cien por ciento. De hecho, el campesinado decide participar en la hegemonía, pero no está convencido del todo de que es lo mejor.

Molina (1988) citado en Román (1994) describe esta realidad de consentimiento cauteloso por parte de la comunidad campesina cafetalera costarricense en el siglo XIX: “El productor directo no vaciló en sumarse a la agricultura comercial y, verdaderamente, se benefició del cambio, pero esto no le impidió percatarse de que la transformación socioeconómica trastornaba, de punta a punta, el mundo conocido” (Román, 1994: 33). Resulta notorio, en este ejemplo de Molina, un fenómeno de “sentimientos encontrados” en el interior del campesino cafetalero costarricense, una realidad que se presta para la negociación entre actores, para limitar la dominación de la hegemonía y también la participación del campesinado dentro de la hegemonía.

En su valioso estudio sobre grupos organizados en Costa Rica en los años ochenta, Román (1994) revela que en esa década se vivió un proceso de “negociación política” como parte del “pacto cafetalero”, en el cual “la hegemonía se busca obtener más por el consenso que por la represión” (Román, 1994: 21). Román (1994) define esta negociación como un “proceso de comunicación bilateral alrededor de conflictos con el propósito de llegar a una resolución conjunta” (Román, 1994: 198).

Se trata de una negociación política entre grupos organizados. Pero la negociación también se presenta en contextos de conflictividad generalizada, entre clases sociales o grupos de interés, como las clases dominantes (en este caso, representadas por la azucarera El Viejo y el Estado), y las clases subalternas (representadas por el proletariado y el campesinado). Dentro de las clases sociales, también existen negociaciones entre generaciones, sexos, religiones, razas, etc.

En el caso de Costa Rica, Román (1994) propone que existe (o existía) un compromiso político, resultado de este proceso de negociación, un compromiso basado en “la armonización entre la conciencia de la desigualdad con la conciencia de la mutua necesidad” (Manuel Solís, 1990: 283, citado en Román, 1994: 32). Esta armonización es compleja en el ámbito político, pero también desde el punto de vista personal y psicológico, ya que resulta en un debate de paradigmas y genera sentimientos encontrados.

Equilibrio: hasta cierto punto

Tanto Gramsci (1973) como Thompson (1978) destacan que los procesos de negociación existentes en las relaciones de clases tienen un elemento que denominan *hasta cierto punto*. Este elemento se llamará *el equilibrio de la realidad del contexto*, en reconocimiento del poder de negociación de cada actor, de los grupos dominantes y los subalternos. Gramsci (1973) lo caracteriza así: “Equilibrios en donde los intereses del grupo dominante prevalecen, pero hasta cierto punto, es decir, hasta que chocan con el mezquino interés económico corporativo” (Gramsci, 1973: 76).

En Thompson (1987), hay ecos de esa idea de equilibrio: los pobres participan en él, pero demandan también cierto grado de paternalismo a cambio. Una realidad fundamental dentro de este equilibrio es que la oligarquía creó (*hasta cierto punto*) las leyes que gobiernan su sistema de poder. La multitud quiere participar *hasta cierto punto* (pero no hasta perder su libertad) en este sistema, y la oligarquía también quiere que participe la multitud *hasta cierto punto* (pero no hasta que esa multitud obtenga el poder político) en el sistema. Para Gramsci, este equilibrio se vive en el Estado, donde se negocian tales relaciones de corte clasista.

Al igual que el caso brasileño, donde existen instituciones del Estado dentro de los dos paradigmas propuestos por Mançano, en Costa Rica hay evidencia de esas negociaciones, las cuales han resultado en instituciones que protegen tanto los intereses del agronegocio de exportación (Promotora del Comercio Exterior (Procomer) y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entre otros) como a los grupos subalternos (Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otros). Román (1994) señala la posición contradictoria que asume el Estado en este equilibrio: “por un lado, se convierte en un espacio permanente de conflicto y negociación entre los distintos sectores sociales. Por otro, se transforma en un lugar constitutivo, es decir, productor constante de nuevos conflictos” (Román, 1994: 21).

Este equilibrio es, entonces, un tanto inestable, en tanto los dos (o varios) lados siempre están midiendo las posibilidades de perder su libertad o su poder. Las

resistencias representarían intentos de “probar” el sistema para entender el posicionamiento de cada actor y las posibilidades para renegociar el *statu quo*; en ese sentido, son parte del equilibrio en un contexto de conflictividad.

La resistencia

El concepto de resistencia que viene de Scott (1985) ha sido debatido bastante en la literatura sobre el campesinado en el mundo. Pese a que la resistencia individual descrita por Scott (1985) no tiene la característica de ser efectiva en el mismo sentido que un movimiento social organizado, con reivindicaciones claramente elaboradas, el concepto sigue siendo crucial para entender los entornos de la conflictividad. A pesar de que en el pasado existieran en Costa Rica, particularmente en Guanacaste, movimientos de campesinos y grupos productivos organizados, el hecho de que hoy esa colectividad se encuentre más débil no indica conformidad con el modelo imperante. El concepto de la resistencia desarticulada pone en evidencia los desacuerdos; y vale la pena estudiar más su presencia.

En la tesis resumida en este artículo, se hallaron varios ejemplos de resistencia campesina ante la hegemonía del Estado y de la azucarera El Viejo. Los detalles se expondrán en otro artículo, pero, con el fin de detallar un poco más el proceso de la conflictividad-negociación-equilibrio, se comparten algunos ejemplos de resistencia que están ocurriendo en la zona de estudio. Existen acciones tanto individuales como colectivas que retan a la hegemonía; por ejemplo, el vandalismo en la azucarera (el robo de cables o la destrucción de bombas de riego), la falta de participación en los grupos comunitarios que reciben fondos y beneficios de la azucarera (o el “serruchar el piso” (concepto muy costarricense) de los líderes de estos grupos), la quema de cañales por trabajadores o vecinos sin el permiso del dueño del cañal, bloqueos de carreteras en mal estado (por culpa, según los habitantes, de las grandes máquinas de la azucarera), prácticas campesinas clandestinas (como el procesamiento de la carne fuera del sistema institucional de las carnicerías aprobadas por el Estado) y la “lagartea” (otro ejemplo de interés por su relación con el concepto de localidad).

METODOLOGÍA

El enfoque de esta investigación es cualitativo, explora las perspectivas y experiencias de las personas participantes. El abordaje fenomenológico se presta para este tipo de estudio, ya que busca abrir camino a las perspectivas de quienes lo integran. Hernández (2014) afirma que, en la fenomenología, a diferencia de la teoría fundamentada o el diseño narrativo, “se explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno” (Hernández, 2014: 493); en este caso, con la resistencia o la adaptación a las nuevas realidades generadas por las políticas de agricultura.

Aunado a lo anterior, señala que “una pregunta habitual de investigación fenomenológica es la siguiente: ¿cuál es el significado, estructura, y esencia de una experiencia vivida por una persona (individual), grupo (grupal), o comunidad (colectiva) respecto de un fenómeno?” (Hernández, 2014: 493). En este caso, la pregunta clave fenomenológica del estudio sería: ¿Cuáles perspectivas del ser una persona campesina afloran en el contexto actual de globalización del agro en una zona azucarera de Guanacaste, Costa Rica, y qué acciones desarrollan ante estos puntos de vista? La presente investigación tiene alcance descriptivo; es decir, busca describir las perspectivas y acciones de adaptación-resistencia del grupo social elegido dentro de su contexto.

Para entender el contexto, Edelman (1992) propone una metodología que estudia cinco niveles de relaciones: el mercado global y las políticas que obligan a participar a los países “subdesarrollados”; el Estado nación y sus clases, facciones y grupos de interés; la institucionalidad nacional; la provincia como territorio; y el ámbito local y las perspectivas y vidas individuales de los habitantes (quienes tienen diferentes grados de conciencia sobre los factores que actúan en sus vidas). Este estudio busca pistas en los primeros cuatro ámbitos para entender el entorno de las perspectivas campesinas (el quinto nivel) ante la agricultura globalizada en el tercer régimen internacional de alimentos, una economía capitalista neoliberal.

Como se trata de un contexto complejo, no es posible correlacionar las acciones campesinas con ciertas políticas del agro. Sin embargo, el objeto de estudio

va más allá de explorar la realidad: es entender las perspectivas de individuos dentro de un contexto específico de múltiples niveles de complejidad.

Supuestos filosóficos, los cuatro planos y su relación con el estudio

Castillo (2000) describe la fenomenología como metodología que sirve para “comprender las habilidades, prácticas y experiencias cotidianas... de los seres humanos” (Castillo, 2000: 27). Aunado a lo anterior, expone cinco supuestos filosóficos sobre la persona que fundamentan la fenomenología interpretativa. De estos, se harán tres pasos:

1. **“Los seres humanos tienen mundo”**. Castillo relata la idea de Heidegger de que “el mundo está constituido y es constitutivo del ser”, y que el mundo da sentido a las habilidades, significados y prácticas compartidos por una cultura y articulados por un lenguaje. Para este estudio, “el mundo” es la agricultura globalizada, la situación del campesinado (como clase y como cultura), y el estado de la cuestión agraria.
2. **“La persona como un ser para quien las cosas tienen significado”**. Castillo demuestra que la vida o la actividad práctica (la experiencia) de la persona impactan el significado. En este análisis, el significado que tiene la vida para los campesinos en Ortega y Bolsón podría depender de su modo de vivir, o sea, la forma como se relacionan con el mundo de la agricultura, o con otros elementos culturales particulares a la zona o a la persona entrevistada.
3. **“La persona es un ser autointerpretativo, corporal y temporal”**. Este es el paso interpretativo de la fenomenología: los seres humanos no son teóricos, sino experimentales, en el sentido de que lo importante para ellos es así porque es relevante en sus vidas. El material teórico sobre el campesinado explica este punto muy claramente: el campesinado, como cualquier clase social, no necesariamente existe con una conciencia de clase *per se*, sino con una experiencia vital en el tiempo. Como este estudio busca entender a las personas campesinas en sus interpretaciones individuales (y no necesariamente como un movimiento social o de clase), la fenomenología es particularmente útil.

Fermoso (1989), por su parte, también establece otros pasos similares a los tres descritos anteriormente: los “cuatro planos: el mundo teórico, el mundo vital o actitud naturalista, la actitud fenomenológica y la subjetividad trascendental” (Fermoso, 1989: 124).

1. **El mundo teórico.** Es la teoría de la cuestión agraria, el campesinado, y la resistencia o las adaptaciones.
2. **El mundo vital.** Presenta el contexto de las experiencias de los campesinos en su ambiente (*Umwelt*, según Husserl).
3. **La actitud fenomenológica.** Ayuda a entender el mundo del campesinado desde su perspectiva, con la ayuda de la teoría. Por ejemplo, los miembros de ese grupo reaccionan a la agricultura globalizada como personas, como clase y como cultura, sin pensar precisamente en su identidad campesina. O puede que sí. El abordaje fenomenológico coadyuva a escuchar a cada persona describir sus experiencias y sus perspectivas ante el fenómeno de la agricultura globalizada.

TABLA 2. Metodología fenomenológica del presente estudio

| Supuesto filosófico (Castillo, 2000) | Plano (Fermoso, 1989) | Objetivo específico | Marco teórico | Paso metodológico | Análisis |
|--|---|--|---|---|--|
| Los seres humanos tienen mundo | El mundo teórico | Contextualizar la situación actual del agro | Cuestión agraria Caña en Costa Rica Campesinado | Revisión de la literatura | Describir la situación del agro actual con enfoque en la caña en Costa Rica Contemplar la cuestión agraria y el campesinado |
| La persona como un ser para quien las cosas tienen significado | El mundo vital | Explorar los subgrupos campesinos, según su modo de vida | Subgrupos del campesinado Resistencias Adaptaciones | Entrevistas abiertas a expertos Observación no participante (diario de campo) | Guiar la interpretación de la contextualización y las entrevistas Codificar el diario de campo |
| La persona es un ser autointerpretativo | La actitud fenomenológica y la subjetividad trascendental | Conocer las perspectivas de las personas habitantes | Reducción fenomenológica | Entrevistas semiestructuradas con personas campesinas, según modo de vida (Esquema A) | Codificar las entrevistas |

Fuente: elaboración propia.

Técnicas utilizadas

Las técnicas utilizadas incluyen cuatro principales herramientas clásicas de la investigación cualitativa: 1) la revisión de la literatura, 2) la observación no-participante, 3) la entrevista abierta y 4) la entrevista semiestructurada, utilizando la herramienta del esquema A.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para lograr un acercamiento al primer objetivo específico (contextualizar la situación del agro en el territorio de estudio), se repasaron detalladamente los materiales de fuentes secundarias acerca de la zona examinada. En cuanto a la observación del material de campo, se trabajó en tres niveles de análisis a partir de un proceso similar a los grados de análisis de Cabrera (2007) en su investigación sobre Guanacaste. Primero, se volvieron a escuchar las entrevistas grabadas, utilizando la herramienta del esquema A y haciendo anotaciones en los siguientes elementos: 1) campesino, 2) la caña y la agricultura, 3) reacciones y sentimientos, y 4) políticas. De este primer nivel, resultaron las categorías y subcategorías del campesinado.

De la información anotada en el primer nivel, se identificaron posibles códigos que coincidieron con las entrevistas y los objetivos de estudio, basados en el marco teórico y la metodología. Se levantó una lista preliminar de posibles códigos. También se repasaron las hojas dobles de observación de campo para corroborar códigos y temas de análisis. Esta fase resultó en cuadros de “temas por analizar”.

El tercer nivel correspondió a un análisis de las transcripciones definitivas de las grabaciones, utilizando la herramienta de Atlas.ti. Se asignaron códigos a citas de las entrevistas grabadas en el campo y se observaron en conjunto con el marco teórico, en un proceso circular. Por ejemplo, la conflictividad se mencionó en el marco teórico original, pero, después de ver los resultados, se notó que el concepto fue más relevante de lo pensado. Por ende, el marco teórico se reconstruyó de acuerdo con los resultados, y viceversa.

Definición del contexto

El primer objetivo específico se vincula con entender el contexto del campesinado, lo cual se estudió por medio de fuentes secundarias. La zona azucarera escogida incluye los tipos de colectivos campesinos asociados a la caña de azúcar (representados por el grupo Líderes de la Bajura, organización que canaliza recursos de la azucarera para las comunidades), la ganadería y el Estado costarricense: es la histórica hacienda El Viejo, originalmente la cofradía El Viejo y la cofradía El Rosario.

Dentro de la zona de influencia de El Viejo, un latifundio (hacienda El Viejo) hecho plantación (azucarera El Viejo), existen cuatro pueblos con una población que representa los cuatro tipos de campesinado definidos en la propuesta del estudio: los pueblos casi enclave del proletariado y campesinos de La Guinea y Coralillo, en Filadelfia, y los pueblos de campesinos y agricultores familiares de Ortega y Bolsón (mapa 1).

Participantes

Se hicieron 14 entrevistas semiestructuradas, con seis mujeres, seis hombres y dos grupos: la Asociación de Pequeños Productores en Ortega (con tres integrantes varones presentes) y la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) en el pueblo de La Guinea (con 26 personas: hombres y mujeres, jóvenes y adultos, presentes). En atención a la metodología, se elaboró un cuadro para mostrar los diferentes tipos de personas rurales entrevistadas en la zona de la azucarera El Viejo. De acuerdo con las categorías de Mançano, se aprecia que se entrevistó a, por lo menos, dos personas de cada categoría.

TABLA 3. Participantes en el presente estudio según categoría de Mançano

| Proletario | | Campesino | | Agricultor familiar | | Campesino no agrícola | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
| Hombre empleado de la azucarera (HEA) | Tiempo completo en EV: técnico mecánico | Mujer campesina con proyectos (MCP1) | Realiza actividades campesinas: cuajada y tortillas; cocina con leña. No tiene otro trabajo | APAO | Asociación de agricultores con tierra propia | Mujer emprendedora (ME) | Proyectos de emprendimiento con mujeres, con animales de patio |
| Peones y jornaleros | | | | Hombre campesino G | Proyecto turístico | | |
| La Guinea | Mujeres vendedoras, trabajo doméstico en planta | Hombre campesino pensionado (HCP) | Pensionado de la azucarera, ordeña vacas y tiene caballos | Hombre ganadero (HCG) | Ganadería y caña | Mujer emprendedora turismo (MET) | Pequeña empresa de turismo exitosa, con familiares agricultores |
| Mujer Empelada Azucarera (MEA) | Trabaja temporalmente, recibe apoyo de familiares en San José | Hombre campesino luchador (HCL) | Tenia caña, hace proyectos de emprendimiento, estudia | Hombre ganadero (HG) | Ganadería | Ingenio no | |

| Proletario | Campesino | Agricultor familiar | Campesino no agrícola |
|--|---|---|-----------------------|
| No trabaja Presidente ADI | Mujer campesina ama de casa (MCA1) | Hombre pensionado sector público (HPSP) | |
| Familiares son peones | No trabaja: familiares son empreendedores en turismo | Pensionado de instituciones públicas, tenía ganado | |
| Mujer ADI Mujeres hacen ventas Hombres buscan trabajos en invierno | | | |

Fuente: elaboración propia.

Campesinado: visiones desde la gente

En un estudio fenomenológico, pedir que las personas definan los términos ayuda a entender la experiencia subjetiva y las motivaciones de cada quien para su pensar y actuar. En un campo teórico tan diverso, con valoraciones distintas sobre el campesinado (si es algo del pasado que debe desaparecer o si es una clase de lucha social, o si es una cultura que eventualmente va a salvar al mundo del hambre causado por la agroindustria), buscar las mismas perspectivas de las personas rurales marginales ayuda a visualizar cómo se ubican en los debates, y qué significado tiene para su relación con las fuerzas hegemónicas.

Las personas campesinas (según mi definición amplia con las categorías de Mançano) entrevistadas tienen muchas ideas y sus propias definiciones sobre el campesinado, las cuales coinciden con la teoría. A menudo se manifiesta que la comunidad campesina es cosa del pasado o representa la pobreza; o se rescata a la categoría como una clase productiva sobre la tierra; o se menciona que representa una identidad que va más allá de la mera producción; y todavía se debate el término entre sí.

En las entrevistas, algunas personas rescataron la definición más básica y con menos conciencia de clase social del campesinado: personas que viven en el campo y hacen actividades características del campo:

Soy campesina porque vivo en el campo. (Ofelia, comunicación personal, enero del 2017)

Yo siento que todos los que vivimos aquí somos campesinos, sencillamente desarrollamos una tierra, vivimos aquí, hacemos labores normales como un campesino... (Participante de La Guinea, comunicación personal, enero del 2017)

Casi todas las personas entrevistadas destacaron la idea de trabajar la tierra y las cosechas como actividad fundamental para definir al campesinado, aunque con prácticas tradicionales, pero también nuevas, de sembrar y cosechar. Para algunas personas, esta actividad lleva consigo una legitimidad formal y hasta legal:

Diay, legalmente, campesino es más que todo el que labora la tierra, ¿verdad? Aquí hay mucha gente que siembra frijoles y todo eso para el gasto de la casa. Si frijoles, maíz... si aquí hay bastante maíz nuevo. (Santos, comunicación personal, enero del 2017)

Dentro de las entrevistas, se notó un énfasis en que esta agricultura campesina es diferente de la industrializada y capitalizada. Se trata de una actividad que se podría llamar de subsistencia o informal, no industrial, practicada a la fuerza (debido al hambre) o por opción del mismo campesino. No emplean trabajadores asalariados. Por estas razones, varias personas consideran con orgullo que es una práctica “en contra del sistema” para preservar la autonomía campesina.

[La caña] es un monocultivo que un campesino propiamente no lo puede sostener solo porque depende de una industria... Que en algún momento le llamamos de subsistencia a la pequeña producción. Pero que es fundamental. Por ejemplo, estas comunidades eran autónomas cuando producía lo que se consumía, no se dependía de nadie. (Rodolfo, comunicación personal, enero del 2018)

En contra del sistema, ¿verdad? En contra del sistema, siempre voy a hacerlo porque a mí me gusta y lo que tengo [es] la mínima oportunidad de hacer. Siempre lo voy a hacer. (Victoria, comunicación personal, enero del 2018)

En otras ocasiones, se rescató una identidad campesina cultural o de valores que va más allá de la mera producción agrícola. Se argumentó que, a pesar de que la agricultura ya no es un fuerte económico, la identidad campesina sigue existiendo. Tiene que ver con actividades, con comidas y con rasgos culturales regionales (de Guanacaste). Se habla de que las personas nacidas en la zona pero que no practican la producción agrícola podrían considerarse campesinos si valoraran las tradiciones y la tierra, y una identidad rural.

El campesino es una persona que... ¿qué te digo? Una persona que tiene su finca, que siembra maíz, arroz, que hace sus tortillitas “palmeteadas”, que cocina en fogón, que anda su sombrerito, su machete una persona

campesina viene siendo algo así, que tiene todas las costumbres de aquí, de nuestro pueblo, de Guanacaste. (Sofía, comunicación personal, julio del 2017)

Nacimos aquí todos. Nos criamos aquí. Y... unos estudiamos en San José, otros seguimos en nuestras casas. Y estudiamos aparte. Pero seguimos siendo campesinos y mantenemos nuestras tradiciones, nuestras religiones, mantenemos todas nuestras costumbres, ¿verdad? Como campesinos, siempre valoramos nuestras raíces, de los cuales [sic] nuestros padres nos inculcaron. (Josué, comunicación personal, julio del 2017)

Para mí, el ser campesino es un privilegio. Y es parte de la identidad. Digamos, si nosotros ya no somos, ni somos urbanos, ni somos campesinos, ¿qué somos? Somos nada. (Ofelia, comunicación personal, enero del 2018)

Yo creo que ser campesino es parte de una identidad que [se] lleva. Aunque yo no dirija actividades propias del campesinado, por lo menos apoyar, promover y tratar de que no se pierdan ciertos valores. En el caso de los niños, que no vayan a perder esa cultura campesina... que hayan sembrado un grano de maíz. Es valorar, respetar la tierra, porque es parte de todo, de un todo. Tendrían que barrer con los pueblos para que desaparezca, pero yo creo que si ha logrado para sobrevivir la cultura campesina tantísimas décadas es porque es bien importante, ¿verdad? (Victoria, comunicación personal, enero del 2018)

Se nota en estos últimos comentarios la importancia y el contenido político que goza la identidad campesina. Es algo “nuestro” que se quiere proteger y preservar, sostienen. Si se les quita la identidad de campesino, dejan de existir estas personas, así que prometen luchar para mantener esta identidad hasta que alguien barra a los pueblos para desaparecerlos. Es un discurso que refleja la conflictividad alrededor de la identidad campesina en el contexto actual. A la vez, expone el deseo de mantener la identidad por encima de otra “moderna” o “urbana” o de otro tipo.

Para algunas personas entrevistadas, el término campesino comunica una idea de pobreza admitida. La mayoría de ellas provienen de los pueblos de Corralillo y La Guinea, donde hay menos acceso a la tierra, la educación y el trabajo. Esta definición parece del proletariado rural y alude a un tipo de consciencia de clase porque las personas se diferencian de las clases sociales que no deben trabajar de la misma manera por su reproducción.

Y el campesino ese de ser campesino uno, se puede trabajar en una finca y todo siempre es campesino porque no tenemos cómo... Tal vez le trabajamos a alguien y no es de uno y, en ese momento, uno depende del que le está trabajando. Puramente es así ser campesino, porque no tiene uno plata como para decir... estoy económicamente bien... no soy un campesino... tengo una buena casa y carro y todo, entonces no... (Participante La Guinea, comunicación personal, enero del 2018)

Otras personas definen al campesinado como personas pobres y rechazan esa identidad para sí mismos, porque consideran que es un aspecto pasado que no tiene lugar en la actualidad, o como un problema para el desarrollo. En ese sentido, hablan desde el paradigma del capitalismo agrario, sin problematizar el asunto. Como dice Mançano, se ve el problema en el campesinado y no en el sistema:

No, es que un campesino... Es que yo siento que hoy en día ya no existen los campesinos, ya son tal vez pobladores, pero ya campesino no, porque usted sabe que el campesino es el que usaba el sombrero y la camisita de manga larga y que andaba todos los días bien prensadito, pantalones y sus caites. (Emilia, comunicación personal, julio del 2017).

La conflictividad

Se nota en las entrevistas que la conflictividad empieza con la empresa, aunque podría ser con el modelo en general, o con el Estado. Pero la gente dirige su enojo a la empresa y al Estado en su expresión de poder político, tal vez porque son las manifestaciones más concretas del modelo imperante. No obstante, tal conflictividad se vive a escala local y comunitaria, como se verá más adelante. Por el momento, se analizará la conflictividad fundamental económica y política.

En una zona azucarera, la conflictividad más visible se da entre la compañía grande y los productores pequeños y los trabajadores en la zona, debido a la relación de poder entre ellos. Así se ve en los siguientes comentarios de los representantes de la Asociación de Pequeños Agricultores Orgánicos (APAO):

Rodolfo: La sacarosa, le decían a uno. Traiga el muestreo, que lleve caña del lote para ver cómo está de azúcar para cortarla. Llega uno con la caña, le hacen el muestreo y le dicen que está a 105 de azúcar, y uno se alegra porque es un montón de plata 105. A la hora de llegada, corta el lote, lo lleva y le dicen: “no, su caña salió a 96, a 80”.

Investigadora: Y ¿cómo tiene usted para confirmar lo que ellos dicen?

Constantino: No, no podemos. Es lo que ellos dicen y eso es, ya por estar la caña metida y molida se la va a traer para atrás uno... Y ¿qué va a hacer con la caña uno? ¡No se la puede comer!

Rodolfo: Recibir lo que le den, porque diay. Entonces así nos fueron desapareciendo. Aquí él tenía, yo tenía... Pero así nos fueron desapareciendo y otros más que han desaparecido. Todo eso ha ido cambiando y ha hecho que no sea como muy grata la relación del ingenio. (Rodolfo y Constantino, comunicación personal, enero del 2018)

Sin embargo, las manifestaciones de la conflictividad son múltiples y en diversos grados. Aun las personas que están más de acuerdo con la azucarera reconocen las raíces de la conflictividad y la influencia de la conflictividad en los proyectos comunitarios a muchos niveles, especialmente a nivel de las asociaciones de desarrollo:

Antes los líderes comunales, hace muchos años atrás, hicieron un impacto negativo para todos nuestros habitantes. Entonces, nadie cree, les cuesta creer. Cuando hay una persona con ganas de trabajar, hace las cosas bien. No creen. Entonces, creen que todo el mundo es igual, que quiere robar, entonces, por el contrario, una hora con las personas que tenemos en nuestra asociación muy fina, ¿verdad? Dinero en nuestras bolsas para poder comprar algo. Ha costado cambiarlas porque nosotros

decimos que llevaron mucho palo antes... con los líderes de antes. Entonces, ha costado todavía hacer ese cambio. (Josué, comunicación personal, julio del 2017).

La conflictividad tiene sabor de clase social: con el campesinado rescatando sus reivindicaciones en contra de la hegemonía representada por la azucarera, el Estado y la clase dominante. Algunas personas participantes elaboraron una lista de la clase élite que ha tenido influencia en la zona, según su percepción. Aunque el análisis no sea profundo en las entrevistas, se nota una conciencia de los actores que detentan el poder del contexto, y que no hay igualdad.

[Álvaro Jenkins] fue dueño [de El Viejo], fue accionista, cuando un presidente era socio: Daniel Oduber... y todo eso. Daniel Oduber murió y todo eso. Ya don Álvaro está viejito... y eso como que pasó a otras manos... Ahí llegaba una gente de buen haber, en aviones: hondureños y diay... Guatemaltecos, todo eso... Las meloneras, Raúl González, El Viejo, Los Jenkins, los otros y así... Taboga... solo gente así... (Gregorio, comunicación personal, julio del 2017).

Los famosos Arias. (Victoria, comunicación personal, enero del 2018).

Las asociaciones de desarrollo son el nexo entre la comunidad, la empresa y el Estado. Existen como parte de un esfuerzo del Estado de la organización comunal, a través de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco). Como parte de esta institución, cada Asociación de Desarrollo Integral (ADI) tiene derecho a un fondo del gobierno central para sus proyectos comunales. Pero en la zona de estudio, las asociaciones complementan esos fondos con aquellos adquiridos de la azucarera El Viejo y sus programas de responsabilidad social. En un esfuerzo por organizar más estos proyectos, la compañía planteó una organización de asociaciones llamada Líderes de la Bajura, conformada por las ADI de Ortega, Bolsón, Corralillo y La Guinea.

Dentro de cada asociación, y dentro de esta organización más grande, se vive la conflictividad más aguda entre la comunidad, la empresa y el Estado, y entre paradigmas de desarrollo. Josué expresa esta conexión entre actores cuando

explica que los proyectos comunitarios dependen de la azucarera, y también del apoyo municipal y hasta nacional. En esta declaración, Josué expresa miedo de que un político local cause daño a la relación de la azucarera con la comunidad si este no apoya la azucarera:

Pero a mí el miedo que me da [con las elecciones] es que se me caiga todo el proyecto que tenemos en la azucarera El Viejo. Porque si vienen con la mentalidad creyendo que la azucarera hace daño, y no ven la herramienta que tiene, pueden caer todos los proyectos, todos los beneficios que otros tenemos. La azucarera El Viejo puede caer. Me da miedo porque si la persona que va, cae al gobierno local, es la que yo creo, puede ser muy peligroso para la comunidad. Esperemos que no. Vamos a ver. Así la gente toma la decisión, ¿verdad? Vamos a ver. (Josué, comunicación personal, julio del 2017).

Existe la percepción, por parte de todos los entrevistados, de que las asociaciones guardan un vínculo especial con la azucarera. Para algunos, esta relación es positiva e implica proyectos buenos para la comunidad.

Pero hay un sector, digamos, el sector organizativo. Para nosotros, como asociación, ha sido muy buena la relación. Siento que la Asociación de Desarrollo ha tenido una buena relación con el ingenio a través del programa de responsabilidad social, yo veo que eso es variable... (Josué, comunicación personal, julio del 2017).

Para otros esta relación es negativa por los resentimientos a la empresa:

Entonces ellos me critican, dicen que yo [como presidenta de la asociación] estoy a favor de la azucarera El Viejo y no de la comunidad. (Emilia, comunicación personal, julio del 2017).

Si las asociaciones de desarrollo son el nexo de la conflictividad, sus líderes son quienes expresan experimentar la conflictividad en carne propia. En Corralillo, la presidenta se ha enfermado de tanto estrés y, de hecho, no ha podido vivir en su casa por temor a la gente.

Negociación, equilibrio y resistencia

Las personas en la zona de estudio reconocen la necesidad de la negociación con el modelo en general, y con la azucarera y el Estado, para lograr la reproducción. Josué capta este pensamiento y cuenta que hay quejas, pero que el modelo imperante implica una hegemonía que en general “pone los términos” de la negociación: la fuente más grande de ingresos de la gente de la zona.

...por la contaminación de los ríos dicen que esto y que lo otro, que los salarios, pero si no fuera por estas industrias, en ¿dónde trabaja la gente? ¡Aquí no hay nada que hacer! (Josué, comunicación personal, julio del 2017).

Santos rescata la pertinencia de negociar con la azucarera debido a que es la fuente de crédito y de ayuda más inmediata para el cultivo de los pequeños productores (de caña). También reconoce que la compañía debe auxiliar a los pequeños productores (hasta la fecha) para llegar a las cuotas asignadas por Laica. Así se manifiesta la mutua necesidad, parecida a la mencionada en Román (1999) en el pacto cafetalero.

Ellos [de la azucarera] les dan prioridad [a los pequeños productores], les ayudan bastante a estos, diay, tienen que ayudarles, ahí está la torta. (Santos, comunicación personal, enero del 2018).

José admite que él ha logrado mantener su tierra y practicar la agricultura porque ha sabido llevar esas negociaciones. Contó que nunca ha tomado un crédito de un banco, y evita tomar muchos créditos de la misma azucarera. Dice que con la agricultura ha podido sobrevivir:

Ahora pues, más o menos, para pasarla para vivir, sí, hay que saberla llevar. (José, comunicación personal, julio del 2017).

Otra participante reconoce el beneficio de negociar con la azucarera, como cualquier actor entra en cualquier negociación:

Antes, le puedo decir que yo estaba totalmente en contra de las relaciones de la comunidad con el ingenio. Actualmente, siento que

se puede convertir en una oportunidad, si la supiéramos aprovechar... (Victoria, comunicación personal, enero del 2018).

Se destacaron varios ejemplos de resistencia de la gente al modelo imperante, de acuerdo con la definición de resistencia individual de Scott. Se incluyen las quejas en contra de la azucarera, el Estado y las asociaciones de desarrollo descritas anteriormente. Aunado a lo anterior, incluye la práctica de bloquear los proyectos de las asociaciones de desarrollo. Existen también acciones organizadas, como bloqueos en las carreteras para protestar por el impacto de los camiones de la empresa en el deterioro de las calles.

Una realidad interesante y que merece más estudio es la de las quemas de los campos de caña. Este fenómeno no ha sido examinado en Costa Rica desde una perspectiva de conflictividad de clase, pero las personas entrevistadas para este estudio hablaban de quemas de los cañales por “venganza” a la empresa por no dar trabajo, o por no permitir acceso al río Tempisque, o por cualquier otra razón que podría molestar a la gente campesina.

Esta práctica se corroboró con casi todos los entrevistados. Sin embargo, fuera de la zona y en los medios, quemar los cañales se atribuye a “los maleantes” o los “drogadictos” que “prenden fuego con sus cigarrillos tirados sin cuidado”. Por eso, se insta a analizar las quemas como una práctica de resistencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La realidad de la agricultura en esta zona es que funciona por temporadas, con épocas de zafra (de diciembre a abril para la caña y el melón), y que cada persona entrevistada vive de muchas actividades económicas diferentes, y con actitudes muy diferentes en cuanto al ser campesino. Se nota la presencia de sentimientos complejos sobre el concepto del campesinado. Cuando la gente no sabe si es o si quiere ser campesina, es por la relación con el acceso a ciertos recursos, como la tierra, los servicios públicos y hasta los bienes de consumo, como la ropa.

Hoy en día ya uno no ve ese tipo de personas, ya no los ve, o sea, y no hay una parte a la que usted vaya que no haya fluido eléctrico, agua

potable. O sea, ya hoy en día, podríamos decir que ya no tenemos [sic] campesinos. (Emilia, comunicación personal, julio del 2017).

El comentario de “ya no tenemos [sic] campesinos” es interesante, porque Emilia, al mismo tiempo, se identifica como campesina, pero profesa que el campesinado se ha dejado en el pasado.

Después de las entrevistas, se percibe que las personas participantes en el estudio sienten de cierta manera esa tensión. Algunos quieren ser campesinos, pero no lo pueden ser por falta de acceso a la tierra. Otros no quieren ser campesinos porque significa ser pobres, pero reconocen que siempre son pobres y, por ende, campesinos. Algunos declaran que el campesinado goza de una autonomía del sistema, y la quieren rescatar, pero no lo han logrado y no saben si lo van a poder lograr. Otros manifiestan un punto de vista crítico y argumentan que su acceso a la tierra y su capacidad de producir han sido tomados por fuerzas hegemónicas.

En este sentido, se observan percepciones diferenciadas del ser campesino, y no una conciencia de clase unida en todos los participantes. Se advierte que en las definiciones de las personas se reflejan los dos paradigmas expuestos por Mançano: la cuestión agraria, que rescata un conflicto de clases, y el capitalismo agrario, que quiere ver al campesinado ajustándose al modelo económico capitalista.

Sin embargo, parece que hay pistas en los comentarios campesinos sobre un posible tercer paradigma. No hay seguridad sobre cómo se llamará, pero, siguiendo el cuadro elaborado con base en las ideas de Mançano, las características de este tercer paradigma, según las entrevistas, serían las siguientes:

TABLA 4. Un posible tercer paradigma

| | |
|--|--|
| Relación con el capital | Dependencia no deseada |
| Problema principal del desarrollo | Falta de enfoque en el campesinado. |
| Conflictividad | Un espacio para la negociación del equilibrio. |
| Transformación | A sujetos rurales no entendidos por los sujetos urbanos. |
| Campesinado | Es vulnerable. Tiene una conexión especial con la tierra y la naturaleza. |

Fuente: elaboración propia.

Como se puede notar en la tabla 4, se plantea que posiblemente los campesinos están trabajando con otro paradigma que se corresponde con los descritos por Mançano. En este, el campesinado constituye un conjunto heterogéneo de habitantes rurales que no reciben el apoyo del Estado ni de la sociedad en general. La colectividad campesina entiende que el capital es la fuerza principal que dirige la sociedad actual, pero siente una ambivalencia hacia este: no tiene mucho capital, pero no está necesariamente convencida de que quiere depender de él.

El campesinado busca negociar su existencia y sobrevivencia con un equilibrio entre ajustes y resistencias, manteniendo un nivel de autonomía sin destruir los vínculos con la azucarera, el Estado o sus propios vecinos, quienes podrían pensar diferente sobre diversos temas. Aunque se registran en las entrevistas varias perspectivas sobre el desarrollo, la azucarera y el Estado, se escucha en casi todas un aislamiento y marginación por ser habitantes rurales.

Recomendaciones

Todas las personas entrevistadas tenían 40 años o más, y contaban con vidas laborales ya definidas. Hay una presencia grande, según las entrevistas y las observaciones, de personas jóvenes que trabajan en el turismo de playa o que no tienen trabajo. Como el estudio tiene enfoque agrícola, no se incorporó a esta agrupación. No obstante, valdría la pena en el futuro entrevistar a esas personas para entender mejor las clases sociales en el ámbito rural.

Hace falta estudiar más el fenómeno de la quema de los cañales en Guanacaste y en otras partes del país. Se aprendió que existen prácticas de quemas de cañales por parte de personas empleadas y no empleadas por cañeros, y que tales sucesos a veces ocurren en momentos no sancionados por los dueños de estos cañales. En Costa Rica, no existe literatura sobre estas prácticas: en los periódicos, entrevistas y presentaciones de expertos en el tema la caña, se caracterizan como actos de “delincuencia”, ocasionados mayoritariamente por inmigrantes nicaragüenses y, por lo tanto, no se ha hecho un análisis sistemático del fenómeno.

Si se toma en cuenta la huelga de trabajadores nicaragüenses subcontratados por la empresa azucarera Taboga en febrero del 2018, parece que valdría la pena entender estas quemas y analizar la posibilidad de que sean expresiones de resistencia desde una clase social desarticulada (de inmigrantes) dentro de una clase marginada (campesinado-proletariado). De igual manera, valdría la pena estudiar más la presencia de personas trabajadoras agrícolas y campesinas inmigrantes como parte fundamental del debate paradigmático y teórico sobre el campesinado. La teoría muchas veces descarta a las personas que emigran de su zona rural como quienes se han autoexcluido del debate. No obstante, como vemos en este caso, los inmigrantes nicaragüenses, incluso si se han autoexcluido del análisis del campesinado en su propio país, se han insertado en el entorno rural costarricense (como han hecho otros migrantes rurales a Costa Rica, como quienes provienen de la comarca Ngäbe-Buglé de Panamá), y participan en los procesos de negociación social en estos contextos.

Como recomendación para el desarrollo rural territorial, este estudio trae a la luz la existencia de conflictividades relevantes, las cuales complican los

procesos de desarrollo que podría brindar una institución como el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Precisa que la institución defina bajo cuál paradigma está trabajando (el capitalismo agrario, en el cual el desarrollo ha excluido al campesinado, o la cuestión agraria, en el que el desarrollo ha explotado al campesinado, u otro paradigma) para decidir si va a enfrentar estas conflictividades, y cómo va a hacerlo. Mientras no se reconozcan, y no se dé una prioridad a las perspectivas campesinas, el desarrollo rural seguirá siendo difícil o imposible de fortalecer.

BIBLIOGRAFÍA

- Abarca, C. 1997. *Los movimientos sociales en el desarrollo reciente de Costa Rica*. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Arauz, L. 2015. “Políticas para el sector agropecuario y el desarrollo de los territorios rurales 2015-2018.” En *Teleconferencia Escuela de Ciencias Exactas y Naturales* 26 febrero, 2015. San Jose: Universidad Estatal a Distancia. Encontrado en: http://videoteca_vau.uned.ac.cr/videos/video/755/in/channel/12/
- Cabrera, R. 2007. *Tierra y ganadería en Guanacaste*. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- Castillo, E. 2000. “La fenomenología interpretativa como alternativa apropiada para estudiar los fenómenos humanos.” *Investigación y Educación en Enfermería*. XVIII:27-35.
- Edelman, M. 1992. *The logic of the latifundio: The large estates of Northwestern Costa Rica since the late nineteenth century*. Stanford: Stanford University Press.
- Edelman, M. 1999. *Peasants against globalization: Rural social movements in Costa Rica*. Stanford: Stanford University Press.
- Edelman, M. 2016. *Estudios agrario críticos: tierras, semillas, soberanía alimentaria y derechos de las y los campesinos*. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales.

- Fermoso, P. 1988. “El modelo fenomenológico de investigación en pedagogía social.” *Educar* 14-15: 121-136.
- Fernández, M. 2003. *La agricultura costarricense ante la globalización: las nuevas reglas del comercio internacional y su impacto en el agro*. Serie Instituto de Investigaciones Sociales, San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Gramsci, A. 1973. *Maquiavelo y Lenin*. (selección Osvaldo Fernández). México: Editorial Orígenes.
- Hernández-Sampieri, R. 2014. *Metodología de la investigación*. 6ª ed. México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A.
- Instituto Nacional de Estadística y Censo. 2015. *VI Censo Nacional Agropecuario, 2014: Resultados Generales*. San José: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Long, N., y Roberts, B. 1997. “Las estructuras agrarias en América Latina 1930-1990.” En *Historia de América Latina, Volumen II, Economía y sociedad desde 1930*, ed. L. Bethell. Barcelona: Crítica, 278-334.
- Mançano, B. 2004. “Cuestión agraria: conflictualidad y desarrollo territorial.” Documento para presentación en el Lincoln Center Institute of Land Policy. Encontrado el 12 de octubre, 2015 en: <http://web.ua.es/en/giecryal/documentos/documentos839/docs/bmfunesp-2.pdf>
- Mançano, B. 2012. “Disputas territoriales entre el campesinado y la agroindustria en Brasil.” *Cuadernos del CENDES*. 81:1-122.
- Mançano, B. 2014. “Cuando la agricultura familiar es campesina.” en *Agriculturas campesinas en Latinoamérica: propuestas y desafíos*. Ed. Francisco Hidalgo, Francois Houtart y Pilar Lizárraga. Quito: Editorial IAEN.
- Mançano, B. 2015. Ponencia: “Debates paradigmáticas en el desarrollo rural territorial.” San José: Universidad de Costa Rica.
- Monzón, I. 2015. *Conflictividad y conflictos en el marco de la descentralización*. Recuperado el 25 de setiembre, 2015: http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-934_es.html

- Patnaik, B., y Wise, T. 2015. "Destruction of US credibility at WTO." Live Mint. Encontrado en la web el 8 de setiembre, 2015 en: <http://www.livemint.com/Opinion/JPi4o78XnwziAnsbzTHgrJ/Destruction-of-US-credibility-at-WTO.html>
- Peters, G. 2001. "La cuenca del Tempisque: Una perspectiva histórica." Recuperado el 3 de octubre, 2017 de: <https://docplayer.es/92196556-La-cuenca-del-tempisque-una-perspectiva-historica-gerthrud-peters.html>
- Rodríguez, C. 1992. "Las grandes transformaciones del agro y su impacto sobre la reproducción de los campesinos en el periodo 1950-1984." Tesis de maestría. San José: Universidad de Costa Rica.
- Román, I. 1994. *¿Conciliación o Conflicto? Luchas campesinas y democracia en Costa Rica*. San José: Editorial Porvenir.
- Scott, J. 1985. *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Sequeira, W. 1985. *La Hacienda Ganadera en Guanacaste*. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia. Ebook encontrado en la web el 3 de octubre, 2017 en <http://www.worldcat.org/title/hacienda-ganadera-en-guanacaste-aspectos-economicos-y-sociales-1850-1900/oclc/654619135/viewport>
- Thompson, E. 1978. "Eighteenth-century English society: Class struggle without class?" *Social History*. Vol. 3 No. 2: 133-165. Encontrado en la web el 23 de mayo, 2015 en <http://www.jstor.org/stable/4284798>.
- Universidad Rafael Landívar, Instituto de Transformación de Conflictos para la Paz en Guatemala. 2009. *Conflicto por el uso de la tierra: nuevas expresiones de la conflictividad agraria en Guatemala*. Recuperado el 10 de octubre, 2015 de: <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/confli-UsoTierra1.pdf>

LA PRODUCCIÓN DE GUAYABA EN LA COMUNIDAD DE RÍO GRANDE DE PAQUERA: PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

Marcela González

INTRODUCCIÓN

Las zonas rurales del país poseen un gran potencial. Sin embargo, en la mayoría de ellas, la inversión pública no es constante ni suficiente, lo cual repercute en la calidad de vida de la población. En Costa Rica, se han logrado grandes avances para apoyar las comunidades de los territorios rurales. Se insta a trabajar de cerca con los actores sociales que conforman los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR) creados por la Ley 9036, los cuales tienen representantes de las diferentes instituciones, incluidos los gobiernos locales, y una mayor cantidad de líderes comunales, representantes de organizaciones o cualquier interesado con incidencia y arraigo al territorio.

El distrito de Paquera forma parte de un territorio inmerso en esa iniciativa impulsada a través Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Este trabajo representa una oportunidad para aportar análisis útiles, generados a partir de la participación de la población meta, la cual incidiría en la toma de decisiones. La investigación se enfoca en una de las principales actividades económicas desarrolladas en la zona: la producción de guayaba, establecida hace más de 20 años. Su introducción fue posible gracias a una alianza entre el Estado —a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy Inder— y la Misión Técnica de la República de Taiwán, para establecer un proyecto con el fin de evaluar diferentes variedades de guayaba (*Psidium guajava L.*) (Zeledón y Wan,

1994). La iniciativa se desarrolló en la zona de Paquera y otras regiones en el centro y el norte del Pacífico, y se consolidó como una de las principales actividades económicas en Río Grande.

A pesar de su importancia económica, social y cultural, se observa un comportamiento estático e incluso con tendencias al deterioro. Por tanto, se busca analizar el fenómeno partiendo de la hipótesis de que el territorio tiene potencial para mejorar. Se tratará de responder a las debilidades que fomentarían este estancamiento y se proporcionarán posibles opciones para superarlo. Aun bajo esa condición, se generan ingresos significativos, de los cuales la mayor parte de sus habitantes se beneficia directa o indirectamente con la producción de guayaba. Los recursos producidos por la actividad otorgan solvencia a la población para invertir en otros productos y servicios. Es decir, adquiere un efecto multiplicador en la economía, pues a otros sectores locales les favorece el consumo interno.

El impacto económico también ha propiciado un desarrollo social y ha involucrado al núcleo familiar en las diferentes labores de campo. Se han originado empleos directos e indirectos. Sin esta alternativa productiva es posible que muchos de los productores ya hubieran vendido los terrenos y buscaran opciones de mejora en otros lugares. El cultivo promovió el arraigo de los productores a la tierra y, por ende, al territorio. A pesar de no ser un cultivo autóctono, la guayaba se entrelazó a su tejido social, se adaptó a la zona y se convirtió en parte de su cultura al generar conocimientos, prácticas y habilidades.

Para profundizar sobre el comportamiento estático o deteriorado de la producción, se busca un acercamiento con los productores, grupos organizados e instituciones presentes en el territorio, debido a su conocimiento real de las limitantes o conflictividades alrededor de esta actividad económica.

Problema de investigación

Las principales fuentes de ingresos en el distrito de Paquera son la producción agrícola y pecuaria, la pesca, el turismo y el comercio. Hay especial interés por el sector agrícola, específicamente en la actividad de cultivo de guayaba. Según los pobladores de la zona, la fruta se introdujo aproximadamente en el

año 1994 junto con otras variedades, de las cuales latai-ku-bar es la que más se produce y comercializa. Este cultivo generó una significativa dinámica en la comunidad. Sin embargo, perdió su fuerza e, incluso, decreció ante la carencia de innovación tanto en las labores productivas como en las de comercialización.

La falta de un cambio ha limitado las posibilidades de un mayor desarrollo. Se ha mantenido la actividad con un balance continuo, pero pasivo. Resulta evidente una actitud de confort de parte de las autoridades locales, sin visualizar las consecuencias de no tomar decisiones y medidas para mejorar. Por ese motivo, se dice que la actividad está en estancamiento. Ese es el problema a enmarcar. Se busca aportar posibles vías de acción para revitalizar la actividad y reformar la capacidad para garantizar condiciones de mejoramiento.

Pese a la importancia de la producción de guayaba en la dinámica económica del territorio, se deben generar cambios estratégicos, con el fin de dar paso a un modelo de desarrollo exitoso y sostenible. Para alcanzarlo, es indispensable contar con actores sociales fortalecidos que acompañen, gestionen procesos y ejecuten proyectos.

El objetivo general de la investigación es determinar qué elementos endógenos pueden ser promovidos para mejorar la competitividad en torno al cultivo de guayaba, y con ello impulsar la actividad como parte integral de un modelo de desarrollo rural territorial en la comunidad de Río Grande de Paquera.

Los objetivos específicos del proyecto son:

1. Conocer el contexto social y productivo que influye en la dinámica del cultivo de guayaba en el distrito de Paquera, concretamente en la comunidad de Río Grande.
2. Identificar las limitantes y conflictividades presentes en la cadena productiva de la guayaba.
3. Formular alternativas para el establecimiento de una propuesta territorial que impulse el progreso de la producción de guayaba.

Para el desarrollo de este trabajo se plantean dos hipótesis. Primero, la capacidad endógena del sector agrícola en la comunidad de Río Grande es

lo suficientemente fuerte como para generar procesos de desarrollo rural, pero se debe trabajar en eliminar las constricciones que limitan el proceso, como la poca organización y falta de agentes sociales que lideren iniciativas innovadoras y dinamizadoras para el territorio.

En el Plan de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Peninsular, impulsado por el proyecto de DRIP y elaborado en 1993, se encuentra una conclusión que no ha cambiado a lo largo de los años y que sustenta la primera hipótesis: existe una baja capacidad organizativa en la población peninsular, la cual se debe a la dispersión, duplicidad de funciones y rivalidad entre las organizaciones y líderes y, a la vez, a la poca participación de los miembros de los grupos en la toma de decisiones. Otro elemento importante es que los objetivos son muy específicos y cortoplacistas (DRIP, 1993).

En línea con lo anterior, la segunda hipótesis se basa en que los proyectos previos fallidos en la zona, vinculados al sector agrícola, se explican por la influencia de factores exógenos en su definición, planificación y ejecución. El planteamiento de estas dos hipótesis se establece como producto de la percepción, tras observar la dinámica de la actividad de la guayaba propuesta para estudio.

MARCO TEÓRICO

El análisis detallado del territorio donde se desea promover un cambio constituye un elemento esencial en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo rural. Previo a dicho análisis, precisa repasar algunos conceptos básicos para el entendimiento del lector.

Territorio

Respecto a la noción de territorio, se encuentran múltiples definiciones, incluso de conceptos relacionados, como espacio, medio, ambiente, región, país y otros. Cada palabra abarca realidades complejas, por lo cual es difícil elegir una única definición que sea precisa (Polèse, 1998). Ratzel (s. f.), citado por Schneider y Peyré (2006), define el término de esta manera: “Una parcela de la superficie terrestre apropiada por un grupo humano, que tendría una

necesidad imperativa de un territorio con recursos naturales suficientes para su población, los cuales serían utilizados a partir de las capacidades tecnológicas existentes” (Schneider y Peyré, 2006: 73).

Otros autores, como Montañez y Delgado (2012), citados por Jolly (2012), lo describen como un “espacio de poder y dominio de distintos sectores, que incluyen al Estado, a los individuos, a distintos grupos y organizaciones, e incluso empresas multinacionales” (Montañez y Delgado, 2012: 3). Por su parte, Monnet (2010) citado por Jolly (2012) lo interpreta como “el espacio material, área o red realizado por el ejercicio de una acción humana repetitiva” (Jolly, 2012: 3).

Al analizar los diferentes conceptos de territorio, resaltan algunos elementos clave, como, por ejemplo, **sociedad**, que se vincula a la acción humana, los individuos, los grupos o sectores; o el **entorno físico**, relacionado al espacio, los recursos naturales o el área. Para efectos de esta investigación, se plantea que un territorio **es una construcción social generada por las relaciones de los actores sociales presentes en un medio**. Además, una cantidad de actores con intereses muy distintos ocasiona que el territorio sea heterogéneo. La manera de equilibrar o complementar sus diferencias incide en que una región se desarrolle mejor que otra.

El enfoque territorial de desarrollo rural busca que el territorio sea más competitivo y genere recursos de forma sostenible a través del tiempo. Para lograr tal idea de competitividad, urge mejorar la gestión, innovar en la actividad de interés y entender que el territorio determina y es determinado por la identidad cultural, el tejido social, el potencial productivo, los productos con identidad de origen, los servicios ambientales, entre otros.

La suma de elementos le provee de características que facilitan su aproximación a las exigencias de consumidores en nichos dinámicos del mercado (Sepúlveda, 2008). Un territorio, además, se alimenta de factores internos (endógenos) y externos (exógenos), y estos se enlazan con el entorno físico. Los actores interactúan en ese entorno físico, del cual se abastecen; y, en ese proceso, los recursos existentes son mejorados o dañados. Además, forman organizaciones para facilitar su desarrollo, tomando en cuenta que la colaboración produce mejores resultados y fortalece el crecimiento de capital social.

El éxito o fracaso de las acciones impulsadas por los actores trazan el mañana de sus habitantes. Un territorio puede tener limitantes, lo cual ocasionaría que los actores permanezcan ajenos, esperando que el Estado proponga soluciones a la problemática existente, o bien que desarrollen nuevas propuestas e intentar suscitar un cambio. Si se opta por lo segundo, la participación, el diálogo y la articulación de los actores sociales deben impulsar iniciativas de bien común e incidir en los proyectos estratégicos para la zona.

Los indicadores de calidad de vida son unos de los que deben mejorar a la hora de poner en funcionamiento una estrategia de desarrollo que aproveche el potencial endógeno del territorio. Los indicadores de pobreza y pobreza extrema son muy poco alentadores en las zonas rurales del país. Una estrategia que contemple productividad y calidad de vida en una región, y las logre, es aquella que la convierte en una zona competitiva.

Análisis sistémico del territorio

Como parte de una propuesta de desarrollo rural con enfoque territorial, un buen análisis sistémico es el punto de partida para ayudar a los actores a proyectar su visión prospectiva del territorio. En palabras de Sosa (2012), “el territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es, sobre todo, un espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente” (Sosa, 2012: 7).

A pesar de hacer un análisis de factores por dimensiones del desarrollo, se debe tener claridad en que la intención no es visualizarlas de forma independiente. Cada una de las dimensiones se asocian entre sí y funcionan como un sistema que requiere ser entendido. Por tanto, el objetivo de este análisis es ayudar a comprender con mayor detalle el territorio. En este caso, se enfocan las variables en mayor conexión con la actividad de la guayaba. Estas serán pensadas en su carácter multidimensional, en tanto exista una relación simbiótica entre todas las dimensiones y en las posibilidades que esta simbiosis compleja ofrece. Dicho de otro modo, la multidimensionalidad será un recurso analítico que permitirá establecer, por ejemplo, cómo lo económico no puede ser explicado sin referencia también de lo social, lo

político y lo cultural (Sosa, 2012: 3). Además de lo contemplado por Sosa, no se deja de lado lo ambiental, máxime en territorios rurales, donde las riquezas naturales son vastas.

Actores sociales

Según Debuyst (s. f.), “los actores están movidos por motivaciones propias (individuales o de grupo), ligadas a una trayectoria personal o común, tienen intereses según su posición social, su inserción en una institución u organización social, etc.” (Debuyst, s. f.: 225). Aunado a lo anterior, se definen también por “su función y posición dentro de una institución u organización (institución pública, administración, justicia, iglesia, organizaciones económicas). Esas funciones confieren saberes y poderes” (Debuyst, s. f.: 215).

Involucrar a los actores en proceso de desarrollo territorial no solo requiere identificar la cantidad, ubicación, tipo u origen, sino también conocer su trayectoria, intereses, motivaciones y relaciones. Esa información es una herramienta para crear espacios de participación donde los actores realicen análisis, tomen decisiones y articulen gestiones para propiciar las reformas pertinentes. Un actor es débil si se mantiene aislado. Por el contrario, al generar vínculos y sumar a un proceso con otros agentes con intereses comunes o consensuados podrá hacer reales las transformaciones que faciliten el desarrollo. El resultado de este tipo de relaciones se profundiza en el concepto de capital social pronto a describir.

Dentro de un proceso de desarrollo rural, se busca la participación de diversos actores que trabajen de forma conjunta; es decir, sin que el actuar de uno sea más importante que otro. Es la suma de conocimientos y recursos lo que hace interesante la dinámica. Sin embargo, en un territorio, se manifiestan relaciones de poder, en las cuales un actor influye más que otros en la toma de decisiones, lo cual responde a intereses específicos y no al bienestar colectivo. Resulta crucial que los actores tengan arraigo con el territorio en el que van a trabajar en pos de un mayor involucramiento y continuidad en todo proceso de desarrollo rural con enfoque territorial. Precisa crear vínculos y espacios para formar o ser parte de agrupaciones con capacidad de influir y tomar decisiones que impacten según las prioridades. Por lo anterior, es fundamental conocer

las organizaciones desde el punto de vista de su poder y liderazgo, saber cuáles intereses defienden y cómo se constituyen en estructuras de poder. Entenderlas es vital para deducir las dinámicas territoriales.

Las estructuras territoriales se fortalecen cuando los distintos actores trabajan por objetivos comunes. Esto no solo genera mejores resultados en los procesos de desarrollo y ejecución de proyectos, es también la base de una estrategia para promover la gobernanza. Un trabajo más articulado que incida en la toma de decisiones desde el ámbito territorial, que pase del discurso a la gestión, incentiva la presentación de ideas y proyectos provenientes de los territorios, para que sean cada vez más comunes y sostenibles.

No existe necesariamente un nexo entre descentralización política y participación ciudadana de los actores. El Estado, como actor, debe facilitar y promover este trabajo conjunto manejando un papel de socio o aliado en los procesos, y no de manera impositiva, lo que ocasiona la exclusión de cierta población. Se debe trabajar para impulsar ese cambio de paradigma. No hay mejor gestor del desarrollo de un territorio que sus propios habitantes, quienes conocen la realidad y las dinámicas, y son los mayores beneficiarios de los logros y avances.

Capital social

En palabras del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) (2018), “el concepto de capital social, es un elemento más de la riqueza de una sociedad: cuanto más alto sean dichos niveles, mayor nivel de desarrollo habrá” (Mideplan, 2018: 10). En el marco de un territorio u organización, tener conocimiento del capital social es estratégico. Se trata de una herramienta valiosa para la toma de decisiones en la planificación y ejecución de una propuesta de desarrollo rural con enfoque territorial.

De la magnitud del capital social dependerán las formas de su utilización. Si la magnitud del capital social es elevada y se sostiene en redes y organizaciones fuertes, podrá acometer empresas sociales complejas, y su radio de acción será mayor y viceversa (Flores y Rello, 2003: 214). Según Putnam (1993), citado por Saiz (2013), los componentes que más contribuyen a la generación

de capital social son: “confianza, reciprocidad generalizada, participación política, participación cívica e interés por la información” (Saiz, 2013: 148).

Esas variables son un punto de partida, aunque se podrían sumar otros factores considerados indispensables. La riqueza de una nación, además del crecimiento económico, depende del desarrollo del capital humano; en otras palabras, de la salud, la nutrición y la educación de su población; del capital físico, que constituye infraestructura; del capital natural, el cual corresponde a los recursos naturales; y del capital social, referente a las interacciones sociales, incluidas las familiares y las comunales, donde se fortalece la confianza, la asociatividad y los valores cívicos para trabajar por objetivos comunes (Mideplan, 2018).

Como sostienen Flores y Rello (2003), “lo esencial de este tipo de capital social es la capacidad colectiva de tomar decisiones y actuar conjuntamente para perseguir objetivos de beneficio común” (Flores y Rello, 2003: 207). En adición a lo anterior, prosiguen:

El capital social es más complejo que otras formas de capital porque también influyen en él sus propias condiciones internas, es decir, componentes que forman parte de él, como la confianza, la solidaridad y la cohesión sociales. Si estos merman, el capital social se reduce y la capacidad que implica disminuye o no puede materializarse con la misma fuerza, o eficacia (Flores y Rello, 2003: 208).

A la inversa de lo que se desea promover, los resultados de la desconfianza, la indiferencia y la división dentro de una organización o un territorio son la carencia en la capacidad de cambio, la pobreza, el aumento de la brecha social y desigualdad. Así pues, incentivar un adecuado capital social es estratégico para iniciar un proceso de desarrollo rural con enfoque territorial con rendimientos socialmente positivos.

Base económica

Para entender el grado de actividad económica del territorio en estudio, es preciso conocer su base económica; es decir, aquella que estimula la

generación de riqueza dentro de la comunidad. En este caso, la guayaba es la actividad básica que funciona como motor de desarrollo en Río Grande. Según la teoría, el crecimiento regional responde a las interacciones de la región con el exterior, más precisamente a su capacidad de exportar. Son las actividades de exportación las que, en un contexto de apertura interregional, otorgan la prosperidad regional (Polèse, 1998).

Si lo anterior se toma como referencia, es posible indicar que la actividad de producción de guayaba, que se comercializa fuera de la comunidad de Río Grande, es la base económica que da sustento a la población y a otros comercios y servicios surgidos como complemento a la dinámica económica y social. Al ser esta la realidad de la comunidad de Río Grande, resulta lógico buscar el fortalecimiento de su base económica, a través de una estructura adecuada que vele por ampliar el efecto multiplicador. Por el contrario, si se descuida, podría haber crisis, pobreza y pérdida de alternativas para los productores.

La capacidad de manejar de forma eficiente y competitiva las unidades productivas, en un contexto de cambios drásticos, tanto desde la oferta (producción) como desde la demanda (mercados), es un factor decisivo para garantizar el éxito de la transformación productiva. (Sepúlveda, 2008: 15)

La base económica crea condiciones para el desarrollo. De acuerdo con el enfoque de la investigación, se considera indispensable la participación de actores, productores y organizaciones que, con apoyo institucional bien dirigido, estén dispuestos a tomar decisiones estratégicas en pos de progresar.

Enfoque territorial de desarrollo rural

El enfoque territorial de desarrollo rural supone un cambio de paradigma y métodos, simultáneo con un cambio institucional y productivo llevado a cabo en determinadas localidades y que promueve la superación de la pobreza (Schejtman y Berdegué, 2004). Lo anterior es posible a través de las interacciones “que se materializan en proyectos territoriales que luego moldean las regionales” (Soto, Beduschi y Falconi, 2007: 22).

Según Schneider y Peyré (2006), una de las razones por las cuales se aborda el enfoque territorial, es por “los aspectos políticos e institucionales que derivan, básicamente de la crisis del Estado y de la pérdida creciente de su poder de regulación” (Schneider y Peyré, 2006: 85). Los autores apuntan a la existencia de un cambio social, el cual pudo ser provocado por una crisis, por la desatención y aumento de la pobreza en las zonas rurales. Con el enfoque territorial de desarrollo rural, se abre una alternativa para trabajar en la búsqueda de soluciones a los problemas de estas comunidades, involucrando a los actores sociales del territorio a intervenir.

Es una de las más significativas orientaciones políticas y programas para las áreas rurales en América Latina. Aunque ya existen experiencias, el proceso aún tiene muchas páginas por escribir sobre la teoría y su implementación. Además, cada territorio tiene su propia identidad y particularidades, factores que suman al momento de aplicar el enfoque, pues no hay recetas.

Se debe procurar que, al optar por esta óptica, no se les dé mayor peso a los intereses institucionales. La plataforma institucional debe funcionar solo como un respaldo para que los actores territoriales moldeen una estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial de acuerdo con sus menesteres, procurando de forma transparente priorizar proyectos o acciones que generen un impacto más positivo.

El Estado ha avanzado o se ha visto forzado a impulsar la descentralización de sus unidades técnicas y a habilitar espacios para la asistencia de nuevos protagonistas a escala local en la toma de decisiones. En esta misma línea de abordaje, resulta interesante considerar la perspectiva expuesta por Berdegué *et al.* (2012), quienes sostienen que las propuestas de desarrollo pueden “enfaticar combinaciones diversas de políticas e instrumentos de dos tipos: aquellos orientados a movilizar las capacidades endógenas de los territorios, y otros que transfieren recursos y hacen inversión pública en favor de los territorios rezagados” (Berdegué *et al.*, 2012: 8).

En esta investigación, se tiene especial interés en promover el incremento de las capacidades endógenas como la principal herramienta para una propuesta de desarrollo rural, con la finalidad de orientar, eventualmente, la inversión

pública y privada hacia el territorio. El desarrollo endógeno supone capacidad de gestión de los propios recursos, estrategias e iniciativas propias, así como en la aplicación de conocimientos y sabidurías campesinas en el proceso de desarrollo. Según Tapia (2008), “las acciones para el desarrollo endógeno pueden plantearse desde las bases sociales para apoyar tal proceso de desarrollo reforzando con las habilidades locales e integrar con los elementos externos seleccionados para este propósito” (Tapia, 2008: 19).

Si se analiza el concepto de desarrollo endógeno propuesto por Tapia (2008), se concluye que alcanzar el desarrollo endógeno de un territorio va de la mano con la capacidad de organización de los actores con el suficiente capital social para sacar provecho a los recursos del territorio: económicos, humanos, culturales o naturales. De esa forma, se crearán proyectos locales generadores de valor agregado, con empleo de calidad, desarrollo de capacidades y que promuevan el arraigo de la población.

Justamente, la Ley 9036 facilita la creación de los CTDR, que organiza diversidad de actores sociales, interesados en trabajar bajo el enfoque territorial de desarrollo rural. Su función consiste en ser una plataforma de planificación que les brinda la oportunidad de ser parte de los procesos de toma de decisiones, marcando una ruta de desarrollo, proponiendo y priorizando desde las bases organizativas del territorio: programas de trabajo y proyectos, de acuerdo con sus necesidades y la realidad de su entorno, plasmados bajo un Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT).

De acuerdo con Solarte (2006),

La idea de una construcción colectiva desde abajo aparece como una opción vinculante y, por lo tanto, como un escenario para la ciudadanía activa, y mucho antes que un espacio de conflicto, debe verse como una oportunidad que se le abre a la institucionalidad estatal para buscar la coordinación que las políticas necesitan para su legitimidad (Solarte, 2006: 5).

El enfoque territorial de desarrollo rural busca que el propio medio inicie un proceso de desarrollo, el cual desemboque en una economía

regional próspera basada en las iniciativas y los conocimientos de los habitantes y de las empresas de la región. En palabras de Polèse (1998), “el reto consiste en encontrar los obstáculos que impiden que la región se desarrolle normalmente” (Polèse, 1998: 244).

Bienestar social

El bienestar se halla estrechamente relacionado con la calidad de vida; sin embargo, no son lo mismo: “Mientras que la calidad de vida se orienta hacia los denominados componentes psicosociales, el bienestar social se centró en aspectos materiales y no materiales de naturaleza económica y social de manera objetiva” (Actis Di Pasquale, 2008: 20). En una línea similar, Maguiña y Varas (1998) afirman que

El proceso de construcción de mejores condiciones de vida, tanto en lo material como en lo espiritual, impulsado por personas o colectivos que operan como sujetos de su propio bienestar, a partir de un determinado nivel de vida y de un particular nivel de aspiraciones, que son históricas y socialmente determinados. (Maguiña y Varas, 1998: 2)

Este concepto resume el objetivo indispensable en todo proceso que se promoció con el enfoque territorial de desarrollo rural, el cual debe apostar al crecimiento, la distribución y el mejoramiento del bienestar social de la población. El bienestar social es el fruto de una buena labor, en la cual los actores sociales deben ser partícipes. Consiste, por tanto, en alcanzar la satisfacción de necesidades tan básicas como la salud, la educación, la nutrición, la vivienda, entre otras.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

El método de estudio propuesto es cualitativo. En concordancia con autores como Punch, Lichtman, Morse, Encyclopedia of Educational Psychology, Lahman y Geist, Carey y DeLyser, citados por Hernández, Fernández y Baptista (2014), la escogencia de un enfoque cualitativo se busca “cuando el propósito es examinar la forma en que los habitantes perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos

de vista, interpretaciones y significados” (Hernández *et al.*, 2014: 358). Justamente son los actores sociales vinculados con la actividad quienes aportan la información más valiosa.

Marshall y Preissle, citados por Hernández *et al.* (2014), recomiendan seleccionar el enfoque “cuando el tema del estudio ha sido poco explotado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico” (Hernández *et al.*, 2014: 358). Pese al valor de la guayaba como base económica de la comunidad, en los documentos hallados se abordan prácticas y técnicas para mejorar la producción. No se conocen experiencias documentadas que busquen la perspectiva de los actores sociales, sus vivencias, beneficios, dificultades, y analicen conjuntamente el capital social moldeado a lo interno de la comunidad y sus organizaciones, y el contexto en que se ha desarrollado la actividad económica.

Área de estudio

En el distrito de Paquera, se producen frutas de calidad (mango, guayaba, papaya y melón), granos básicos mayoritariamente para autoconsumo, caña de azúcar para forraje de animales y plátano. Este estudio profundiza en el cultivo de guayaba. A diferencia de otros productos como el mango, esta se cultiva todo el año. Las plantaciones se manejan mejor, existe cierta organización y participan varios productores, en su mayoría propietarios, concentrados en la comunidad de Río Grande, donde la actividad constituye una base económica, motor de desarrollo y generadora de bienestar social.

La comunidad inicia como asentamiento en octubre de 1987, promovido en ese entonces por el IDA. Se entregaron parcelas a productores y se otorgó la oportunidad de contar con unidades productivas para su explotación agrícola. El recurso de la tierra fue un factor favorable que fomentó la actividad agrícola en manos de pequeños productores, más que en otras comunidades del distrito. Río Grande cuenta actualmente con una población de aproximadamente 1325 personas, según cifras del Área de Salud Peninsular (2018), población que depende mayoritariamente de la guayaba de forma directa o indirecta. Es posible ubicar a más de 100 productores en Río Grande. Coopeproguata R. L., organización que opera en labores de acopio y comercialización, alberga

74 asociados. Además, funcionan otros intermediarios que dan el servicio a productores no asociados a la cooperativa y productores independientes que comercializan por sus medios, normalmente en ferias del agricultor.

Metodología

La metodología implementada giró en torno a tres componentes: el primero fue conocer el contexto y las condiciones que influyen en la dinámica del cultivo estudiado, mediante un análisis sistémico, visualizando el territorio y las principales características de las dimensiones del desarrollo. En concordancia con Samper, Arze y Padilla (2016), se estimó que “las dinámicas territoriales no se limitan a una sola dimensión, sino que sus causas y efectos pueden implicar la interacción de dos o más dimensiones” (Samper *et al.*, 2016: 33).

Para desarrollar este **primer componente**, se llevaron a cabo los puntos a describir:

- a) Búsqueda de información: Obtenida de documentos publicados del cultivo y el territorio o datos aportados por instituciones y organizaciones ligadas a la actividad.
- b) Técnica de observación: Técnica pasiva o moderada. Es característica en una investigación cualitativa. Se hacen visitas de campo y se reconocen áreas de interés y los ambientes físico, social y humano. Ayuda a “comprender las prácticas territoriales de los sujetos sociales y a construir información y conocimientos sobre los territorios y el desempeño de los sistemas de producción” (Vitale *et al.*, 2016: 61).
- c) Mapeo de actores sociales: Fue necesario para aplicar las entrevistas semiestructuradas propuestas en el segundo componente.
- d) Participación en espacios informativos: El subsector agropecuario permite obtener contactos, conocer iniciativas y aportes institucionales en torno a la guayaba.

El **segundo componente** involucró la participación de los actores sociales. El instrumento utilizado fueron las entrevistas semiestructuradas dirigidas a tres

tipos de actores: productores, intermediarios y representantes de instituciones públicas o privadas en vínculo con la actividad.

Por último, en el **tercer componente**, se utilizaron los insumos de los primeros componentes para dar alternativas potencialmente asequibles como parte de una propuesta basada en el enfoque territorial de desarrollo rural. La idea es convertir la actividad de la guayaba más competitiva, a partir de las capacidades endógenas del territorio. El éxito de este componente es estratégico en el cumplimiento del objetivo general propuesto.

Población y muestra

En línea con la investigación cualitativa, se propuso utilizar un muestreo de caso tipo y muestra a expertos. El muestreo de **caso tipo** es utilizado cuando el objetivo del estudio es la riqueza, la profundidad y la calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. Se trata de estudios con perspectivas fenomenológicas, cuyo objetivo es analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social. Es frecuente el uso de muestras tanto de expertos como de casos tipo (Hernández *et al.*, 2014). Además, el caso tipo involucra la participación de dos tipos de actores: los productores y los intermediarios implicados en el proceso de comercialización.

La muestra **tipo experto** busca conocer la posición y punto de vista de especialistas en temas técnicos, apoyo en proyectos, visión a futuro, funcionamiento organizativo e importancia de la actividad como motor de desarrollo. De ahí, la diversidad de representantes llamados a participar, provenientes de entes públicos o privados como el Inder, el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), el MAG, el sector agrícola del Comité Directivo del CTDR, el subsector agropecuario que funciona en el territorio, la Fundación Ciudadanía Activa y la Universidad Nacional (UNA).

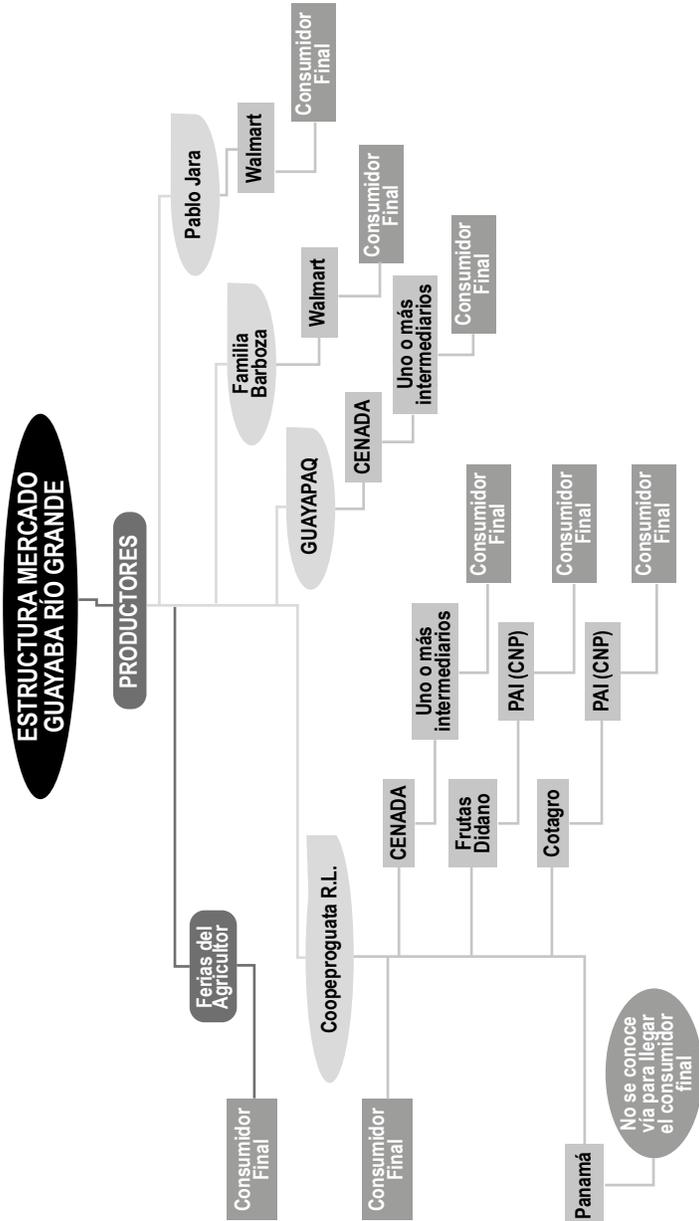
En relación con los datos obtenidos por los productores, la entrevista es similar. La identificación de intermediarios se logró en la etapa de observación y se confirmó mediante el diálogo con productores.

Para una mejor comprensión del papel que juegan los intermediarios, en especial en la comercialización, se plasma en el siguiente mapa conceptual la estructura actual de mercado que traza el camino que recorre la guayaba.

Recolección de datos

A la hora de recolectar los datos, se inició revisando documentos con información relevante, con el fin de conocer el territorio y el cultivo de la guayaba. Seguidamente, la etapa de observación consistió en algunas visitas informales, donde se prestó atención a productores y se conocieron las plantaciones, el entorno, el manejo del cultivo, la participación del núcleo familiar, entre otras percepciones consideradas para las herramientas a utilizar en este trabajo. La observación también sirvió para identificar productores que no estaban incluidos en la lista aportada por el MAG. Se actualizó y se incluyeron en la investigación. Finalmente, se recopiló datos utilizando las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los principales actores sociales identificados.

MAPA 1. Estructura del mercado de guayaba producida en Río Grande de Paquera



Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Elementos por dimensión del desarrollo y su interacción con la actividad de la guayaba

El grueso de los productores del distrito se ubica en la comunidad de Río Grande. La población está ligada a la actividad de forma directa o indirecta, pues constituye la base económica del lugar. De esta forma, representa una oportunidad económica y de arraigo de la población al territorio, el cual es “un elemento significativo a analizarse en cuanto al potencial y las limitaciones para llevar adelante el proceso de desarrollo sostenible de la Península” (DRIP, 1993: 59).

Cabe destacar que la mayor parte de los productores entrevistados nacieron en la misma comunidad de Río Grande, Paquera o en comunidades de la provincia de Puntarenas y Guanacaste. Muchos productores tienen toda la vida de vivir en Río Grande, lo cual evidencia la existencia de lazos con la comunidad y sus habitantes, producto de la convivencia diaria y la contribución en la construcción de la cultura del lugar, factor que ayuda a crear capital social.

Del total de entrevistados, sin contar la persona jurídica, 39 vivieron toda su vida en Río Grande; 8, más de la mitad de su vida; 9 tienen más de 10 años y 2 tienen, por lo menos, 5 años de habitar el poblado. Este dato refleja que el lugar tiene condiciones que lo hacen agradable para vivir. Los resultados de las entrevistas identifican dos elementos que dan sentido de apropiación y seguridad a la población: contar con vivienda y la condición legal de los terrenos donde produce.

En relación con la vivienda, un 86 % de los productores entrevistados cuentan con casa propia, es decir, 50 de los 58 entrevistados; los restantes 7 son personas nacidas fuera del territorio y un productor que, aunque siempre ha vivido en Río Grande, tiene 30 años y grandes posibilidades de establecerse más adelante. Con respecto a la condición legal de las propiedades donde la población produce, un 66,10 % son propietarios de los terrenos, es decir, 39 de los 59 entrevistados trabajan e invierten sin mayores temores; de los restantes, 3 pagan arriendo, 2 pagan con producción, 10 gratuitamente

(posiblemente en propiedades de familiares) y 5 con otras formas de arriendo (con un porcentaje de las ganancias).

Este escenario coincide con la información del Censo Agropecuario que indica el estado legal del área del distrito de Paquera. Se refleja que el 98,92 % de la tierra está en manos de sus propietarios; un 1,04 %, en manos de arrendatarios y solo el 0,05 % registra otra forma de tenencia. El acceso a tierra es un factor endógeno que ha jugado un papel determinante y positivo en el desarrollo del cultivo de la guayaba.

Recientemente, se conformó una cooperativa llamada Coopeforjadores R. L., la cual opera en Paquera centro. Aunque su actividad no se vincula directamente con la guayaba, algunos de los productores de Río Grande son asociados. Entonces, es Coopeproguata R. L. la única organización conformada específicamente por el gremio de guayaberos. Su principal competencia dentro del territorio son tres intermediarios identificados que manejan el negocio de acopio y comercialización, con la particularidad de que también son productores, incluso de los pocos que igualan o sobrepasan el manejo de 2,5 hectáreas de cultivo. La población de Río Grande enriquece su cultura, mantiene vivas tradiciones que se reflejan en la forma de alimentarse, divertirse, vivir, organizarse y producir.

Las características biofísicas del territorio inciden positivamente en la producción y la calidad del producto final. No obstante, para mejorar, se debe prestar atención a detalles que favorecerán el provecho de las condiciones que ofrece el territorio. En Río Grande, un área significativa de los terrenos montañosos fue destinada a la conservación. Sin embargo, al hacer la entrega a las personas productoras, se les daba la unidad productiva dividida en dos sectores: una parcela conocida como “cerro” y otra “plana”, donde se ha producido pese a la dificultad de las características. Estas condiciones obstaculizan la siembra de cultivos extensivos, por lo que la guayaba se establece como una alternativa para la pequeña y mediana producción al ser rentable aun en pequeñas áreas.

Ramírez (2011) apunta que “hay diferencias climáticas entre regiones debido a la interferencia de algunos elementos abióticos” (Ramírez, 2011: 24), tales

como la energía solar, las corrientes de aire, las montañas y los continentes, la latitud y las corrientes oceánicas. De acuerdo con los datos de precipitación y temperaturas del territorio, el promedio de precipitación es de 1500 a 2000 mm al año, en zona moderadamente seca. Aunque es el rango más bajo en toda la península, significa un nivel de lluvias considerable que permite mantener humedad en los suelos. Además, se trata de una región muy cálida, con niveles altos de temperaturas, de 26,9 C°. Estas características promueven que la mayor parte de la comunidad de Río Grande se ubique en la zona de vida bosque húmedo tropical.

Las condiciones del tiempo y el clima son favorables para el cultivo la mayor parte del año. No obstante, se presentan con frecuencia fenómenos atmosféricos que ocasionan desastres, como los ocurridos los últimos años: el huracán Otto (año 2016), la tormenta Nate (año 2017) y la onda tropical 39 (año 2018), los cuales causaron pérdidas principalmente en la producción. A pesar de esto, el cultivo ha demostrado ser resistente tanto a los fuertes veranos como a las inundaciones, pero es recomendable mejorar las condiciones que propicien la sostenibilidad.

La población del distrito tiene dos características marcadas: la mayor cantidad de población es joven o adulta y mayoritariamente está ubicada en una zona rural. La ubicación en una zona rural es un factor que trae consigo ventajas y desventajas. En este caso, por un lado, se cuenta con mayor cantidad de áreas para la producción y el esparcimiento de las familias, se percibe menos la contaminación ambiental y hay un mayor contacto con la naturaleza y el acceso a recursos naturales; por el otro, existen limitantes, como menor calidad y cantidad de servicios como el transporte, la salud y la educación, el encarecimiento de productos como insumos para la producción, largas distancias para comercializar la guayaba, y muchos proyectos pendientes que requieren inversión pública, como el asfaltado de la ruta nacional 160 y un adecuado proyecto de riego.

En torno a la edad de las personas productoras, si se toma como referencia la muestra de quienes participaron en las entrevistas, se perciben extremos en los rangos de edad. El más joven tiene 26 años y el más longevo, 85 años; el promedio es de 50 años. La participación del núcleo familiar dentro de la

actividad es alta. De las personas entrevistadas, 47 tienen pareja y solamente 12 no. De las parejas, 38 son mujeres y 9 son hombres. Se identificó un fenómeno vinculado a la percepción del aporte al ingreso familiar. Si bien hay casos en los cuales se menciona que la pareja participa en la actividad, son muy pocos los que consideran ese apoyo como aporte al ingreso familiar, en especial cuando las parejas son mujeres, como se observa en el siguiente cuadro.

CUADRO 1. Relación entre la participación en la actividad y el aporte al ingreso familiar

| Género | Sí participan en la actividad | Sí aportan al ingreso familiar |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Mujer | 60,53 % | 28,95 % |
| Hombre | 100 % | 77,78 % |

Fuente: elaboración propia.

Se identificó, además, un alto porcentaje de hijos que realizan labores de cultivo, inclusive desde edades tempranas. En cuanto a la educación de las personas productoras y sus parejas, la mayoría de ellas se encuentra en un nivel básico (primaria completa), saben leer y escribir. Si bien no es la realidad de todos, constituye una fotografía cercana a la realidad. Por su parte, los hijos y las hijas, están cursando el nivel educativo que les corresponde. Gran parte del total va a la universidad. Son pocas las personas jóvenes por encima de los 20 años que no terminaron ni la escuela ni la secundaria.

Con respecto a la infraestructura educativa, Río Grande cuenta con dos escuelas: una fundada en 1950, la cual funciona desde hace más de 68 años; y la otra fue inaugurada en 1982, se ubica en Punta del Río, es unidocente y cuenta con una infraestructura más humilde. El Liceo Rural fue habilitado en 2013. Las clases se imparten en una estructura deficiente: un salón comunal adaptado para brindar el espacio hasta que se concrete la construcción de la institución. Antes de eso, los alumnos debían trasladarse hasta Paquera centro. En el ámbito de la salud, se cuenta con un Punto de Atención Periódica, ubicado en Punta del Río, y un Equipo Básico de Atención Integral en Salud (Ebáis) en el centro, cuya atención no es permanente, sino rotativa, ya que cubre otras comunidades. El servicio permanente se da en Paquera, en la sede del área de

salud y, para referencias especializadas o casos de gravedad, se traslada a la población al Hospital de Puntarenas, comúnmente en una lancha de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Con respecto a la infraestructura vial, en general, la península tiene mucho por mejorar. La mayoría de los kilómetros del distrito son en lastre o tierra (87,48 %), lo que ocasiona problemas de salud asociados a infecciones respiratorias agudas, unas de las enfermedades más frecuentes. El estado de las vías también dificulta el transporte, las actividades productivas, comerciales y turísticas.

Otros medios utilizados son el marítimo y el aéreo. Mientras el último funciona especialmente para turismo, el marítimo se da especialmente mediante ferry. Se ubican dos puntos de atraque (Paquera y playa Naranjo) y se brinda el servicio hasta Puntarenas. Para efectos de la comercialización de productores agrícolas como la guayaba, este medio es el más utilizado. Hay dos proyectos estratégicos de infraestructura para impulsar la producción de la guayaba: el primero, ya ejecutado, fue el puente ubicado en el sector de Dulce Nombre, el cual da salida a la población y a la producción del sector que en época de invierno quedaba incomunicado; el segundo, en etapa de ejecución, es el asfaltado de la ruta 160, sector Paquera-playa Naranjo. Finalmente, urge invertir en renovar y ampliar el sistema de riego con el fin de mantener los niveles de productividad durante el verano.

Uno de los principales retos de la política pública es la redistribución del ingreso, en especial, hacia las zonas rurales (Mideplan, 2018). Como distrito rural, Paquera está recibiendo menor acceso a los beneficios del desarrollo en comparación con otros sectores del país. Así lo refleja el Índice de Desarrollo Social Distrital del 2017, donde se ubica a Paquera en la posición 320 de 483 distritos con un valor de 55,97, un nivel intermedio si se compara con el de mejor y menor valor, y un nivel bajo respecto a los otros distritos de la Región Pacífico Central (Mideplan, 2018). Este tipo de información es útil para tomar decisiones correspondientes a políticas e inversión. Las condiciones del distrito son muy distintas a la imagen general del cantón central de Puntarenas.

La coyuntura para coordinar entre actores sociales es compleja. Todas las instituciones tienen una distribución diferente por razones técnicas o administrativas, lo cual produce desgaste en usuarios, deterioro del

servicio, traba en la comunicación, entre otras contrariedades. Promover una distribución más acorde con las necesidades territoriales será estratégico. Los gobiernos locales se hallan dentro de los principales actores sociales del territorio peninsular; sin embargo, arrastran grandes debilidades por depender de la Municipalidad de Puntarenas, lo cual afecta su planificación e inversión.

En cuanto al cultivo, no fue posible calcular con certeza la cantidad de tierra cultivada. La mayoría de quienes se encargan de la producción sabe cuánta área o cuántos árboles están sembrados, pero varía mucho la densidad de siembra utilizada. Con el volumen de guayaba cosechado, pasa algo similar, dado que, además de que no se conoce realmente el área de siembra, juegan otras variables en la cantidad de producto cosechado, como el manejo que le dan a las plantaciones y la edad de los cultivos. Los datos varían y por eso no se profundiza en esos datos. Solo se analiza la relevancia de llevar mayor control para ordenar los pedidos e incluso evitar los picos de producción.

Es difícil definir cuándo hay mayores rendimientos. Muchos concuerdan en que la lluvia contribuye a las cosechas. Sin embargo, el invierno ha variado y, con el cambio climático, es difícil precisar sus consecuencias. Este factor no se puede controlar; por consiguiente, los mismos productores y organizaciones deben ser más exigentes y planificar sus siembras con el fin de evitar la baja de precios por la sobreproducción.

Las plantaciones se ven perjudicadas por diversas plagas o enfermedades. Entre los años 2013 y 2014, se identificaron consecuencias del ataque de nematodos, como bajas en el volumen de producción de hasta un 70 % en el rendimiento de la planta. El nematodo ocasiona una enfermedad que ataca la planta fisiológicamente, elimina el sistema radical y la daña hasta su muerte (este proceso puede durar años, dependiendo del manejo dado al cultivo).

Se hicieron estudios de la concentración de nematodos en las raíces de los árboles y se registró gran cantidad de *Meloidogyne sp.* y *Pratylenchus sp.* La plaga era tan grande que en 100 gramos de raíz se pudieron encontrar entre 250 000 hasta 300 000 nematodos (Loría, 2018). Los organismos se presentan en árboles intolerantes a nematodos. Cuando el Gobierno de Taiwán inició el proyecto, sus técnicos promovían la reproducción de árboles con injertos

(técnica de propagación vegetal), utilizando un patrón resistente a este tipo de ataques; sin embargo, tras su salida, no se mantuvo esa práctica y se empezaron a reproducir las plantas por acodo (técnica de propagación vegetal).

La reproducción por acodo favorece la presencia de nematodos, los cuales causan que las raíces de las plantaciones se pudran, y los árboles mueren paulatinamente. El sustrato empleado para el acodo (muchas veces en un suelo no inoculado) contamina con nematodos las plantaciones. Esa y otras malas prácticas agrícolas, como utilizar herramientas contaminadas (rastras, palas, etc.), facilitan la dispersión del nematodo, que por sí solo no tiene la capacidad de llegar a un lugar fácilmente. Su movilidad es sumamente pausada por ser microscópico.

Se combate el ataque aplicando abono orgánico, enmiendas orgánicas (nitrato de calcio, sulfato diamónico, sulfato de magnesio), fertilizantes altamente solubles o nematicidas; además, al optar por condiciones ideales para estimular el sistema radical de la planta. Sin embargo, dichas prácticas no son frecuentes ni la solución permanente al problema. Aunado a un adecuado manejo del cultivo, se recomienda la siembra de árboles injertados con patrones resistentes al nematodo, como el cas y el güisaro, los cuales han demostrado resistencia a ese tipo de organismos (Loría, 2018).

La utilización del acodo para la producción de almácigos es común por varios motivos: no todos manejan la técnica del injerto, pero sí la del acodo. De comprarse los árboles, los injertados tienen mayor costo y el árbol hecho por acodo empieza a producir más rápido. El problema es que no se contempla el costo de cambiar la plantación en pocos años por el sistema radical débil de los árboles hechos por acodo (Loría, 2018). Para reflejar la realidad del uso del acodo como técnica de propagación vegetal en los cultivos, se presenta el siguiente cuadro. Algunas de las personas entrevistadas tienen diferentes áreas de cultivo con diferentes condiciones de edad y variedad; y se identificó un total de 103 áreas diferentes entre los 59 productores.

CUADRO 2. Tipos de propagación vegetal según variedad

| Variedad | Tipo de técnica de propagación | Cantidad |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| Tai kuo bar | Injertado | 15 |
| | Acodo | 78 |
| Chen chu | Injertado | 8 |
| | Acodo | 1 |
| Perla | Injertado | 1 |
| | Acodo | 0 |

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar, la mayoría de la muestra maneja la guayaba tai kuo bar y la técnica de propagación por acodo. La edad del cultivo de las otras variedades no supera los dos o tres años. Además, actualmente, no se hace una distinción en el mercado entre dichas variedades, ni por el productor ni por intermediarios y, menos, por el consumidor final. Se paga el mismo precio por cualquiera de ellas. No se cuenta con dosis recomendadas específicamente para el cultivo de la guayaba en la aplicación de fertilizantes y productos que combaten plagas y enfermedades. Es importante que se documente la experiencia del productor en este sentido.

En referencia a la generación de empleo, de las personas entrevistadas, 45 contratan personal (de una a tres personas, o más, dependiendo de la extensión de cultivo), lo cual da un total de 83 empleos. Este rubro varía dependiendo de la época de producción. Solo 14 productores trabajan con sus propios recursos, incluido el apoyo familiar. Los intermediarios generan entre 20 y 30 empleados, según la época productiva.

La actividad de la guayaba tiene un gran valor para la comunidad de Río Grande. Existe una gran dependencia a ella. Con las condiciones actuales, en un escenario en que la actividad desaparezca, el impacto negativo sería muy elevado. Habría incertidumbre, aumento del desempleo y

pobreza, disminución del desarrollo local, pérdida del bienestar social y migración de la población, hasta que surja otra alternativa. Al consultar a los productores, 56 calificaron la producción como altamente importante y solo tres lo hicieron como medianamente importante. De las instituciones, seis calificaron la producción como altamente importante y solo una como medianamente importante.

A pesar del interés plasmado, se detecta un deterioro asociado a la poca innovación en prácticas agrícolas y comercialización. Aun así, la actividad sigue siendo la base económica de la comunidad. Los actores sociales aún están a tiempo de tomar decisiones estratégicas. Vale considerar el enfoque territorial de desarrollo rural para generar dicha estrategia.

Actores territoriales y vínculos generados en torno a la actividad de la guayaba

En cuanto a los actores territoriales, cabe contemplar la siguiente cita: “Siendo el recurso humano el sujeto orientador y capaz de impulsar el ordenamiento territorial peninsular, es importante conocer sus principales dificultades socioeconómicas y culturales, así como sus potenciales reales para ejercer el proceso de transformación de su realidad” (DRIP, 1993: 59). Se hace un repaso por los diferentes actores sociales ubicados en el territorio, así como de las diferentes instancias de coordinación en los que participan. Resulta valioso destacar las capacidades con las que cuentan o requieren ser reforzadas, y el capital social en torno a la actividad de la guayaba.

Actores sociales y su rol en torno a la actividad de la guayaba

La base de la actividad productiva de la guayaba es el **sector productivo**. De acuerdo con los datos obtenidos de las listas, se proyecta que en la comunidad de Río Grande se concentren más de 100 personas productoras dedicadas a la actividad. Hace más de 20 años, se siembra guayaba en la comunidad de Río Grande. Las entrevistas reflejan que 29 personas dedicadas a la producción tienen menos de 10 años de realizar la actividad; 19, entre 10 y 20 años y 11, más de 20 años. La mayoría de ese grupo tiene mucha experiencia.

Ese aspecto no ha sido documentado y es fundamental respaldarlo con investigación que demuestre su funcionamiento e, incluso, que contribuya a mejorar aquellas prácticas erróneas. En general, la comunidad productora mantiene una buena relación. Se trata de un gremio que se conoce y se percibe un buen ambiente. En la información surgida a partir de las entrevistas semiestructuradas, las personas entrevistadas indicaron tener una excelente, muy buena o buena relación. Mencionaron seguir una adecuada comunicación y compartir conocimientos y herramientas. Solamente cuatro afirmaron que la comunicación puede mejorar y admitieron la presencia de celos por información o, por el contrario, porque no se escuchan consejos.

La mayor cantidad de quienes producen están trabajando actualmente bajo el modelo cooperativo. Coopeproguata R. L., organización con 11 años de trayectoria como cooperativa y una base de alrededor de 15 años bajo la figura de sociedad anónima con el nombre de Proguata S. A., asocia al momento de la investigación 74 personas productoras, aunque el número varía. Un porcentaje de ellas está trabajando las mismas áreas de producción por ser familiares o socios. Además, están quienes trabajan con otras personas intermediarias y quienes venden directamente en ferias del agricultor. La mayoría del colectivo busca intermediación para vender el producto.

De las personas entrevistadas asociadas a una organización, la mayoría de ellas pertenece a Coopeproguata R. L. Se supo de una afiliación a la Asociación de Papayeros de Paquera (APAP), la cual no tiene un funcionamiento activo, solo tramita el carnet de la feria del agricultor, y otra a Coopeforjadores R. L., cooperativa de reciente conformación con sede en Paquera, conformada en diciembre del 2017. Coopeforjadores R. L. tiene un total de 58 personas asociadas, las cuales producen diferentes productos agrícolas. De momento, está desarrollando un proyecto de venta de insumos agropecuarios.

Sobre las percepciones de las estructuras organizativas, desde el punto de vista de las personas asociadas de Coopeproguata R. L., se registraron valoraciones mayoritariamente positivas, con algunos puntos de mejora subrayados en las entrevistas. Se dieron un total 106 comentarios positivos y 23 puntos por mejorar. Muchas ideas se repetían, por lo que se describen generalizadamente a continuación:

CUADRO 3. Valoraciones de los productores asociados de Coopeproguata R. L.

| Valoraciones positivas | Valoraciones a mejorar |
|---|--|
| Buena labor de mercadeo y comercialización. | Muchos proyectos, luego de iniciados, no se concretan. |
| Acceso a insumos a buen precio. | Los precios no son estables por depender de un solo mercado. |
| Acceso a capacitaciones y apoyo técnico. | Faltan mejores alternativas para el mercado. |
| Crédito para pago de servicios (transporte, insumos, otros). | Hay problemas de comunicación. |
| Pago rápido y constante de la producción, además de excedentes. | Hay poco compromiso de los asociados. |
| Unidad y apoyo que beneficia. | Se realizan muchas reuniones, quitan tiempo. |
| Promoción de apoyo institucional. | No hay metas específicas. |
| Precio aceptable, aunque se baje el mercado. | No se sabe tributar, se debe asesorar. |
| Servicio de maquinaria. | Hay desacuerdos a lo interno de la organización. |
| Buen trato, personalizado. | El nivel académico de los asociados afecta. |
| | Hay poca capacidad de la organización para dar valor agregado. |
| | Se debe pagar el transporte del producto a la planta. |

Fuente: elaboración propia.

Las empresas intermediarias que trabajan en la zona gozan de una imagen positiva. En general, son vistas como una alternativa para vender la guayaba

por la poca capacidad, capital o interés de realizar el acopio y comercialización por cuenta propia. Coopeproguata R. L. es la única organización en la zona. La otra alternativa de internación son personas físicas con los medios para acopiar, transportar y comercializar la guayaba fuera del territorio.

La cooperativa cuenta con un consejo de administración, integrado por personas asociadas elegidas en la asamblea general. Tienen un gerente, un chofer del camión, otro del tractor, una asistente administrativa y ocho personas que trabajan en la planta de empaque. Esto da como resultado 12 empleos directos.

Además del acopio y comercialización de la guayaba, la cooperativa presta el servicio de maquinaria agrícola y, como proyecto a corto plazo, busca formalizar la venta de productos agroquímicos e insumos esenciales para la producción. Se está gestionando lo requerido para contar con permisos. Actualmente, se ejecuta un proyecto con el Inder y la Universidad de (UCR) a través de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEFBM), para la renovación de las plantaciones con árboles injertados con patrones resistentes a nematodos.

A mediano plazo, se visualizan dos proyectos: el primero dirigido a diversificar los productos recibidos en el centro de acopio con cosechas de la zona, como limón, papaya o mango; incluso vegetales para vender en el Mercado Regional Chorotega, pronto a iniciar operaciones. El otro es el proyecto de procesamiento que busca dar valor agregado. Dentro de las alternativas, se contempla la transformación de la guayaba en granola, mermelada, néctar, chips de guayaba o jabón. Hay mucha expectativa sobre estas ideas, pero precisa gestionar el plan para ponerlas en ejecución.

La cooperativa opera en dos instalaciones diferentes. La primera se encuentra en una propiedad del Inder. Tiene una superficie de 1138,62 m² y una infraestructura de aproximadamente 500 m², conocida como Centro de Procesos y Mercadeo de Alimentos (Ceproma), donde acopian la guayaba y se prepara su transporte a los puntos de venta. En el segundo local es un terreno de aproximadamente 1250 m², con una infraestructura de aproximadamente 400 m². Las instalaciones cuentan con oficinas, donde se planea instalar la venta de productos agroquímicos e insumos agrícolas. Ambos terrenos son

utilizados a modo de convenio con los propietarios registrales. El primer terreno es propiedad del Inder y el segundo, propiedad de la Asociación General de la comunidad.

Desde el punto de vista de Coopeproguata R. L., las personas productoras afiliadas se benefician con pagos estables, semanales y siempre puntuales, la capacitación recibida y el crédito en el pago de productos agrícolas, facilitado por la cooperativa, y que aumentará conforme se formalice el proyecto.

La cooperativa fue consolidada para promover los intereses de quienes se encargan de la producción. De parte del colectivo intermediario, los intereses que prevalecen son los propios, ya que constituyen estructuras más familiares, que forjan alianzas con el sector productivo para comercializar el producto, pero sin vínculos más profundos.

Debido a su estructura cooperativista y por tantos años de experiencia, se generan grandes expectativas en cuanto al capital social que debería existir; sin embargo, las debilidades son notorias. Para fortalecerse, precisa mermar la dependencia a la institucionalidad pública, lograr la ejecución de proyectos, crecer en cuanto a la capacidad administrativa y de comercialización, así como contar con mayor compromiso, solidaridad y comunicación de las personas asociadas.

En el caso de la familia Barboza, una empresa familiar, además de producir, ha alquilado cultivos o comprado producción en algún momento, pero no ocurre la mayoría del tiempo. Su mercado principal es Walmart, donde se coloca aproximadamente el 90 % de la guayaba que acopia. Uno de los proyectos que visualiza es diversificar la producción, no depender de un solo producto.

Por su parte, Beilyn Zúñiga, también reconocida por estar al frente de la empresa Guayapac (no es una organización inscrita como persona jurídica), maneja con apoyo familiar, principalmente de su esposo, el servicio de acopio y comercialización de la guayaba. Además de comprar guayaba a entre 25 y 30 entidades productoras de la zona, es productora y comercializa la fruta en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada) en Heredia, el mercado Borbón o el mercado Mayoreo.

Como parte de sus principales potenciales dentro de la actividad, menciona el compromiso, contar con un porcentaje de producto propio, tener transporte propio y mercado. La principal ventaja que ofrece es el transporte del producto desde la propiedad, el préstamo de las cajas para el empaque y el pago rápido. Dentro de sus proyectos está la diversificación, con miras a dar valor agregado. Finalmente, Pablo Jara, quien, además de ser productor, maneja el negocio con apoyo de su núcleo familiar, compra producción a colegas de la zona en algunas ocasiones. Su mercado principal es Walmart, donde coloca aproximadamente el 70 % de la guayaba; también visita Cenada, el mercado Borbón y el mercado Mayoreo. A corto plazo, tiene planificada la construcción de una bodega (exigida por Walmart) y renovar plantaciones. Su principal potencial como intermediario es contar con transporte y tener un mercado de calidad. Las personas intermediarias que le venden a Walmart deben cumplir con una serie de condiciones, tanto de calidad del fruto como del manejo de las plantaciones. La producción, incluida aquella cuyo producto es vendido a través de plataformas, es monitoreada por personal de Walmart, el cual verifica el manejo de las plantaciones.

Las instituciones presentes del sector agropecuario son MAG, Consejo Nacional de Producción (CNP), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) e Inder; así como Infocoop, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); universidades, como UCR, Universidad Nacional (UNA) y Tecnológico de Costa Rica (Tec) y, recientemente, organizaciones no gubernamentales, como Fundación Ciudadanía Activa, la cual opera en convenio con Inder y está en el territorio por un período específico. Desde el punto de vista del sector productivo, el acompañamiento de las instituciones en el asesoramiento de la producción debe mejorar. Si se toma como referencia lo manifestado, un 54 % sostuvo no recibir orientación en ese aspecto. Del restante, un 46 % asegura sí contar con guía.

Coopeproguata R. L. se establece como la cooperativa de la cual se recibe mayor apoyo. A pesar de no ser una institución pública, resulta primordial resaltar su labor. Las entidades más mencionadas fueron el MAG y la UCR, las cuales tienen claras funciones en este sentido. Se nombraron otras, como Inder, Infocoop, INA, UNA, Tec e IMAS; además de una empresa privada:

Walmart (solo para quienes están en ese mercado). Un dato relevante es que las personas asociadas a Coopeproguata R. L. manifiestan una percepción más positiva del apoyo institucional. Lo anterior se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO 4. Percepción del acompañamiento en la producción de productores asociados a Coopeproguata R. L. versus no asociados

| Percepción del productor | Asociados a Coopeproguata R. L. | No asociados a Coopeproguata R. L. |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Con acompañamiento institucional | 55 % | 26,32 % |
| Sin acompañamiento institucional | 45 % | 73,68 % |

Fuente: elaboración propia.

De forma generalizada, no directamente en cuanto a la función de apoyo técnico a la producción, se observa la presencia, en orden de mención, de instituciones como MAG, Inder, UCR e Infocoop. Se destacan a otras, como UNA, TEC, IMAS, Senara, Inamu, INA y organizaciones como Coopeproguata R. L. y Walmart. Tal es la percepción de las personas productoras, con excepción de 9 de ellas, quienes no consideran la presencia de ninguna institución en el territorio que acompañen el fortalecimiento la actividad.

Por su parte, las personas intermediarias también tienen su percepción de las instituciones. Se pudo evidenciar el gran acompañamiento del que goza Coopeproguata R. L., pues, a lo largo de estos años, ha contado con financiamiento de proyectos y capacitación de instituciones como Infocoop, UCR, UNA, TEC, MAG, IMAS, Inder y Fundación Ciudadanía Activa, esta última presente en la zona por un tiempo específico, mediante un convenio con el Inder.

Por su parte, tanto la familia Barboza como Pablo Jara afirmaron recibir apoyo proveniente del MAG y de Walmart (empresa privada), en cuanto al acompañamiento y asesoramiento para la producción. Finalmente, Beilyn Zúñiga (Guayapac) dice no tener ningún tipo de apoyo, pero tampoco lo ha gestionado.

Como parte de esta investigación, algunas instituciones vinculadas con la actividad de la guayaba formaron parte de las entrevistas. Dentro de la muestra, se encuentran personas representantes del Inder, MAG, UNA (Escuela de Planificación y Promoción Social), Concejo Municipal de Distrito de Paquera, así como de la Fundación Ciudadanía Activa, que, si bien no es una organización gubernamental, está laborando en el territorio con el Inder y el IMAS, a través de convenios proyectados para la preparación de organizaciones y productores para el Mercado Regional Chorotega. Además, se tomó el punto de vista de representantes de dos instancias de coordinación de la región: el Subsector Agropecuario y el Consejo Territorial de Desarrollo Rural (sobre la conformación y funcionamiento de estas instancias se ampliará en el siguiente apartado).

Con excepción del representante del CTDR, se considera que existe coordinación institucional. Hay consenso en que, si bien se hace un esfuerzo, siempre se debe mejorar, evitando la duplicidad de funciones, propiciando un mayor impacto de los proyectos ejecutados, difundiendo la información del trabajo en proceso y manteniendo una comunicación favorable para la retroalimentación de las labores diarias.

De las instituciones entrevistadas, la mayoría de ellas cuenta con instalaciones en el territorio, lo cual les da ventajas, como mantener una atención permanente, facilitar la coordinación entre instituciones, favorecer el acceso de los productores a las oficinas, interactuar más fácilmente con la persona productora y conocer más la realidad de la región.

Por su parte, las instituciones que están fuera del territorio afirman tener ventajas, como mayor contacto con instancias superiores, traslado a otras regiones para conocer experiencias relacionadas y observar las organizaciones y actividades productivas desde el exterior. Lo anterior contribuye a la hora de identificar puntos de mejora, objetivos y metas a seguir. Sin embargo, su presencia es periódica, lo cual limita el contacto con otras entidades, aunado a que los costos del traslado y la permanencia en el territorio son altos.

Instancias de coordinación

En el territorio funciona el Subsector Agropecuario, instancia de coordinación que funciona con respaldo de la Ley 7064 de Fomento a la Producción Agropecuaria (Fodea) y la Ley Orgánica del MAG, cuyo objetivo, de acuerdo con el artículo 29, es: “Crear una instancia institucional idónea para la dirección, planificación, coordinación, ejecución, control y evaluación de las actividades públicas, como apoyo al desarrollo agropecuario nacional” (Asamblea Legislativa, 1987: 9). Esta entidad permite la unión y discusión de criterios técnicos. Asimismo, vela por la comunicación y la coordinación institucional.

Otra instancia de coordinación es el CTDR del territorio Paquera-Cóbano-Lepanto- Chira, conocido como territorio peninsular y conformado en octubre del 2014. Funciona bajo el reglamento vigente aprobado en 4 de mayo de 2018. Según el artículo 18 de dicho reglamento, se constituye bajo las siguientes condiciones:

Artículo 18: Constitución de los CTDR. De conformidad con lo establecido en el artículo 8, inciso a) y artículo 13 de la Ley n. ° 9036, en cada territorio deberá conformarse un CTDR, que tendrá como función la participación en la formulación de los PDRT en los territorios establecidos por el Inder, cuya facilitación corresponde al Instituto, así como, coadyuvar en el control y fiscalización, a través de la denuncia pública, del uso de los recursos públicos en proyectos de interés territorial y facilitar la gestión y coordinación interinstitucional en los territorios. A su vez, los CTDR estarán conformados por cuatro órganos: a) una Asamblea General (AG), b) un Comité Directivo (CD), c) la Asesoría Territorial y d) la Fiscalía. (MAG, 2018: 21).

El CTDR peninsular tiene un Plan de Desarrollo Territorial (PDRT) a cinco años (2015-2020), con iniciativas vinculadas a las diferentes dimensiones de desarrollo. En cuanto a la dimensión económica productiva de ese plan, se estableció un único programa, llamado Fomento a la producción sustentable. Una de sus propuestas consiste en “Formular un documento de proyecto para generar el valor agregado en la producción de guayaba en la comunidad de Río Grande de Paquera” (CTDR, 2015: 49).

Fortalecimiento de capacidades

Se deben fomentar las capacidades en las personas a cargo de la producción y organizaciones, sin dejar de lado el fortalecimiento institucional para obtener mayor proyección de sus funciones. Muchas de las entidades que dan apoyo carecen de recursos, eso limita su desempeño. El fortalecimiento de las capacidades productivas y de las organizaciones debe ir en varios sentidos: recibir capacitación, aplicar conocimientos y dar seguimiento a los resultados. A las instituciones les corresponde no duplicar recursos y evaluar su impacto. En cuanto al sector productivo y las organizaciones, deben empoderarse y recibir programas de capacitación acorde con sus necesidades (muchas veces reciben lo que la oferta institucional quiere).

Desde el punto de vista productivo, urge una guía respecto a aplicar buenas prácticas agrícolas que aumenten la cosecha, eviten el impacto ambiental y mejoren el manejo de plagas y enfermedades, especialmente el ataque de nematodos. Desde el punto de vista organizacional, precisa instruirse en planificación, administración para la gestión y ejecución de proyectos y el fortalecimiento en comercialización.

Capital social generado en torno a la actividad de la guayaba

El ambiente en el cual se desarrolla la actividad y el nexo entre las personas productoras es positivo. Una ventaja es contar con una organización que agremia a los guayaberos, lo cual representa una plataforma de desarrollo. Sin embargo, es preciso superar debilidades y promover la unión y los valores cooperativistas entre las personas asociadas.

A través de Coopeproguata R. L., se han gestionado diversas ayudas para la organización y quienes conforman el gremio. A pesar de su servicio de acopio y comercialización de la guayaba, no es evidente su acción intermediadora. Hay muchas expectativas sobre los proyectos que plantean ejecutar: valor agregado, nuevos mercados y la venta de insumos agropecuarios. Por su importancia social, la compañía debe proyectar confianza y unión, tomar un papel más protagónico en su proyección a la comunidad y mayor fuerza dentro de las estructuras de poder del territorio.

El capital social de Coopeproguata R. L. es débil, aunque con potencial. El fortalecimiento de los vínculos depende del colectivo asociado, siempre las mismas personas toman el liderazgo, participan en actividades de capacitación, se involucran en los proyectos o desempeñan puestos de toma de decisiones. Se requiere compromiso común para dar respaldo al Concejo de Administración y la Gerencia y, al mismo tiempo, exigir resaltados que den rumbo a la cooperativa y a la actividad. Se considera que la organización y el ambiente en que se desarrolla la actividad, especialmente las características en aspectos productivos y la experiencia de los actores sociales, son factores endógenos que potenciarían la actividad, en tanto se trabaje como un territorio competitivo.

Estructura de comercialización del cultivo de la guayaba

Según se identificó en la comunidad de Río Grande, trabajan cuatro entidades intermediarias, una de las cuales es Coopeproguata R. L. Las otras son organizaciones más familiares que comercializan como persona física: Asopaq (Beylín Zúñiga), familia Barboza (Miguel Barboza) y Pablo Jara; además, algunas personas productoras comercializan su producto directamente con las consumidoras finales.

En los últimos años, está llegando al mercado guayaba de plantaciones ubicadas en San Carlos, Turrialba, Guápiles, Siquirres, Puerto Viejo, Alajuela y Orotina, según lo indicado por el gerente de Coopeproguata R. L. y Pablo Jara. Existen diferentes caminos para que el producto llegue a la persona consumidora final. Primeramente, está el gremio agricultor, el cual conforma la minoría. Se vende a las personas consumidoras finales, normalmente en ferias del agricultor ubicadas en el Valle Central. Las personas intermediarias identificadas colocan el producto fuera de la Península, donde el producto pasa regularmente por más procesos intermediarios que los colocan en supermercados, tramos de frutas o ferias del agricultor, antes de llegar a la etapa de consumo final. Esto pasa principalmente cuando la guayaba llega a Cenada, mercado Borbón o el mercado Mayoreo.

La familia Barboza y Pablo Jara mantienen un mercado más exigente: venden a Walmart, una empresa que posee cadenas de supermercados en todo el país. Según comenta Pablo Jara, la guayaba se llega a colocar en supermercados en Centroamérica, donde la corporación multinacional funciona. En el caso de la cooperativa, de la cantidad total de producto comercializado, aproximadamente el 75 % de las personas afiliadas lo coloca en Cenada, donde la guayaba es comprada por otros entes intermediarios que la distribuyen en diferentes puestos, sin precisar su destino final. Un 15 % vende la fruta a dos empresas: Frutas Didado S. A. y Cotagro, ambas de la zona norte y proveedoras del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). El 10 % restante ofrece el artículo a modo de prueba en Panamá, por medio de otra entidad intermediaria. La guayaba se comercializa fuera del territorio y se vende una cantidad mínima a algunas personas que esporádicamente pasan por la cooperativa.

Fuera del territorio, quienes controlan el mercado son otros entes intermediarios que normalmente llegan a Cenada. En esta instancia, se fijan los precios, que varían de acuerdo con la oferta y demanda del producto. No existe coordinación entre entidades intermediarias para colocar los productos y, en épocas de picos de producción, el impacto es mayor. El sector intermediario obtiene mayores ganancias. Por ejemplo, si se paga la guayaba a los productores en Río Grande a 300 colones el kilo de primera calidad, en Cenada se coloca en 500 colones y el consumidor final compra el kilo entre 1200 y 1300 colones. Cuando se satura el mercado, la guayaba baja su precio y resulta más afectado el sector productivo. Mayoritariamente, el gremio productor coincide en ideas de mejora. Las organizaciones deben considerar una estrategia para involucrarlo y comprometerlo en la toma de decisiones.

A pesar de las necesidades, la actividad aún se encuentra en un punto con retorno para trabajar en un plan estratégico, basado en el enfoque territorial de desarrollo rural. Se sugieren alternativas dirigidas a seis puntos centrales:

1. Buenas prácticas agrícolas, promoción de renovación de plantaciones por injerto para el combate de nematodos y producción orgánica.

2. Otros proyectos, como la diversificación, valor agregado y promoción del producto y del territorio como un producto estrella.
3. Capacitación de los actores sociales.
4. Estrategia de comercialización y mercadeo.
5. Aporte y acompañamiento institucional.
6. Mayor aprovechamiento y necesidad de recursos.

Las anteriores alternativas pueden ser, en algunas ocasiones, similares, a pesar del enfoque del sector que las propuso y se aprecian en el siguiente cuadro:

CUADRO 5. Alternativas de mejora para el cultivo, el productor y las organizaciones

| El cultivo | El productor | Las organizaciones |
|---|--|--|
| Mejorar y aplicar buenas prácticas agrícolas. Los productores siguen usando las mismas prácticas que generan problemas, no se adaptan a nueva tecnología. | Implementar una estrategia productiva y comercial mediante un plan de largo plazo que aborde debilidades, amenazas, fortalezas y riesgos del sector. | Formar a sus productores y exigir la aplicación de buenas prácticas agrícolas. |
| Incorporar innovación tecnológica en todo tipo de empaque: desde la fruta en la plantación, transporte, cajas de presentación. | Aplicar buenas prácticas agrícolas. | Buscar alternativas para dar valor agregado. |
| Renovar las plantaciones con patrones tolerantes a los nematos, y variedades con mejor producción y frutos con mayor palatabilidad. | Buscar la producción orgánica de la guayaba. | Prestar otros servicios (venta de insumos, servicio de maquinaria agrícola, entre otros). |
| Diversificar, depender de un solo cultivo es muy riesgoso. | Buscar la sostenibilidad del cultivo. | Garantizar mayor proyección dentro y fuera de la Península (campañas locales del ambiente, ferias de la guayaba, vallas publicitarias, construcción de parada de autobuses). |

| El cultivo | El productor | Las organizaciones |
|---|---|--|
| <p>Fomentar el valor agregado, de la guayaba y otros productos, si es necesario, mediante la creación de nuevas empresas.</p> | <p>Identificar la procedencia de la guayaba dentro y fuera del territorio (una calcomanía con la leyenda: "Guayaba Paquera").</p> | <p>Fortalecer la organización con acompañamiento concreto y metas claras de cumplimiento.</p> |
| <p>Crear capacidad para que productores y asociaciones gestionen proyectos.</p> | <p>Celebrar una feria de la guayaba.</p> | <p>Promover el relevo generacional, incorporando gente joven en la toma de decisiones.</p> |
| <p>Fortalecer la cooperativa.</p> | <p>Depender de un solo cultivo es muy riesgoso.</p> | <p>Buscar alternativas de nuevos mercados.</p> |
| <p>Mejorar la asesoría técnica al sector productivo.</p> | <p>Ofrecer subproductos a base de guayaba y otras frutas de la zona.</p> | <p>Ser evaluados por el gremio productor.</p> |
| <p>Brindar una estrategia organizacional, productiva y de comercialización más exitosa y con mayor apoyo.</p> | <p>En caso de asociarse, dar más apoyo a la organización e involucrarse en la toma de decisiones.</p> | <p>Mayor información y comunicación a las personas productoras, para entender la trascendencia de los proyectos gestionados.</p> |

| El cultivo | El productor | Las organizaciones |
|--|--|---|
| <p>Apoyar la participación de las instituciones pertinentes según el proyecto a desarrollar.</p> | <p>Aumentar interés de aprender, capacitarse, pero, sobre todo, de aplicar conocimientos, aprovechando la capacidad técnica y científica de las instituciones.</p> | <p>Valorar lo que tienen y las ayudas que se les ha dado.</p> |
| <p>Fortalecer institucionalmente la zona.</p> | <p>Tener una visión a largo plazo que vaya más allá de sembrar y vender a las personas intermedias.</p> | |
| <p>Acceder a financiamiento acorde con la realidad del sector productivo.</p> | <p>Aprovechar más los recursos (agua, suelo).</p> | |
| <p>Mejorar la infraestructura vial y de comunicación.</p> | | |

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones derivadas a partir de los elementos del análisis de esta investigación son:

- La variedad de guayaba que se siembra no es autóctona, pero se incorporó en la “cultura agrícola” de la región.
- Hay potencial para posicionar el cultivo y el territorio, promocionando los productos y la imagen de la comunidad y ampliando la frontera del desarrollo agrícola a otros motores de progreso, como el turismo rural comunitario.
- Se trata de una actividad con condiciones para manejarse de manera amigable con el ambiente, pero requiere del sector productivo y las organizaciones tomar conciencia.
- La guayaba se produce en pequeñas extensiones. Es viable promover mayor producción con mejores manejos del cultivo.
- Un alto porcentaje de la actividad está condicionada por una organización productiva débil, con limitaciones y capacidad para gestionar, formular, implementar y monitorear proyectos estratégicos.
- Existen liderazgos o focos de poder con diferentes intereses, los cuales no han logrado el equilibrio para trabajar por un objetivo común. El capital social es débil.
- La guayaba se encadena con otras actividades generadoras de desarrollo, mayoritariamente con servicios vinculados a la producción. El que las personas productoras tengan ingresos semanales genera solvencia para comprar artículos de manutención familiar y vivienda, en locales dentro de la comunidad.
- La actividad promueve la integración familiar, permite la participación de hijos, hijas y mujeres dentro de las actividades agrícolas.
- Existe dependencia de la actividad. Si desaparece, crearía una incertidumbre por falta de ingreso para mantener a las familias.

- Muchas familias productoras permanecieron en Río Grande por la oportunidad económica que generó la guayaba. La mayoría de ellas contaba con el recurso de la tierra.
- Existen bases de datos de entes productores y cultivos que requieren actualización, puesto que son herramientas para la toma de decisiones.
- Promover un apoyo institucional que fortalezca a los actores sociales con tecnología, investigación y asesoramiento en el manejo del cultivo, administrativo y comercial. De forma que se evite la dependencia de las organizaciones a las instituciones públicas.
- El proyecto de asfaltado de la ruta 160, sector playa Naranjo-Paquera, viene a dinamizar las actividades en la zona de influencia, como Río Grande.
- El acompañamiento de instancias de coordinación, como el Subsector Agropecuario y el CDRT peninsular, son aliados estratégicos en la aplicación de procesos bajo el enfoque territorial de desarrollo rural.
- Los proyectos deben nacer de los actores sociales. Si son apoyados por factores externos o políticas del Estado, deben incluir organizaciones y un territorio con capital social para garantizar éxito y sostenibilidad.
- El costo de transporte para comercializar guayaba fuera del territorio es elevado, lo encarece la distancia del mercado y el servicio de ferry.
- No se ha innovado en la actividad. Se necesita que los actores sociales se atrevan a tomar decisiones que apuesten a dinamizar la actividad.
- La guayaba es el principal producto de exportación (hacia afuera de la región). Su acogida ha permitido condiciones de vida favorables para la población local.
- Mercados más directos y cercanos al consumo final brindaría mejores condiciones para el sector productivo.
- Existe el potencial para fortalecer la actividad guayabera como un clúster, pero no está explotada plenamente.
- La experiencia en el manejo del cultivo coadyuva al sector productivo a identificar problemáticas como el ataque de nematodos, el cual afecta

directamente la raíz de los árboles y reduce la producción hasta acabar con el árbol. Se deben buscar alternativas para el mejoramiento de estas condiciones, reemplazando los cultivos actuales con árboles injertados con patrones resistentes a nematodos, como el cas o el güisaro, y adoptando buenas prácticas agrícolas.

- Otra potencialidad aún por explotar es el procesamiento del fruto agregando valor: chips, jugos, néctar, granola, mermeladas, *topping* y jabones, son algunos productos explorados.
- Además de la variedad tai ku bar, el uso de otras variedades con otras características de sabor, dulzura, color y textura facilitaría la producción de valor agregado. En ese sentido, es crucial promover la siembra variada.
- La venta de guayaba fresca implica realizar una comercialización ágil, ya que el producto pierde calidad rápidamente. La investigación en prácticas de manejo poscosecha, aumentaría la posibilidad de acceder a otros mercados.

De la mano con las conclusiones, se brindan las siguientes recomendaciones consideradas útiles para los actores sociales relacionados a la actividad:

- Impulsar el cultivo de la guayaba como un producto estrella, promoviendo otro tipo de actividades, como el turismo rural comunitario.
- Manejar las plantaciones en armonía con el ambiente, a través de un mejor uso de las bolsas de plástico utilizadas para embolsar guayaba, un adecuado manejo de productos químicos o un aumento del uso de productos orgánicos que, además, combata nematodos.
- Actualizar las bases de información tanto de los productores como de las plantaciones. Tener información precisa ayuda a tomar decisiones y planificar.
- Aumentar el capital social, proyectando el relevo generacional y fortaleciendo la estructura organizacional.
- Promover el involucramiento del sector productivo en el seguimiento de proyectos. Pocas personas trabajan en pos de alcanzar un cambio.

- Articular con instituciones del Estado y otras instancias de coordinación territorial en la ejecución de los proyectos estratégicos.
- Coopeproguata R. L. puede reforzar su base económica por medio de una adecuada planificación y culminación de proyectos.
- No esperar una crisis para promover cambios. Es requerido buscar alternativas inmediatas a las dificultades presentadas.
- Generar oportunidades a la población vulnerable, como mujeres, personas adultas mayores y jóvenes, para que no migren a la ciudad.
- Invertir en obras que promuevan capacidad instalada para la producción: proyecto de riego, mejora de caminos e infraestructura para acopio de guayaba y procesos de valor agregado.
- Cumplir un protocolo que ayude a mejorar la calidad del producto y la vida del cultivo.
- Promover tecnologías en procesos de campo y poscosecha. Es una deuda pendiente de las universidades e instituciones del sector, la cual el gremio productivo debe promover con mayor interés.
- Generar capacidades y estrategias comerciales para abarcar mejores mercados, más cercanos o directos al consumo final, como el Mercado Regional Chorotega, el Programa Integral de Mercadeo de Alimentos (PIMA) u otros mercados locales.
- Incorporar otras variedades con características viables comercialmente y útiles en procesos de valor agregado.
- Perfeccionar procesos y fortalecer la gestión productiva con mayor planificación de la producción para evitar los picos de producción, manejar de forma inteligente los recursos, promover el trabajo en investigación, transferir tecnología aplicada por el sector productivo, como la sustitución de las plantaciones con árboles injertados con patrones resistentes a nematodos, utilizar productos más amigables con el ambiente y aplicar buenas prácticas agrícolas.

BIBLIOGRAFÍA

- Actis Di Pasquele, E. 2008. “La operacionalización del concepto de Bienestar Social: un análisis comparado de distintas mediciones”. *Observatorio Laboral Revista Venezolana*, 1 no. 2. <http://servicio.bc.uc.edu.ve/faces/revista/lainet/lainetv1n2/art1.pdf>
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 1987. *Ley 7064. Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria Orgánica del MAG*. <http://www.mag.go.cr/legislacion/1987/Ley-7064.pdf>
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 2012. *Ley 9036. Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder)*. http://www.gaceta.go.cr/pub/2012/05/29/COMP_29_05_2012.pdf
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 2001, 7 de diciembre. *Reforma de la Ley n. ° 8173. Ley General de Concejos Municipales de Distrito*. http://www.gaceta.go.cr/pub/2014/04/25/COMP_25_04_2014.pdf
- Berdegú, J., Bebbington, A., Escobal, J., Favareto, A., Fernández, I., Ospina, P., Trivelli, C. 2012. *Territorios en Movimientos. Dinámicas Territoriales Rurales en América Latina. Documento n. ° 110. Programa Dinámicas Territoriales Rurales*. http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1366233526N1102012TerritoriosenMovimientoBerdegueBebbingtonEscobalFavaretoetal.pdf
- Consejo Territorial de Desarrollo Rural. (CTDR). 2015. *Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira. Plan de Desarrollo Rural Territorial 2015-2020*. https://www.inder.go.cr/territorios_inder/region_pacifico_central/planes_desarrollo/PDRT%20Paquera%20Cobano%20Lepanto%20Chira.pdf
- Debuyst, F. s. f. *Interdisciplinariedad práctica: relaciones de saberes y poderes entre actores del desarrollo*. <http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2001-05-09.pdf>
- Desarrollo Rural Integral Peninsular (DRIP). 1993. *Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para el Desarrollo Sostenible de la Peninsular*. Puntarenas: DRIP.

- Flores, M., y Rello, F. 2003. “Capítulo VI. Capital social: virtudes y limitaciones”. En *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe en busca de un nuevo paradigma*, eds. R. Atria, M. Siles, I. Arriagada, L. Robison, y S. Whiteford, 1-590. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2327/S029693_es.pdf
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. 2014. *Metodología de la Investigación* (6.ª ed.). <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>
- Instituto de Desarrollo Rural (Inder). 2014. *Caracterización básica. Territorio Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira*. https://www.inder.go.cr/territorios_inder/region_pacifico_central/caracterizaciones/Caracterizacion-Paquera-Cobano-Lepanto-Chira.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 2011. *Censo 2011*. <http://www.inec.go.cr/censos/censos-2011>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 2017. *Encuesta Nacional de Hogares Julio 2017. Resultados Generales*. <https://presidencia.go.cr/wp-content/uploads/2017/10/ENAH02017.pdf>
- Jolly, J. F. 2012. “La interdeterminación entre territorio, territorialidad y territorialización de las políticas públicas: hacia una nueva propuesta de esquema para el análisis de las políticas públicas en el territorio”. *XVII Congreso Internacional del CLAD sobre reformas del Estado y de la Administración Pública*. <http://policytics.com/wp-content/uploads/2015/05/03.pdf>
- Loría, C. 2018, 28 de mayo. *Aspectos sobre la efectación de nematodos en guayaba*. (M. G. Vargas, Entrevistador)
- Maguiña, A., y Varas, N. 1998. “Bienestar Social y Trabajo Social Alternativo”. *Revista Acción Crítica*, no. 23: 1-6. <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/accioncritica/ac-cr-023-04.pdf>
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 2018. *Alcance N°91 Decretos. N°41086-MAG. Decretan: Reglamento de la Ley N° 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder)*. https://www.inder.go.cr/acerca_del_inder/leyes_reglamentos/doc/reglamentos/reglamento-ley-inder-alcance-91.pdf

- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). 2018. *Índice de Desarrollo Social 2017*. <https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/6l2bxJTjQqWPGoLkFtG9Xw>
- Munarriz, B. (1992). *Técnicas y métodos en Investigación cualitativa*. <https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8533/CC-02art8ocr.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Polèse, M. 1998. *Economía Urbana y Regional. Introducción a la relación entre territorio y desarrollo*. Libro Universidad Regional.
- Ramírez Albán, N. 2011. *Biología III. Guía de estudio. Código 3113*. <https://www.uned.ac.cr/ecen/images/catedras/GE-BiologiaIII-3113.pdf>
- Saiz Vélez, J. E. 2013. Capital social y empresas rurales: un estudio de caso. *Criterio Libre* 11, no.19: 143-161. revistas.unilivre.edu.co/index.php/criteriolibre/article/download/1105/848
- Samper, M., Arce, J. C., y Padilla, A. 2016. Tareas preparatorias para la gestión del desarrollo de los territorios rurales. *Serie: Fascículos metodológicos* 2. San José: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). <http://repiica.iica.int/docs/B4237e/B4237e.pdf>
- Schejtman, A., y Berdegué, J. 2004. *Desarrollo territorial rural. Santiago, Chile: RIMISP Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural*. http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1363093392schejtman_y_berdegue2004_desarrollo_territorial_rural_5_rimisp_CARdumen.pdf
- Schneider, S., y Peyrè Tartaruga, I. 2006. Territorio y Enfoque Territorial: de las referencias cognitivas a los aportes aplicados al análisis de los procesos sociales rurales. En *Desarrollo Rural. Organizaciones, Instituciones y Territorio*, eds. M. Madazal, G. Neiman, y M. Lattuada, 71-102. https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Schneider/publication/270816637_TERRITORY_AND_TERRITORIAL_APPROACH_FROM_COGNITIVE_REFERENCES_TO_APPROACHES_APPLIED_TO_THE_RURAL_SOCIAL_PROCESSES_ANALYSIS/links/57e3e59708aef0fe4041252e/TERRITORY-AND-TERRITORIAL-APPROACH-FROM-COGNITIVE-REFERENCES-TO-APPROACHES-APPLIED-TO-THE-RURAL-SOCIAL-PROCESSES-ANALYSIS.pdf

- Sepúlveda, S. 2008. *Gestión del Desarrollo Sostenible en Territorios Rurales: Métodos para la Planificación*. <http://repiica.iica.int/docs/B0712E/B0712E.pdf>
- Solarte Lindo, G. 2006. *Redes Institucionales y Cooperación Local: Nuevo Abordaje en la Lucha contra la pobreza rural*. https://books.google.co.cr/books?id=zKNVIPPbZS0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=estructura+economica+iica&source=bl&ots=i7Tuvp_804&sig=80x-
- Sosa Velásquez, M. 2012. *¿Cómo entender el territorio? Colección Documentos para el debate y la formación. Programa Gestión Pública y Desarrollo Territorial* (1.ª ed.). <http://www.rebellion.org/docs/166508.pdf>
- Soto Baquero, F., Beduschi Filho, L. C., y Falconi, C. 2007. *Desarrollo Territorial Rural. Análisis de Experiencias en Brasil, Chile y México*. <http://www.fao.org/3/a-a1253s.pdf>
- Tapia, N. 2008. *Aprendiendo el desarrollo endógeno sostenible. Construyendo la diversidad bio-cultural*. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Bolivia/agruco/20171003033916/pdf_544.pdf
- Vitale, J., Pascale Medina, C., Barrientos, M., y Papagno, S. 2016. *Guía de prospectiva para el ordenamiento territorial rural de la Argentina a nivel mundial*. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_guia_prospectiva_ot_nivel_municipal.pdf
- Zeledón, R. R., y Wann Fuh, J. 1994. *Cultivo de la Guayaba*. <http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/F01-9742.pdf>

LA CONSTRUCCIÓN SOCIO INSTITUCIONAL DEL HÁBITAT Y SUS IMPLICACIONES EN EL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL: LOS CASOS DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE LA ROSALÍA III Y EL HUASO EN EL CANTÓN DE ASERRÍ, 2015-2018

Paulo Hidalgo

INTRODUCCIÓN

¿ Por qué resulta relevante estudiar procesos sociohabitacionales en contextos rurales? Justamente porque las características de las realidades rurales han cambiado. Las interacciones con los entornos urbanos, los flujos migratorios desde el campo y hacia el campo, la generación de nuevas problemáticas sociales, económicas y ambientales y la intervención de actores externos han propiciado transformaciones en contextos rurales que tradicionalmente se determinaban en función de las actividades agrícolas o ganaderas y a escalas diversas.

En Costa Rica, se han materializado proyectos habitacionales por medio del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda (SFNV), para resolver la necesidad de vivienda de muchas personas. No obstante, es preciso profundizar, a partir de una visión integral, cómo dichos proyectos habitacionales han influenciado el desarrollo de los territorios en los que se han construido.

El cantón de Aserrí constituye un territorio, desde la visión político-institucional del Instituto de Desarrollo Rural (Índer), junto al cantón de Acosta y los distritos rurales del sur del cantón de Desamparados (Rosario,

Frtales y San Cristóbal). Esos cantones comparten muchos aspectos sociales, culturales, económicos y políticos que los enmarcan como un territorio del sur de San José. Conformados por comunidades tradicionalmente rurales, los distritos de Aserri más cercanos a la GAM (Aserri centro y Salitrillos) han sido más afectados por el crecimiento urbano sin planificación y las problemáticas asociadas a este fenómeno. Estas situaciones también se presentan en otros centros urbanos de la zona, aunque no formen parte de la GAM, tales como San Ignacio de Acosta, San Gabriel de Aserri y Vuelta de Jorco.

Con respecto a la creación de proyectos habitacionales en esa área, es posible identificar intervenciones puntuales, pero no una política específica. Los desarrollos de viviendas de interés social se han articulado a través del protagonismo de políticos locales y de desarrolladores privados, en el marco del SFNV.

El estudio se centra en los dos proyectos más consolidados que están habitados por familias en el momento de llevar a cabo esta investigación y que se pusieron en marcha recientemente: La Rosalía III y El Huaso. Estas iniciativas habitacionales también tienen la particularidad de haber reubicado población migrante de origen nicaragüense del asentamiento Triángulo de la Solidaridad, ubicado en la Gran Área Metropolitana, a Aserri.

En este contexto, resulta relevante determinar cómo la evolución reciente de estos dos proyectos habitacionales han influenciado al territorio, con el fin de aportar consideraciones teóricas que orienten la reflexión académica y, eventualmente, servir de insumo para la formulación de acciones que, desde la institucionalidad pública, impulsen una visión integral del desarrollo del territorio.

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) ha coordinado desde hace siete años la reubicación de familias de un asentamiento precario ubicado en Tibás. Todas estas familias son lideradas por madres y o padres migrantes nicaragüenses con muchos años de residir en el país. Muchas de estas personas tienen hijos costarricenses. El tema cobra interés nacional, pues el Gobierno busca crear infraestructura vial en el lugar donde actualmente viven estas familias, por lo cual conformó una comisión interinstitucional con el propósito de abordar la situación.

El primer proyecto es La Rosalía III, constituido por 11 viviendas, ubicado en la comunidad homónima en el distrito de Vuelta de Jorco de Aserrí. Todas las familias consideradas para este proyecto son externas al territorio y provienen del Triángulo de la Solidaridad. El otro proyecto habitacional es el de El Huaso de Aserrí, ubicado en la comunidad del mismo nombre, en el distrito de Salitrillos. Se construyeron un total de 30 viviendas, 16 de las cuales fueron para familias reubicadas provenientes del asentamiento precario mencionado y las otras 14 para familias de la zona. Los dos proyectos se han orientado a ofrecer un nuevo hábitat para las familias que, por sus propios medios, no podían resolver su situación de vivienda.

No obstante, surgen dudas con respecto a la adaptación de sus integrantes al entorno, particularmente aquellos que provienen de comunidades externas al territorio de Aserrí y de contextos sociourbanos distintos. Las dificultades de adaptación surgen porque las personas reubicadas no estaban familiarizadas con el entorno, ya que residían en un asentamiento precario en la GAM. Además, cuentan con características culturales diferentes a las de Aserrí, debido a que son personas de origen nicaragüense. Pese a tener décadas de residir en el país, comparten rasgos culturales propios.

La hipótesis es que el desarrollo de los dos proyectos habitacionales estudiados en el cantón implicó mejoras de vida para la población beneficiaria, pero no se han formulado desde una visión política-institucional de desarrollo integral del territorio ni en función de instrumentos de ordenamiento territorial que desemboquen en decisiones estratégicas a escala territorial a largo plazo.

El objetivo general de la investigación es analizar los procesos socioinstitucionales que intervienen en la constitución de nuevos hábitats en los proyectos habitacionales La Rosalía III y El Huaso, y las implicaciones de dichos procesos para el desarrollo integral del territorio en el que se enmarca el cantón de Aserrí.

Los objetivos específicos son:

1. Definir cuáles actores sociales y políticos influyeron en el desarrollo de los proyectos habitacionales La Rosalía III y El Huaso, así como en las interrelaciones entre sí.

2. Determinar los efectos sociales generados por estos procesos para el desarrollo integral del territorio en el que se enmarca el cantón de Aserrí.
3. Establecer si la ejecución de estos dos procesos habitacionales, desde la institucionalidad pública y otros actores, responde a una visión integral de desarrollo rural territorial.

MARCO TEÓRICO

Esta investigación es innovadora en el sentido de que no existen estudios académicos previos con respecto a cómo han influido proyectos de vivienda en el desarrollo integral de la región Caraigres o del cantón de Aserrí. Un antecedente teórico es la obra de Argüello Rodríguez, M. (1981): *Los más pobres en lucha*. En esta investigación, citada más adelante, el autor aborda las dinámicas que produjeron las luchas por vivienda digna en Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX y cómo la organización comunal y la incidencia política de los grupos socialmente excluidos les permitió modificar el entorno y acceder, muchas veces a la fuerza, a tierra por vivienda. El estudio reconoce, en el contexto costarricense de esa época, que la acción organizada de grupos sociales puede modificar el territorio y generar un hábitat particular.

Sin embargo, no se identifica un planteamiento previo con respecto a las alteraciones de la zona por el acceso a la vivienda digna de grupos sociales, que tome en cuenta las dinámicas territoriales del cantón de Aserrí o la región Caraigres. Por lo tanto, esta investigación aborda un objeto de estudio poco examinado en el territorio citado.

La investigación se dirige a partir del enfoque territorial del desarrollo rural, el cual se orienta a concebir el territorio de manera integral, con sus múltiples dinámicas e interacciones en los ámbitos ambiental, social, cultural, económico-productivo y político-institucional, así como sus interrelaciones con otros territorios rurales y urbanos.

El enfoque territorial resulta fundamental para comprender cómo se articula un territorio de manera integral desde sus aspectos ambientales, sociales,

económicos, culturales y políticos y cómo, a su vez, se vincula con otras regiones. Asimismo, este enfoque permite el establecimiento de relaciones multicausales de las problemáticas de una región. De esta forma, es posible profundizar en las distintas dinámicas y establecer dimensiones de análisis, lo cual contribuye a potenciar la construcción de soluciones de manera integral con la población orientada al desarrollo de los territorios rurales.

La integralidad del enfoque favorece la aproximación a las realidades rurales considerando los distintos contextos que se presenten y procurando la inclusión de los distintos actores del territorio con sus percepciones particulares. El enfoque territorial favorece el trascender de la localidad y conforma una lógica sistémica: una comunidad no solo se ve influenciada por dinámicas locales, sino por relaciones territoriales e interregionales que explican la realidad de la comunidad y requiere de planteamientos integrales.

Así, este enfoque parte de una concepción de territorio basada tanto en la ubicación física como en los distintos significados simbólicos de los actores locales y de las distintas dinámicas sociales, productivas y políticas, con el fin de comprender los procesos vinculados a la región de manera más completa (Schneider y Peyré Tartaruga, 2006: 71-102). Entender esas dinámicas resulta relevante para un adecuado diseño y una aplicación eficaz de políticas públicas acordes con la realidad de los territorios. Por lo tanto, el enfoque territorial coadyuva a la aproximación de las realidades rurales desde visiones integrales, sistémicas e inclusivas, para fomentar un crecimiento en armonía con el contexto y a las percepciones de su población. Por medio de este enfoque, es posible contextualizar el territorio respectivo en sus distintas dinámicas y orientar la investigación para determinar los efectos de la implementación de los dos proyectos habitacionales estudiados.

Con el fin de analizar las dinámicas político-institucionales que, desde el aparato público, tanto a nivel local como nacional, han ocasionado el desarrollo de los dos proyectos en cuestión, se parte de enfoques sistémicos clásicos: la teoría del sistema político acuñada por Easton y la relación cambio social-conflicto político, explorada por Tilly desde una lógica también sistémica.

El enfoque sistémico de Easton explica que el sistema político recibe demandas de la población (*inputs*) a las que responde por medio de programas

o políticas (*outputs*) (Easton, 1965). Según la obra de este autor, el Estado y sus instituciones son parte del sistema político. Este recibe demandas y apoyos del contexto o ambiente que lo rodea, los cuales pueden catalogarse como *inputs* o insumos. A partir de esos elementos, las autoridades del sistema político toman decisiones y acciones denominadas *outputs* o productos, los cuales envían de vuelta al contexto o entorno. Dichos *outputs* son las políticas públicas que el sistema formula e implementa a partir de las demandas o *inputs* que recibe.

El enfoque sistémico de Easton explica de manera relativamente sencilla el funcionamiento no solo de las instituciones públicas, sino de todo el sistema político de manera general, sin que por ello se obvian las distintas interacciones que intervienen en los procesos de formulación y ejecución. Conviene considerar el abordaje de Tilly, según el cual las reacciones del sistema político se deben al nexo entre el cambio social, como fenómeno de algunos actores sociales que reclaman reivindicaciones frente al *statu quo*, y el conflicto político generado a partir de dichas reivindicaciones (Tilly, 1998).

Si bien estos modelos explicativos no pretenden ser aplicados de manera uniforme a toda realidad y cuentan con limitaciones explicativas, como la necesidad de profundizar más en las relaciones y recursos de poder entre actores, sí resultan útiles para dar cuenta de cómo se han articulado procesos para mejoras del hábitat desde la institucionalidad pública. En vista de que se estudian procedimientos para la mejora del hábitat, se debe contemplar el concepto de producción social del hábitat y la vivienda (PSHV). Dichas iniciativas se articulan de manera planificada o no, con la participación de personas que buscan resolver su problemática de vivienda y mejorar sus condiciones de vida. Pueden significar desde mejoras en el entorno residido hasta la generación completa de un nuevo lugar para vivir.

En un contexto territorial, los procesos de PSHV requieren de la organización de las comunidades para crear el ambiente al que se aspira para vivir, así como la coordinación con actores públicos y privados presentes en el territorio. La vivienda digna se inserta en un concepto aún más amplio: el *hábitat*, entendido como el entorno en el que convive y se desarrolla el ser humano. Según el

Diccionario de Geografía Rioduero, citado por la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) (2006), “el concepto de hábitat refiere a todas aquellas condiciones que hacen parte de un determinado conglomerado humano, en el lugar en donde vive” (Fuprovi, 2006: 18). Este concepto abarca elementos vinculados con la vivienda, a saber:

- La calidad de la vivienda misma.
- Espacios públicos, como vías o senderos de acceso, iluminación de las calles, arborización y zonas verdes.
- Infraestructura: conexiones y servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado de aguas servidas y aguas de lluvia.
- Espacios públicos que propician y facilitan la vida colectiva, la recreación, el encuentro y la convivencia (parques, salones comunales, áreas verdes, entre otros).
- Servicios complementarios, como jardines de niños, escuelas y colegios, centros de salud y zonas de comercio, transporte público y servicios en general.
- Las condiciones socioeconómicas y culturales que reúnen las personas del lugar.
- Las condiciones físico-ambientales del lugar (características de los suelos, topografía, clima, entre otros).
- La organización y la participación comunitaria existente para atender y resolverlas necesidades comunitarias (Fuprovi, 2006).

El hábitat implica, por tanto, todas las condiciones socioeconómicas, culturales y físicas del entorno en el que se desenvuelven los individuos y es una parte sustancial de un territorio. Está en continua transformación, según lo consigna la Fuprovi en una publicación del 2006: “el hábitat no es una realidad dada, estática, sino que, por el contrario, es el resultado de procesos de transformación con un profundo contenido social y, por ello mismo, sujeto permanentemente a cambios espontáneos o planificados, provenientes de su entorno” (Fuprovi, 2006: 20).

La vivienda es parte de dicho entorno, por lo que aquellas mejoras en las condiciones de vida de las personas no solo dependen de una nueva casa, sino de un hábitat adecuado, el cual permita una convivencia entre los habitantes para el goce pleno de sus derechos individuales y colectivos. Autores como Ortiz Flores y Lungo destacan el carácter participativo de la población en la definición del hábitat, como producto de las distintas interacciones sociales. Esta concepción está en sintonía con lo apuntado anteriormente por Argüello Rodríguez. Ortiz Flores (2011) señala que: “El hábitat se piensa, desde esta perspectiva, como producto social y cultural que implica la participación activa, informada y organizada de los habitantes en su gestión y desarrollo” (Ortiz Flores (2011: 15).

Por su parte, Lungo (2004) considera que el hábitat es constituido en gran medida por las acciones de quienes residen en un territorio, ya que la actividad humana en general, ya sea productiva, en infraestructura, social, o cultural, modifica las condiciones originales del sitio. Por esta razón, el hábitat es un concepto en continuo cambio, modificado en gran medida por la acción humana.

Resulta necesario el involucramiento activo de los distintos actores de un territorio para impulsar procesos tendientes a mejorar las condiciones de vida. Estos procesos incluyen acciones de autogestión organizada para desarrollar desde obras de infraestructura (como salones comunales, parques, caminos) hasta la construcción de nuevas viviendas. Para que dichas acciones tengan un impacto positivo, precisa la participación articulada de actores sociales y el arraigo por el territorio: “Sin un ejercicio activo de la ciudadanía alrededor de los derechos y responsabilidades, es imposible construir un hábitat sostenible y saludable y que, a su vez, esta ciudadanía está fundamentada y es fortalecida por procesos de identidad local” (Lungo, 2004: 15).

En este sentido, la identidad local se ve fortalecida por medio de los actos de la población que intenta cambiar las condiciones de su hábitat: al implicarse directamente en las modificaciones del entorno, de manera organizada, se potencian los vínculos de confianza entre los individuos y grupos. De esa manera, se desarrolla, en cierto grado, el sentido de pertenencia e identidad hacia el territorio por el que lucharon por mejorar. Aunque esto tampoco excluye el surgimiento de conflictos y nuevas problemáticas entre los actores sociales, sí fortalece el empoderamiento de la población.

Al respecto, es preciso abordar los procesos planificados de producción social del hábitat y la vivienda, definidos por Ortiz como acciones sistemáticas, con la participación de una institución que oriente el proceso constructivo:

Un sistema de producción social que actúa sin fines de lucro, por iniciativa y bajo el control de una empresa social promotora, que puede ser una organización de base de pobladores (cooperativas, asociaciones, mutual, sindicato, etc.), o una organización profesional no gubernamental (algunos de los tipos de ONG, centros de asistencia técnica, institutos populares de vivienda, asociaciones civiles pro-vivienda, etc.) que produce viviendas y conjuntos habitacionales que adjudica a demandantes organizados, quienes generalmente participan activamente desde las primeras fases del proceso habitacional. (Ortiz citado en Fuprovi, 2006: 20)

Los procesos de producción social del hábitat y la vivienda (PSHV), llevados a cabo de manera exclusiva por la organización comunal o bien de forma coordinada con alguna entidad desarrolladora de vivienda, fomentan la intervención de los habitantes en un contexto territorial dado, pues se implementan acciones de autogestión y autoconstrucción, según el proceso.

Tales labores implican una fuerte organización comunal que, debido a las particularidades de los procesos, requieren fomentar la convivencia entre la comunidad, la colegialidad en la toma de decisiones y la apropiación del proceso mismo y del hábitat a desarrollar. Si un proceso de PSHV no cuenta con estos elementos entre los integrantes de la comunidad, será muy difícil que lleguen a ser procesos sostenibles o impacten de modo positivo las comunidades, aun cuando lleguen a ofrecer nuevas viviendas o a mejorar, en términos de infraestructura, el ambiente ya existente.

Se destacan las siguientes características de los procesos de PSHV:

- Actores activos y dispuestos a articularse (asociarse) con otros para ejecutar sus proyectos de manera conjunta.
- Planificación flexible, con mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados.

- Diagnósticos surgidos de las necesidades comunitarias.
- Capacitación de actores involucrados en el proceso, principalmente los pobladores.
- Decisiones tomadas de manera participativa por el conjunto de actores.
- Respeto por la diversidad social, cultural y política que caracteriza a los diferentes actores (Fuprovi, 2006).

Los dos procesos abordados en el territorio de Aserri se califican más como promovidos por organismos técnicos especializados, pues fueron impulsados desde el Estado y desarrollados por entidades privadas. Aun así, dependiendo del proceso que haya llevado la población beneficiaria, podrían darse condiciones para impulsar el empoderamiento de la gente que conforma las nuevas comunidades, aspecto en el cual busca profundizar la investigación.

Los procesos de PSHV suponen la apropiación de las personas habitantes en torno a acciones de autogestión y autoconstrucción, pero, principalmente, respecto al aspecto organizacional y la toma de decisiones. Si no se dan estos elementos en cuanto a la apropiación del proceso por parte de la población, difícilmente se alcanzará la sostenibilidad de las iniciativas.

Esta perspectiva de procesos de PSHV podría considerarse como muy minimalista o local, sin mayor trascendencia en relación con el territorio. Es decir, únicamente se orienta a acciones en beneficio de una comunidad específica o un grupo que demanda mejoras en sus condiciones de vivienda, pero no incluye al resto del territorio.

Como apunta Lungo, es preciso ir más allá de esta perspectiva y utilizar los enfoques de PSHV con el propósito de concebir instrumentos de ordenamiento territorial a partir de una visión más amplia: la elaboración de una política concertada de desarrollo territorial. Precisa crear espacios que trasciendan el ámbito estrictamente local, y que tome en cuenta a los diferentes actores presentes en el territorio. La idea defendida por el autor es encadenar los procesos de PSHV en una lógica más amplia y territorial (Lungo, 2004).

No obstante, según Arévalo y Solares (2003), existen factores estructurales que impiden la eficacia de los procesos planificados de PSHV para brindar un mayor acceso a la vivienda. Estos factores son generalizados en muchas realidades de Latinoamérica y limitan el disfrute pleno del acceso a un domicilio:

- La cuestión de la propiedad privada del suelo urbano.
- La formación de un mercado de oferta y demanda de bienes inmobiliarios no controlados por el Estado o solo formalmente controlado.
- La exclusión social producto de una oferta de suelo urbano y vivienda que marca sustanciales diferencias de calidad y privilegio entre consumidores de ingresos altos, medios y mínimos.
- La correlación entre poder económico y desarrollo urbano de zonas que concentran ese poder versus la precariedad total de aquellas que no ostentan ese privilegio.

A pesar de la articulación asequible a escala local y territorial por medio del fomento de metodologías participativas de PSHV, existe una serie de factores estructurales que complican el acceso a la vivienda digna, sobre todo de grupos sociales con recursos medios o escasos.

Debido a este panorama, la incorporación de las perspectivas ciudadanas en el diseño y ejecución de políticas públicas será indispensable para propiciar una resolución adecuada a sus necesidades básicas, como el acceso a la vivienda, que debe contemplar el acceso a la tierra para solventar la problemática de fondo (Arévalo *et al.*, 2003).

Con base en estas concepciones, la aplicación de enfoques de PSHV claramente no resuelve las problemáticas más estructurales. No obstante, cuando esos enfoques cuentan con apoyo estatal, sí posibilitan un mayor acceso a la vivienda.

En este sentido, un concepto fundamental para comprender cómo los procesos de PSHV se enlazan con una lógica territorial es el de “construcción del hábitat”. Según Múnica (2011):

La noción “construcción del hábitat” se refiere a las acciones intencionadas por grupos humanos que intervienen los territorios con intención de generar en ellos condiciones de habitabilidad específicas. Estos grupos humanos pueden estar organizados en instituciones del Estado, en entidades privadas con fines de lucro, en organizaciones sociales con fines humanitarios, entre otros; cuando esto sucede, por lo general, los resultados apuntan a resolver los intereses de esos grupos, alterando las lógicas del habitar humano de quienes habitan dichos territorios. La noción “Construcción social del hábitat” se refiere a los procesos intencionados, de configuración y creación de condiciones de habitabilidad en territorios específicos, en los que participan diferentes agentes y en donde se involucra de manera particular y privilegiada a los habitantes de ellos ya sea de manera directa, o indirecta a través de sus representantes o líderes. (Múnera, 2011: 4)

Múnera también considera que los procesos de construcción del hábitat se diferencian de acciones de intervención puntuales y se engloban en estrategias más integrales respecto a un territorio. Es decir, según ese punto de vista, para apuntar a una efectiva construcción del hábitat, resulta fundamental la articulación y participación de distintos actores comunales, sociales e institucionales para cambiar el entorno y mejorar las condiciones de vida de la población. Sin el acoplamiento de actores sociales e institucionales, no es posible hablar de una construcción socioinstitucional del hábitat.

Según Lungo (2009), un enfoque participativo es un insumo para la formulación y ejecución de políticas con una perspectiva de ordenamiento territorial, pues propicia la asistencia de la población local. Durante el desarrollo de la investigación, fue necesario determinar hasta qué punto los procesos estudiados se orientaron a dicho enfoque o, por el contrario, constituyeron soluciones pensadas en función de un interés particular y no una visión territorial-integral.

METODOLOGÍA

Esta investigación es cualitativa, se fundamenta en un método inductivo. A partir de dos estudios de caso en el cantón de Aserrí, se intenta conocer

qué implicaciones tuvieron ambos procesos de construcción del hábitat para el desarrollo territorial integral de las comunidades, desde un enfoque que contemple las particularidades de la ruralidad.

Se toma como base una metodología guiada por el contraste entre enfoques teóricos para abordar dichos procedimientos: por un lado, la producción social del hábitat, sustentada en vínculos de capital social; por otro lado, teorías estructuralistas y sistémicas que explican la inequidad social en cuanto al acceso a recursos, lo cual genera carencias en grupos sociales respecto al acceso a tierra y vivienda. Lo anterior se complementa con el enfoque de desarrollo territorial, que implica considerar variables políticas, sociales, productivas y ambientales para comprender de manera integral las dinámicas de un territorio.

Metodológicamente, se busca realizar una comparación entre los proyectos de La Rosalía III y El Huaso, con el fin de establecer semejanzas y diferencias entre ambos y determinar o descartar cierta integralidad en su desarrollo con respecto al territorio en cuestión. Se planteó la realización de dos estudios de caso para abordar cada una de las iniciativas habitacionales. El método del estudio de caso es preferido cuando la persona investigadora tiene poco control sobre los eventos, y cuando el enfoque de la investigación se centra en fenómenos contemporáneos dentro de un contexto de la vida real (Yin, 1994). De acuerdo con Yin (2003): “El estudio de caso es el método a seleccionar cuando el fenómeno bajo estudio no es fácilmente distinguible de su contexto. Tal fenómeno puede ser un proyecto o un programa en un estudio de evaluación” (Yin, 2003: 4).

Según la definición de Yin, el método de estudios de caso es uno de los más útiles para este estudio, pues favorece un acercamiento a cada proceso de desarrollo habitacional en el marco de su respectivo contexto. El método del estudio de caso permite que las investigaciones tomen en cuenta las características holísticas y significativas de los eventos de la vida real (Yin, 1994). Así, da cuenta de los proyectos habitacionales en sus dimensiones territoriales, socioeconómicas y políticas. No es posible alcanzar generalizaciones sobre un universo o población, sino que simplemente constituye el estudio de casos particulares con implicaciones sobre propuestas teóricas (Yin, 1994).

En este sentido, debe recordarse que el estudio de caso no se trata de una simple recolección de información, sino de una amplia estrategia investigativa, entre cuyas características destaca “la explicación de vínculos causales en intervenciones de la vida real que son muy complejas para las encuestas o para estrategias experimentales” (Yin, 1994: 15).

Como explica Sierra Bravo (1994), la finalidad de la observación directa “es percatarse lo más profundamente posible del paisaje y ambiente natural, económico, social y humano, a los que se va a referir el estudio, así como las condiciones genéricas que caracterizan a todo universo a estudiar de cualquier tipo que sea” (Sierra Bravo, 1994: 256). La unidad de observación en este caso se trata de las comunidades en donde los proyectos fueron ejecutados. La ventaja metodológica de esta técnica consiste en conocer de primera mano los contextos estudiados, aunque con la desventaja de contar con cierto sesgo de la persona investigadora para interpretar lo observado.

Con respecto a la entrevista a profundidad, cuenta como ventaja metodológica su gran flexibilidad para recabar información a partir de actores clave. Sin embargo, los datos obtenidos por medio de esta técnica no admite generalizaciones, sino que están sujetos a contrastarse con otras fuentes. El universo a considerar para aplicar entrevistas semiestructuradas lo constituyen las familias beneficiarias de los proyectos habitacionales de La Rosalía III y El Huaso, así como líderes comunales de ambos lugares, para conocer sus percepciones sobre los efectos del desarrollo de estos proyectos en sus comunidades.

Para orientar los estudios de caso de ambos proyectos, se identificó una serie de dimensiones de análisis, fundamentadas a su vez en variables cualitativas con respecto al entorno de las dos comunidades y las percepciones sociales de las familias beneficiarias en su nuevo contexto. Estas variables son incorporadas en el formulario de entrevista semiestructurada para aplicarse a las familias. Las variables cualitativas referidas son las siguientes:

Dimensión de análisis: condiciones del entorno

Variables cualitativas

- Acceso a servicios básicos: agua, luz, transporte, internet, salud, educación.

- Acceso a fuentes de empleo sostenibles.
- Tipo de infraestructura de acceso y salida de la comunidad.
- Espacios públicos disponibles.
- Problemáticas sociales identificadas.

Dimensión de análisis: percepciones sociales de las familias beneficiarias sobre la nueva comunidad.

Variables cualitativas

- Expectativas de la población reubicada con respecto a la nueva comunidad.
- Adaptación de la población al entorno.
- Recepción brindada por la población originaria a las familias reubicadas.
- Prospectivas de la nueva comunidad.

Las variables con respecto al entorno son también incluidas en las entrevistas semiestructuradas efectuadas a líderes comunales de El Huaso y La Rosalía, con el propósito de conocer distintas perspectivas al respecto. También, como otra dimensión de análisis, debe abordarse cómo han sido percibidos los desarrollos habitacionales por la población autóctona y qué efectos han presentado.

Al respecto, se identifican las siguientes variables:

Dimensión de análisis: percepciones sociales de la población autóctona sobre el desarrollo de los proyectos habitacionales estudiados

Variables cualitativas

- Relaciones intervecinales entre la población autóctona y las personas que viven en los proyectos habitacionales.
- Efectos sociales en la comunidad del desarrollo de los proyectos habitacionales.

Resulta crucial entender que las tres dimensiones de análisis no son independientes entre sí, sino que son interdependientes. Para comprender

efectivamente las implicaciones del desarrollo de los proyectos habitacionales en ambas comunidades y en la totalidad del territorio en el que se enmarca el cantón de Aserrí, es necesario considerar cómo las tres dimensiones se interrelacionan, con el fin de realizar un análisis integral y completar una visión sistémica de las implicaciones para el territorio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Contextualización territorial del cantón de Aserrí: la región Caraigres

El cantón de Aserrí constituye una zona montañosa y de topografía quebrada al sur de San José, muy cercana a la GAM. La zona se caracteriza por los rasgos comunes entre sus poblaciones, como el mantenimiento de tradiciones populares, la actividad cafetalera, un desarrollo territorial con pocos centros urbanos de consideración y pequeños poblados, una belleza paisajística montañosa, entre otros aspectos. Junto con el cantón de Acosta y los distritos rurales de Desamparados (Rosario, Frailes y San Cristóbal), la región de Caraigres constituye, quizás, la realidad rural más próxima a la ciudad de San José. En el cuadro 1 se expone un análisis sistémico multidimensional de la región Caraigres:

CUADRO 1. Análisis sistémico de la región Caraigres

| Dimensiones | Región Caraigres |
|---------------------------|--|
| Socioeconómico-productivo | <p>La mayoría de la población de la región descende de núcleos familiares que poblaron la región durante el siglo XIX. Asimismo, ha recibido, en menor escala, personas provenientes de la GAM, que adquieren propiedades de recreo o que se ubican en los centros urbanos donde hay alquileres baratos, así como migración nicaragüense en los centros urbanos o que trabaja en las colectas de café en la zona más rural.</p> <p>Muchas generaciones de la región han migrado hacia la GAM en busca de fuentes de empleo mejor remuneradas, aunque también persiste población joven que mantiene arraigo social y familiar y prefiere viajar todos los días hasta la GAM y trasladarse de vuelta en la noche a sus hogares.</p> <p>El cultivo del café constituye la actividad agrícola más importante, y varía entre esquemas del minifundio y el latifundio. Aunado a esto, hay producción en pequeña escala de cítricos, jocotes, frijoles, ganadería y apicultura.</p> <p>En la región, se organizan ferias en torno a productos propios, con proyección nacional: la feria nacional del Jocote, en La Uruca de Aserri; la feria del café en Frailes de Desamparados; y la feria del tamal en Aserri, que no volvió a celebrarse debido a diferencias entre el sector productivo local.</p> <p>Otras fuentes de empleo del sector son los servicios en hoteles y restaurantes, pero son pocos.</p> <p>Hay iniciativas de turismo rural con poco nivel de articulación.</p> <p>La mayoría de la población se traslada diariamente a trabajar en industrias o servicios en la GAM.</p> |

| Dimensiones | Región Caraigres |
|--------------------|--|
| Ambiental | <p>La región Caraigres conforma un corredor biológico como parte de la Región Central del país. Recibe influencias climatológicas y de ecosistemas de la Región Pacífico Central. Presenta climas propios de las regiones montañosas, ya que conforma la fila de Bustamante como parte de la cordillera de Talamanca.</p> <p>Hay problemas por la tala de árboles indiscriminada, contaminación de las nacientes y captaciones de agua.</p> <p>En el caso del cantón de Aserri, no existe un plan regulador. En los otros dos cantones, no hay mucho control urbanístico; por lo tanto, se ha dado un crecimiento urbano y constructivo desordenado que se ha extendido a las zonas rurales.</p> |

| Dimensiones | Región Caraigres |
|------------------------|---|
| | <p>Existe presencia de la institucionalidad pública, principalmente por medio de escuelas, colegios y Ebáis, relativamente cercanos a cada comunidad, aunque con dificultades de acceso. Con respecto a los servicios de salud, no están disponibles a diario en las comunidades más rurales, sino ciertas veces al mes.</p> <p>Las instituciones del Gobierno central, como Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Universidad Estatal a Distancia (UNED), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud, Fuerza Pública y la banca estatal, tienen sedes en los principales centros poblacionales del territorio (Aserri, San Ignacio de Acosta). La población debe trasladarse a estos centros para acceder a los respectivos servicios.</p> <p>Las instituciones del Gobierno central tienen limitantes para cubrir todo el territorio de manera eficiente.</p> <p>En términos generales, la institucionalidad de los gobiernos locales es débil y realiza una gestión limitada.</p> <p>En vista de las dificultades de acceso por la topografía del territorio y las distancias entre cada centro poblacional, así como de la deficiente gestión pública, gran parte del desarrollo local ha sido impulsado por medio de las asociaciones de desarrollo y la gestión comunal de los vecinos.</p> <p>La región ha tenido una tradición política partidaria liberacionista, con presencia socialcristiana en algunas zonas, la cual, en las últimas décadas, se ha debilitado en favor de otras fuerzas políticas como el PAC. En términos generales, los partidos políticos no tienen una buena imagen entre la población.</p> <p>Un espacio reciente de coordinación interinstitucional es el Consejo de Desarrollo Rural Territorial, el cual agrupa a las tres alcaldías de Aserri, Acosta y Desamparados y a instituciones del Gobierno central. Recientemente, dicho espacio organizó el primer festival cultural de la Región Caraigres, con actividades culturales en tres sedes comerciales de la zona.</p> |
| Político-institucional | |

| Dimensiones | Región Caraigres |
|-------------|---|
| Cultural | <p>La región tiene rasgos identitarios comunes, e incluso vínculos sociales y familiares entre varias comunidades; sin embargo, no hay una sola identidad cultural de la región Caraigres. Algunos rasgos culturales comunes se basan en la religiosidad católica popular, como las fiestas patronales o los rezos familiares. Persisten las tradiciones como las mascaradas, los topes y la tradicional “bendición de San Isidro”, en que las personas llevan a bendecir sus productos agrícolas, caballos, ganado y vehículos en el día del patrón de los agricultores. También, existe una tradición gastronómica en torno a productos derivados de la carne de cerdo o de res; productos agrícolas a partir de los cuales se elaboran picadillos típicos, como el arracache; y derivados del maíz, como los tamales o la repostería casera.</p> |

Fuente: elaboración propia con base en datos de Hidalgo Cortés, P. y Meza Solano, A. (2015).

Procesos socioinstitucionales de construcción del hábitat y sus implicaciones para el desarrollo rural territorial

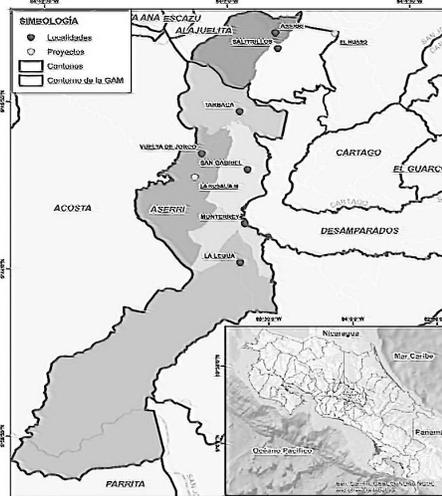
Los desarrollos habitacionales en las comunidades de El Huaso, sector del distrito de Salitrillos, y en La Rosalía, en el distrito de Vuelta de Jorco, ambos en el cantón de Aserrí, se realizaron en el marco del proceso de reubicación de familias que habitaban el asentamiento Triángulo de la Solidaridad, ubicado entre los cantones de Goicoechea y Tibás en la GAM. La erradicación de este asentamiento se ha vuelto una prioridad de las autoridades de Gobierno desde hace más de ocho años, pues, en el terreno donde se asienta, se construyó un paso a desnivel del tramo de la circunvalación norte, pendiente desde 1975 (Chinchilla y Jiménez, 2017).

Para reubicar a todas las familias que ocupan las principales franjas del asentamiento por donde se desarrolla la obra, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) ha implementado una política de reubicación en distintas partes del país, sin considerar el arraigo de las familias, debido a la dificultad de encontrar un único terreno para un solo proyecto habitacional. Según declaraciones otorgadas a la prensa por el ministro de Vivienda de la administración Solís Rivera (2014-2018), Rosendo Pujol: “La filosofía es no concentrar gente, todo es concertado. Tuvimos que hacer desarraigo (de la zona) porque no encontramos nada cerca” (Pujol, 2016, citado en Vizcaíno, 2016: s. p.).

Por estas razones, se optó por reubicar a las familias en distintas zonas del país, donde pudiera encontrarse disponibilidad en distintos desarrollos habitacionales. Dos de estos desarrollos fueron los proyectos habitacionales La Rosalía III y El Huaso, en el cantón de Aserrí, con particularidades palpables entre cada uno. A continuación, se presenta un mapa con la ubicación de los dos proyectos en el cantón:

MAPA 1. Ubicación de los proyectos habitacionales El Huaso y La Rosalía III en el cantón de Aserri

Mapa ubicación de los proyectos en el Cantón Aserri



Mapa detalle de ubicación de los proyectos



Fuente: elaboración propia.

Como puede apreciarse en el mapa anterior, el proyecto habitacional de El Huaso colinda con el relleno sanitario de la empresa Berthier EBI, con todas las dificultades sanitarias que eso implica para un área residencial. Por su parte, el proyecto habitacional La Rosalía III se ubica bastante distante de otros centros poblacionales, lo cual dificulta el traslado y acceso a servicios de las personas que viven ahí.

Lo expuesto indica que no hubo una política que considerara aspectos integrales a la hora de ubicar los terrenos aptos para desarrollar los proyectos habitacionales y trasladar a la población del Triángulo de la Solidaridad, sino que simplemente se construyeron donde existiera la posibilidad, independientemente de las consecuencias, tanto para la población reubicada como para el territorio y su población autóctona.

Esta intervención estatal es sectorial, es decir, pensada exclusivamente desde una perspectiva “viviendista”. Solo estaba orientada a la construcción de viviendas para las familias reubicadas y no a una articulación de acuerdo con la realidad del territorio, que tomara en cuenta a la población autóctona, el acceso a servicios públicos con énfasis en el recurso hídrico, la generación de fuentes de empleo o la mejora de las vías de comunicación. No hay coordinación entre el Mivah y los demás actores del sector vivienda con actores locales, ni con otras entidades del Gobierno central ni del gobierno local para un abordaje integral de la zona

Un ejemplo de la falta de acoplamiento interinstitucional para un trato integral de las problemáticas del territorio lo constituye la gestión del recurso hídrico. Se trata de un tema particularmente sensible en el cantón de Aserri: la mayoría de las comunidades de los distritos de Aserri centro y Salitrillos son abastecidas por el acueducto municipal, el cual, desde hace décadas, presenta serios problemas debido a sus sistemas de tuberías antiguas, tomas de agua artesanales y una planta de tratamiento que no tiene cobertura para todo el acueducto. Esto ha generado obstáculos significativos en el abastecimiento del agua potable, y no ha habido soluciones integrales en el paso de una administración municipal a otra.

Una política sectorial y excluyente de las particularidades del territorio se impone sin importar las realidades de los contextos rurales ni las características sociales tanto de la población reubicada como de la autóctona. De acuerdo con lo manifestado por las personas entrevistadas, así como la observación del entorno en cada uno de los casos, el único criterio principal de la política de reubicación fue encontrar terrenos para construir, independientemente de sus condiciones. El fin primordial radicó en reubicar a las familias del Triángulo de la Solidaridad lo antes posible. En este sentido, puede afirmarse que las acciones articuladas por el Mivah para con las familias de este asentamiento en precario no se basaron en una política integral de vivienda, sino que fueron motivadas por una política de reubicación, sin considerar las dinámicas del territorio al cual fueron enviadas.

Al analizar los procesos de ambos proyectos habitacionales, se constata que no hubo ninguna participación efectiva en la toma de decisiones ni de las familias

beneficiarias, ni mucho menos de la población local a la hora de formular y ejecutar la política de reubicación o de elaborar ambos proyectos. En el caso del proyecto habitacional en El Huaso, el desarrollador sí brindó un proceso de asesoría y capacitación para fortalecer la organización comunal de las familias beneficiarias, en concordancia con los procesos en los que interviene. Esto fortaleció a un grupo de las familias beneficiarias en cuanto a mantener vínculos organizativos entre sí.

Sin embargo, en ambos procesos, no hubo una presencia protagónica de las familias con respecto a los lugares que habitarían o en el diseño de las viviendas y el propio hábitat. Lo anterior responde a las limitaciones del SFNV, que parte de directrices preestablecidas en cuanto al diseño constructivo. Las mismas familias beneficiarias son las que han encausado procesos individuales para mejorar sus viviendas y su hábitat, y han emprendido obras de infraestructura internas y externas. Mucho menos se tomó en cuenta, en ninguno de los dos procesos, a la población autóctona en cuanto a brindar información sobre los desarrollos constructivos, a excepción de aquellos casos de la zona de El Huaso que sí fueron incorporados como familias beneficiarias.

La falta de comunicación a la población local se debe a que el Mivah manejó la reubicación de las familias del Triángulo de la Solidaridad con gran secretismo, debido a posibles prejuicios que podrían existir entre los vecinos locales ante familias nicaragüenses provenientes de dicho asentamiento. Este tipo de proceder se aleja de los fines del desarrollo rural territorial, los cuales más bien buscaría la acción concertada e informada entre las distintas instituciones que invierten en el territorio.

CUADRO 2. Implicaciones del desarrollo de los proyectos habitacionales El Huaso y La Rosalía III para el desarrollo integral del territorio del cantón de Aserri

| Dimensión | El Huaso | La Rosalía III |
|------------------------|--|---|
| Socioeconómica | <p>Población reubicada al territorio y cierto recargo en el acceso a servicios de salud y educación.</p> <p>Al mismo tiempo, la nueva población, calificada por los vecinos como gente trabajadora, contribuye con sus impuestos e ingresos a dinamizar en pequeña escala la economía local.</p> <p>Mejoras del entorno urbanístico y social con el desarrollo del proyecto.</p> | <p>Población reubicada al territorio y cierto recargo en el acceso a servicios de salud y agua potable.</p> <p>Al mismo tiempo, la nueva población, calificada por los vecinos como gente trabajadora, contribuye con sus impuestos e ingresos a dinamizar en pequeña escala la economía local.</p> |
| Ambiental | <p>Se acrecienta una problemática socioambiental, al trasladar nueva población a las cercanías de un relleno sanitario. Esto expone a las familias a sufrir los efectos de malos olores y líquidos lixiviados.</p> | <p>Genera un conflicto socioambiental por el acceso al agua potable: la Asada local considera que no existen las condiciones para brindar el servicio ni abastecer a más familias.</p> |
| Político-institucional | <p>Ausencia de una política integral que articule el nuevo proyecto institucional con el desarrollo del territorio.</p> <p>Nuevas demandas sociales de la población reubicada que debe atender el gobierno local con una institucionalidad débil e ineficiente.</p> | <p>Ausencia de una política integral que articule el nuevo proyecto institucional con el desarrollo del territorio.</p> <p>Nuevas demandas sociales de la población reubicada que debe atender el gobierno local con una institucionalidad débil e ineficiente.</p> |
| Cultural | <p>Buena adaptación sociocultural al entorno y aporte a la cultura nicaragüense, como la fiesta de La Purísima, celebrada en diciembre.</p> | <p>Difficil adaptación sociocultural al entorno.</p> <p>Pocos vínculos con las demás comunidades.</p> <p>Los niños sufrieron <i>bullying</i> escolar durante los primeros meses de habitar el territorio, debido a su origen nicaragüense.</p> |

Fuente: elaboración propia.

A partir de los resultados sistematizados en el cuadro anterior, los proyectos habitacionales no respondieron a visiones integrales orientadas a articular el territorio en el que se enmarca el cantón de Aserrí, sino que respondió a un interés nacional por reubicar a las familias del Triángulo de la Solidaridad, pero sin tomar en cuenta el contexto territorial.

En el caso particular del proyecto habitacional en El Huaso, el desarrollo constructivo mejoró parte del entorno social y urbanístico de la comunidad, pues antes había un lote baldío que atraía a la delincuencia local. El proyecto sí constituyó una mejora comunal significativa, así como en términos sociales, pues las familias reubicadas son vistas como gente trabajadora.

Sin embargo, el traslado de la población implicó un recargo en la atención de los servicios básicos de salud y educación, lo cual no fue tomado en cuenta en la reubicación de las familias. En el caso particular de La Rosalía III, ha habido un conflicto por el acceso al agua potable: la organización comunal no considera que existan ni las condiciones ni la capacidad hídrica para atender a nuevas familias. Por este motivo, la población reubicada ha experimentado dificultades en la gestión de algo tan básico como el recurso hídrico.

Por su parte, en El Huaso se acrecentó la problemática ambiental ya existente: con el desarrollo del proyecto habitacional, aumentó el número de personas afectadas por el impacto ambiental del relleno sanitario administrado por la empresa Berthier EBI. Ahora más habitantes deben sufrir riesgos potenciales a la salud por malos olores y lixiviados.

En términos de adaptabilidad social al entorno, las familias beneficiarias de El Huaso han logrado adaptarse de mejor manera que las de La Rosalía III, en parte por tratarse de un contexto más urbano y cercano a las fuentes de trabajo. Esto también les ha permitido practicar sus tradiciones culturales sin problemas. Por ejemplo, la fiesta de La Purísima, propia del folclore nicaragüense, es celebrada en el proyecto y son invitados otros vecinos. En contraste, las familias trasladadas a un contexto más rural sí han experimentado cierto rechazo cultural y comunal. En general, no se ha dado una integración por parte de las personas que habitan ninguno de los dos proyectos a las organizaciones comunales existentes, lo cual ha suscitado interés en desarrollar grupos comunales propios.

Es posible afirmar que el desarrollo de ambos proyectos no correspondió a una visión de desarrollo integral del territorio, sino que más bien acrecentó problemáticas existentes en la zona o causó nuevas (dificultad en el acceso del agua, en el caso de La Rosalía III). Si bien con la construcción de los proyectos mejoró el entorno urbano (El Huaso) y social (ambos casos) —pues las familias beneficiarias son vistas como gente trabajadora (además de que aportan a las dinámicas socioeconómicas locales) —, también se han generado problemáticas tanto para las familias reubicadas como para el territorio, lo cual no fue contemplado en la política de reubicación.

El territorio adolece de una problemática generalizada de acceso a la vivienda digna y la población local fue tomada en cuenta en muy poca medida en el desarrollo de estos proyectos. Tal coyuntura no contribuye a la integración social en las comunidades. En este contexto, la institucionalidad pública, tanto local como nacional, no parece tener la visión para atender los nuevos retos originados en el territorio por los desarrollos habitacionales y reubicaciones de personas que el mismo Estado implementó. El traslado de estas familias ha suscitado nuevas dinámicas sociales, económicas, culturales e incluso ambientales, las cuales impactan al territorio en el marco de los conflictos ya existentes, sin que se planteen desde el Estado soluciones construidas de manera integral con la población.

La puesta en marcha de los dos proyectos habitacionales estudiados se limitó a una política de traslado de personas y desarrollos habitacionales, sin ningún enfoque integral con respecto al contexto del territorio, con lo cual constituye una contradicción al enfoque del desarrollo rural territorial. No fueron intervenciones ni integrales, ni participativas, ni inclusivas. Por el contrario, fueron impuestas al territorio y a quienes lo habitan, sin que se escuchara a los actores locales ni se tomaran en cuenta los efectos sociales, ni sobre el contexto ni sobre la población reubicada.

La reubicación de las familias en el territorio no representa una intervención integral, en tanto no se previeron los efectos sociales para la zona, ni sus características sociales, culturales, ambientales y económicas. El traslado ha implicado que más personas requieran acceso a educación, salud, agua y luz, sin considerar las condiciones del contexto para facilitar estos servicios

básicos adecuadamente. Así, por ejemplo, en ambas comunidades, los beneficiarios comentan una saturación de los servicios de salud. En La Rosalía III, las familias han enfrentado incertidumbre por la administración del recurso hídrico, ya que la Asada local consideró que el desarrollador incumplió con las condiciones básicas para ofrecer el servicio. A esto se suma una débil institucionalidad pública en el territorio, con dificultades para atender las demandas vecinales.

La reubicación y el desarrollo de estos proyectos de vivienda tampoco pueden catalogarse como participativos o inclusivos. Por el contrario, para el traslado, el Estado actuó en la clandestinidad y el sigilo con respecto a la información general de los proyectos. Tampoco se puede hablar de una construcción social del hábitat. Tanto Lungo (2004) como Ortiz Flores (2011) reconocen la importancia de la participación efectiva de los actores sociales para constituir un hábitat. En estos casos, no hubo participación efectiva de ningún actor social, solo modificaciones del entorno por parte de los desarrolladores con financiamiento estatal para reubicar núcleos familiares en otro territorio. No es posible hablar de un hábitat construido socialmente, sino de desarrollos habitacionales impuestos a la población, aunque se orienten a solventar una problemática de vivienda.

La puesta en marcha de ambos proyectos habitacionales, al carecer de la voz de la población y autoridades locales, tampoco responde a una lógica de ordenamiento territorial. Si bien el cantón de Aserri carece de un plan regulador que ordene los desarrollos urbanísticos en su territorio, aquellos procesos realizados sin ninguna intervención de actores locales no aportan a un ordenamiento consensuado del territorio, sino al fomento de conflictos. En este sentido, vale mencionar, de nuevo, que ambos proyectos empeoraron los conflictos ambientales ya existentes: las afectaciones a la salud por el relleno sanitario de la empresa Berthier EBI y la gestión del recurso hídrico en la zona rural.

Es posible afirmar que la política de reubicación es estrictamente sectorial limitada únicamente a la construcción de viviendas, sin articulación con las dinámicas del territorio, sin participación efectiva en la toma de decisiones ni de los beneficiarios ni de la población autóctona, y, en definitiva, contradictoria al enfoque de desarrollo rural territorial.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La hipótesis de esta investigación se comprueba en su totalidad: “El desarrollo de los dos proyectos habitacionales estudiados en el cantón de Aserri implicó mejoras de vida para la población beneficiaria, pero no se han formulado desde una visión política-institucional de desarrollo integral del territorio ni en función de instrumentos de ordenamiento territorial que desemboquen en decisiones estratégicas a nivel territorial en el largo plazo”.

Si bien las personas beneficiarias manifestaron una mejora en sus condiciones de vida al habitar en los proyectos habitacionales e indicaron sentirse felices en sus viviendas propias, claramente el desarrollo de estos proyectos no respondió a una visión integral que articulara el desarrollo del territorio, ni que contemplara características del contexto ni aspectos de ordenamiento territorial.

El desarrollo de ambos proyectos habitacionales ni siquiera correspondió a una política integral de vivienda, sino a una política de reubicación de familias del asentamiento Triángulo de la Solidaridad, iniciativa financiada por el SFNV. No se atendieron aspectos básicos del contexto, como el suministro del servicio de agua potable o el estado de las vías de comunicación.

Tampoco se reparó en ningún criterio con respecto al contexto: acceso a servicios básicos, estado de las vías de comunicación, existencia de fuentes de empleo, adaptabilidad social de la población reubicada, recepción por parte de la población autóctona. Primó una lógica y actuación sectorial, en lugar de una lógica intersectorial concertada, tal y como lo promueve el enfoque territorial del desarrollo.

En el territorio, estos desarrollos urbanísticos aumentaron problemáticas socioambientales, o bien generaron nuevos inconvenientes: en el caso de El Huaso, más población debe afrontar los efectos de convivir con un relleno sanitario colindante a los terrenos de sus viviendas; en La Rosalía III, hubo un conflicto por el acceso al agua potable, en un área poco poblada, pero con riesgo ambiental debido a la capacidad de las nacientes de agua.

Las personas trasladadas han experimentado la saturación en el acceso de servicios públicos, principalmente de la salud, así como problemáticas

estructurales del territorio: lejanía para acceder a fuentes de empleo, vías de comunicación en mal estado, mal servicio de transporte público —en el caso de La Rosalía III— y una institucionalidad pública en general deficiente para atender demandas sociales.

Las familias reubicadas en El Huaso tuvieron una mejor adaptación al entorno que las de La Rosalía III. Si bien esto se debe a un mejor acceso a servicios públicos y cercanía a fuentes de empleo en la primera comunidad con respecto a la segunda, también se debe destacar que las familias de El Huaso recibieron un proceso de capacitación y asesoría técnica desarrollado con el fin de fomentar la integración social y fortalecer la organización comunal. Este proceso les permitió a las familias crear espacios para compartir entre sí y estrechar sus lazos vecinales, y las preparó para adaptarse mejor al entorno e incluso para mantener sus expresiones culturales, como, por ejemplo, la celebración de La Purísima.

En La Rosalía III, no hubo ningún indicio de acompañamiento social, por lo cual las familias no contaron con espacios previos para fortalecer sus lazos vecinales. No hubo una iniciativa que favoreciera la adaptación al nuevo sitio. Además, los nuevos vecinos experimentaron más prejuicios discriminatorios por su nacionalidad en la zona rural. Una intervención estatal adecuada incluye formular y ejecutar políticas públicas que aborden de manera integral las dinámicas territoriales, en sus dimensiones sociales, económicas, ambientales, culturales y político-institucionales, con participación efectiva de la población local. En los procesos por medio de los cuales se construyeron los dos proyectos habitacionales estudiados, no se dio una construcción socioinstitucional del hábitat. Para que ocurra desde los actores sociales, locales e instituciones presentes en el territorio, es fundamental una participación efectiva y coordinación en la toma de decisiones por parte de ellos, según lo afirma Múnera (2011).

A partir de esta investigación, se sugieren recomendaciones para distintos actores involucrados en los procesos estudiados. El Mivah, como ente rector del Gobierno central en el ámbito de la vivienda, debe articular una política territorial de manera integral, que contemple las particularidades de cada región en la cual se desarrollen proyectos habitacionales, que coordine con

los actores locales y favorezca la toma de decisiones efectiva de estos y de la población beneficiaria. Una política territorial de vivienda trasciende acciones de simple reubicación y ofrece más opciones para implementar procesos sostenibles articulados con actores del territorio para atender sus problemáticas. La participación inclusiva de actores sociales y de la población beneficiaria por medio de una política de vivienda territorial motiva una construcción social del hábitat: los actores tomarán decisiones con respecto a cambios en su entorno y propondrán acciones desde su perspectiva.

Para formular una política territorial de vivienda, se deben incluir elementos como alianza con la población autóctona y los actores locales, procesos efectivos e incluyentes de toma de decisiones de la población beneficiaria y los actores locales, coordinación interinstitucional orientada al ordenamiento territorial, protección ambiental y prestación eficiente de servicios públicos, una visión integral del territorio a partir de sus dinámicas y perspectivas de la población. Una política orientada en este sentido favorece la puesta en marcha de procesos sostenibles de construcción social del hábitat con la implicación real de la población. Es recomendable también la constitución de una política municipal de vivienda, construida de manera participativa con la población y desde una visión integral del territorio, la cual contemple los elementos descritos anteriormente.

Una visión participativa e inclusiva con enfoque territorial, tanto desde la población organizada como de las instituciones locales y nacionales, hará posible la implementación de procesos sostenibles de construcción socioinstitucional del hábitat para mejoras en las condiciones de vida de grupos sociales vulnerables.

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, L. E. 1999. “Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa”. En *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales*, eds. Delgado, J.M, y Gutiérrez, J., 225-240. Madrid: Editorial Síntesis, S.A.
- Arévalo, M., Landaeta, G. y Solares, H. 2003. *Suelo urbano y vivienda popular en América Latina*. San José: Centro Cooperativo Sueco.
- Argüello Rodríguez, M. 1981. *Los más pobres en lucha*. Heredia: Editorial de la Universidad Nacional.
- Asamblea Legislativa. 1986. *Ley número del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) y creación del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi)*.
- Bebbington, A. 2005. “Estrategias de vida y estrategias de intervención: el capital social y los programas de superación de la pobreza”. En *Aprender de la experiencia. El capital social en la superación de la pobreza*, ed. Arraigada, I. Chile: Naciones Unidas.
- Castells, M. 1974. *Movimientos sociales urbanos*. Madrid: Siglo Veintiuno Editores.
- Cordero Ulate, A. 2014. “Paisajes y relatos de vida. Apuntes para la interpretación de los paisajes socioculturales con mención a Puntarenas y Limón (centro) en Costa Rica”. *Teoría y Praxis* 10: 9-31.
- Easton, D. 1965. *A framework for political analyse*. Chicago: Universidad de Chicago.
- Fundación Promotora de Vivienda. 2006. *Criterios sociales aplicados por Fuprovi en la producción social del hábitat y la vivienda*. San José: Fundación Promotora de Vivienda.
- Fundación Promotora de Vivienda. 2018. *Informe Nacional: situación de la vivienda y desarrollo urbano en Costa Rica, 2017*. San José: Fundación Promotora de Vivienda.

- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. 1991. *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- Hidalgo, P. y Meza, A. 2015. *Diagnóstico e inventario de conflictos del territorio Aserri, Acosta y Desamparados. Informe final*. Documento elaborado en el marco de la primera promoción de la maestría en Desarrollo Rural Territorial de Flacso Costa Rica para el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Hilje, B. y Torres, M. 1997. “El proyecto hidroeléctrico de Arenal y el impacto en su entorno económico y social (1950-1994)”. *Revista de Historia de la Universidad Nacional* 36: 107-146. <http://revistahistoria.historia.ucr.ac.cr/Numeros%20Anteriores/Vol.%2036/Art.%204%20Vol.%2036.pdf>
- Lefebvre, H. 1974. La producción del espacio. *Papers: Revista de Sociología* 3: 219-229.
- Lungo, M. 2004. *Producción del hábitat popular en condiciones de riesgo*. Centro Cooperativo Sueco.
- Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán). 2013. Índice de Desarrollo Social 2013. <https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ab677d6c-fafd-4128-86df-a6aa04ab70ef/IDS%202013%20resumen.pdf?guest=true>
- Mora Cordero, M. 2006. “Capital social y participación ciudadana”. Tesis de Maestría en Administración y Derecho Municipal, Universidad de Costa Rica.
- Múnera, M. C. 2011. “Construcción social del hábitat más allá de una política de producción de vivienda”. En *Trabajo y políticas de vivienda en América del Sur*, eds. Flacso y Fundación Carolina. <https://construccionsocialdelhabitat.files.wordpress.com/2011/04/construccic3b3n-social-del-hc3a1bitat.pdf>
- Noguera, M. R. 2013. Nueva Cinchona: Plan de Reasentamiento post terremoto, Costa Rica. *Revista Planeo* 10. <http://revistaplano.uc.cl/2013/05/01/nueva-cinchona-plan-de-reasentamiento-post-terremoto-costa-rica/>
- Ortiz Flores, E. et al. 2011. *El camino posible. Producción social del hábitat en América Latina*. Costa Rica y Uruguay: Centro cooperativo sueco y Ediciones Trilce.

- Pizzorno, A. 2003. "Por qué pagamos la nafta. Por una teoría del capital social". En *El capital social. Instrucciones de uso*, ed. Bagnasco, A. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Rodríguez, M. C., Di Virgilio, M. M. 2007. *Producción social del hábitat y políticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires: historia con desencuentros*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani. <http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/dt49.pdf>
- Sierra Bravo, R. 1994. *Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios*. España: Editorial Paraninfo S.A.
- Schneider, S. y Peyré Tartaruga, I. G. 2006. "Territorio y enfoque territorial: de las referencias cognitivas a los aportes aplicados al análisis de los procesos sociales rurales". En *Desarrollo rural. Organizaciones, instituciones y territorio*, coord. Manzanal, M., Neiman, G. y Lattuada, M. España. <http://www.ufrgs.br/pgdr/arquivos/462.pdf>
- Strauss, A. y Corbin, J. 1998. *Basics of qualitative research*. Estados Unidos: Sage Publications, Inc.
- Tilly, C. 1998. "Conflicto político y cambio social". En *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*, eds. Ibarra Güell, P y Tejerina Montaña, B., 25-41. Madrid: Trotta.
- Yin, R. K. 1994. *Case study research. Design and methods*. Estados Unidos: Sage Publications, Inc.
- Yin, R. K. 2003. *Applications of case study research*. Estados Unidos: Sage Publications, Inc.

Notas de prensa

- AmeliaRueda.com. 2015, 15 de junio. "Vecinos denuncian que botadero de basura en Aserri incumple orden sanitaria". *AmeliaRueda.com*. <https://www.ameliarueda.com/nota/vecinos-protestan-incumplimiento-de-orden-sanitaria-de-botadero-aserri>
- Chinchilla, S. y Jiménez, E. 2017, 13 de marzo. "Gobierno despeja otro sector del precario Triángulo de Solidaridad para realizar estudios de suelos". *La*

Nación. <https://www.nacion.com/el-pais/servicios/gobierno-despeja-otro-sector-del-precario-triangulo-de-solidaridad-para-realizar-estudios-de-suelos/CKLNY766PVDIPACCCYKHN5SOA/story/> visitada en mayo de 2018.

La Nación. 2010, 22 de junio. “Vecinos protestan contra relleno sanitario en Aserri”. *La Nación*. <https://www.nacion.com/el-pais/servicios/vecinos-protestan-contrarelleno-sanitario-en-aserri/LV6A6F4IARESDC73JZROJWU2GA/story>

Repretel. 2017, 3 de agosto. “Vecinos de San Miguel bloquearon el paso en protesta por malos olores que se producen en el relleno sanitario”. *Repretel*. <http://www.repretel.com/actualidad/vecinos-de-san-miguel-bloquearon-el-paso-en-protesta-por-malos-olores-que-se-producen-en-el-relleno-sanitario-85583>

Vizcaíno, I. 2016, 16 de julio. “Sube costo de reubicar a familias de precario”. *La Nación*. <https://www.nacion.com/el-pais/vivienda/sube-costo-de-reubicar-a-familias-de-precario/CXBR66AJMNACVK7KGPAMXMFTA4/story/>

En la situación actual de las ciencias sociales,
se atraviesa un período de crecimiento
acompañado por la confusión teórica. Pero también
por la búsqueda que siempre ha sido
una preocupación permanente
para distinguir lo aparente de lo esencial
y llegar a la raíz explicativa de los fenómenos.

Los Cuadernos de Ciencias Sociales constituyen
una contribución a esa búsqueda, que es responsabilidad
intelectual que atañe a todos pero esencialmente
a las nuevas generaciones.

A ellas está destinada esta publicación.



FLACSO
COSTA RICA